

CONGRESO NACIONAL
CÁMARA DE DIPUTADOS

FEBRERO 27 DE 1935

75ª REUNION — 16ª SESION EXTRAORDINARIA

PRESIDENCIA DEL SEÑOR ANTENOR R. FERREIRA Y DE LOS DOCTORES ROBERTO J. NOBLE
Y RODOLFO COROMINAS SEGURA

MINISTROS PRESENTES: de Hacienda, doctor Federico Pinedo; de Agricultura, ingeniero Luis Dubau; DIPUTADOS PRESENTES: Alonso Alfredo J., Ameri Rogelio L., Amodeo Aurelio F., Andreis Fernando de, Aráoz Ernesto M., Aráoz Eudoro D., Aráoz José Ignacio, Basualdo Honorio, Benegas Tiburcio, Bermúdez Manuel A., Besasso Manuel V., Biancofiore Rafael, Bogliolo Rómulo, Bonazzola Carlos F., Bosaso Ansaldo Daniel, Briuolo Miguel, Bruchou Eduardo, Buitrago Pedro, Bunge Augusto, Bustillo José M., Buyán Marcelino, Cáceres Lorenzo, Candia Cornelio, Cárcano Miguel Ángel, Carreras Ernesto L. de las, Carús Agustín J., Castiñeiras Alejandro, Castro Felipe, Coca Joaquín, Cordero Octavio, Corominas Segura Rodolfo, Costa Méndez Nicanor, Courel Carlos D., D'Anna Pablo S., Degano Alfredo P., Della Latta Jerónimo, De Miguel Benito, Dickmann Enrique, Escalera Facundo, Escobar Adrián C., Espil Alberto, Fernández Damián, Ferreira Antenor R., Ganza Marcelino, García Gorostiaga Raúl, Giménez Angel M., Godoy Raúl, Gómez Rincón Abel, González Benjamín S., González Guerrico Manuel, González Naseda Manuel, Graffigna Santiago, Grisolia Luis, Groppo Pedro, Herrera Bruno J., Inda Rufino, Iribarne Alberto, Iriondo Urbano de, Jardel Enrique C., Korn Guillermo, Lamesa Juan B., Lencinas Rafael Néstor, Lima Vicente Solano, López Héctor S., Magría Amleto, Manacorda Carlos, Martínez José Heriberto, Mattos Luis María, Moret Carlos (h.), Noble Julio A., Noble Roberto J., Oddone Jacinto, Padilla Tiburcio, Palacín Manuel, Palacio Benjamín, Palmeiro José, Pena José Luis, Pérez Leirós Francisco, Pfeleger José E., Pintos Angel, Pita Carlos A., Pomponio Vicente E., Pueyrredon Carlos A., Quiroga Félix, Ramiconi Luis, Repetto Nicolás, Rodríguez Alfredo, Ruggieri Silvio L., Ruiz Oscar, Salas José Raquel, Salcedo Saturnino, Santillán Enrique, Schco Lastra Dionisio, Simón Padrós Juan, Solari Felipe C., Solari Juan Antonio, Solís Rogelio J., Speroni Daniel C., Spinetto Alfredo L., Taboada Mora Cipriano, Uriburu Francisco, Vega Abraham de la, Vicchi Adolfo A., Vidal Baigorri José, Videla Dorna Daniel, Videla Rodolfo G., Vionnet Rodolfo L., Wade Eugenio, Zarazaga Marcial J., Zerda Justiniano de la; AUSENTES, CON LICENCIA: Aguirrezabala Miguel A., Becerra Eugenio A. (h.), Buira Demetrio, Contte José A., Critto Miguel, Fresco Manuel A., Ghioldi Americo, Marcó Cipriano F., Mouésca Eduardo, Ocampo Enrique, Palacín Pedro, Parera Gregorio, Ramírez Manuel (h.), Rozas José E., Saravia José M., Sellarés Avelino; CON AVISO: Amadeo y Videla Daniel, Arnoldi Adolfo, Cafferata Juan F., Dickmann Adolfo, Garayalde José María, Guglielmelli Aquiles M., Parodi Misael J.; SIN AVISO: Acosta Guillermo, Agüero Santos, Ahumada Luis Alberto, Arce José, Arrieta Herminio, Calderón Osvaldo M., Carreras José, Dávila Miguel V., Godfrid Juan, González Valentín, Mancini Rafael, Molina Sorapio, Morrogh Bernard Juan F., Mouchet Enrique, Movsichoff Bernardo, Pressacco Juan P., Radio Pedro, Repetto Agustín, Rojas Marcos E., Ruiz Guíñazú Jacinto, Vallejo Luis A., Vignart Uberto F.; DIPUTADO ELECTO, AUSENTE SIN AVISO: Bordabehere Enzo.

SUMARIO

- 1.—Manifestaciones en minoría.
- 2.—Acta.
- 3.—Asuntos entrados:

- I.—Despacho de comisión.
- II.—Peticiones particulares.

- III.—Proyecto de ley del señor diputado Ferreira y otros, por el que se acuerda un subsidio a los agricultores de El Puestito y Los Alamos, departamento La Banda, provincia de Santiago del Estero.

- 4.—Acuérdase licencia para faltar a sesiones al señor diputado Ghioldi.

- 5.—Proyecto de resolución del señor diputado Korn por el que se solicita informes por escrito sobre la intervención a la provincia de Buenos Aires. Es aprobado.
- 6.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.
- 7.—Se considera y aprueba el despacho de las comisiones de Legislación General y de Industrias y Comercio en el proyecto de ley sobre régimen legal del petróleo e hidrocarburos fluidos.
- 8.—Proyecto de declaración del señor diputado Dickmann (E.), referente a las reservas existentes sobre petróleo, decretadas en 1934. Pasa a comisión.
- 9.—Orden de la labor de la Honorable Cámara.

10.—Se considera el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de **Banco Central**, ley de bancos, Instituto Movilizador, modificaciones a las leyes orgánicas de los bancos Hipotecario Nacional y de la Nación Argentina y ley de organización de los institutos mencionados.

—En Buenos Aires, a veintisiete días del mes de Febrero de 1935, siendo la hora 15 y 25:

1

MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Corominas Segura. — Hago moción de que se continúe llamando durante veinte minutos.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Ferreira). — Haciendo asentimiento, así se hará.

—Se continúa llamando.

2

—A la hora 15 y 46:

ACTA

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda abierta la sesión, con la presencia de 86 señores diputados.

Se va a dar lectura del acta de la sesión anterior.

—Por indicación del señor diputado Iriondo, se suprime la lectura del acta y se da por aprobada.

3

ASUNTOS ENTRADOS

I

Despacho de comisión

Las comisiones de Legislación General y de Industrias y Comercio se han expedido en el proyecto venido en segunda revisión del Honorable Senado sobre modificaciones al

Código de Minería, en lo relativo al régimen de las minas de petróleo y de hidrocarburos líquidos.

—A la orden del día.

II

Peticiones particulares

La Unión Industrial Argentina, sección artes gráficas, solicita se aplaze la consideración del proyecto de ley de jubilaciones de periodistas y gráficos. (*A la Comisión de Legislación del Trabajo*).

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para invertir la suma de \$ 20.000 m/n. c/l., en carácter de subsidio a los agricultores de El Puestito y Los Alamos, departamento La Banda (provincia de Santiago del Estero), por la destrucción de sus cosechas de algodón en una superficie de 500 hectáreas.

Art. 2º — La suma autorizada por el artículo anterior, se distribuirá proporcionalmente entre los damnificados, por una comisión compuesta por el director de Agricultura nacional destacado en Santiago del Estero y el director de Agricultura de la provincia.

Art. 3º — El gasto que demande esta ley se hará de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 4º — Comuníquese, etc.

Antenor R. Ferreira. — Alfredo Degano. — Octavio Cordero. — Eudoro D. Aráoz. — R. García Gorostiza.

Señor presidente:

El presente proyecto contempla la situación de angustia de 51 agricultores de los parajes El Puestito y Los Alamos, departamento La Banda (Santiago del Estero), por haber visto con dolor que sus plantaciones de algodón, en una extensión de 500 hectáreas más o menos, en estado de cosecha han sido arrasadas por el viento y granizo que azotó la zona el día 13 del corriente mes.

propósito de reponer fuerzas caídas, una intervención que no tenga otra finalidad que la de devolverle al pueblo el ejercicio pleno de sus garantías y derechos que han sido conculcados y respecto de cuya conculcación y de cuya supresión no se podrá levantar una voz autorizada para negarlos, porque los hechos en ciertas circunstancias son más fuertes que las palabras, que los disimulos o las hipocresías convencionales?

Por estas razones afirmo que es perfectamente procedente el pedido de informes que somete a la consideración de la Honorable Cámara la representación socialista, para que esos informes en el momento oportuno sirvan como elemento de juicio, acaso como cabeza de proceso al proyecto de intervención que nos proponemos presentar respecto del primer Estado argentino. (*Muy bien! Muy bien! Aplausos*).

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar en general el proyecto de resolución.

—Se vota y resulta afirmativa.

—Se aprueba en particular el artículo 1º.

—En consideración el artículo 2º.

Sr. Lima. — Pido la palabra.

Propondría que donde dice «vinculados a los episodios de coerción y de fuerza», dijera: «estado político e institucional de Buenos Aires, vinculado a los hechos que provocaron la intervención nacional».

Pido esta modificación, a fin de que no haya prejuzgamiento de parte de la Cámara.

Sr. Repetto (N.). — Son demasiado conocidos los hechos producidos.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿El señor diputado autor del proyecto de resolución acepta la modificación propuesta?

Sr. Korn. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar el punto segundo, con la modificación aceptada.

—Se vota: «2º» — Antecedentes reunidos durante el curso de la misma

por el interventor federal, referentes al estado político e institucional de Buenos Aires, vinculado a los hechos que provocaron la intervención nacional, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Ferreira). — Queda sancionado.

6

ORDEN DE LA LABOR

Sr. Spinetto. — Pido la palabra.

No sé si la Cámara entrará a considerar el despacho que se acaba de leer; pero como he sabido que algunos señores diputados van a formular una moción en el sentido de aplazar ese asunto, hasta que la Cámara reciba los informes que sobre cuestiones análogas y de funcionamiento de algunas sociedades se han solicitado del Poder Ejecutivo, y en el deseo de evitar que se malogre esta sesión, voy a formular moción de que se aplaze la consideración de dicho asunto, entrándose a considerar directamente la orden del día número 148, sobre asuntos económicos, creación del Banco Central, etcétera.

No es un misterio para nadie que todo el mundo está esperando la discusión y solución de estas cuestiones. El señor ministro de Hacienda desde la sesión de ayer está esperando la consideración de esos asuntos. La banca, el comercio, la industria, los centros bursátiles y financieros están pendientes de ellos, por lo que formulo la moción de que se aborde su consideración de inmediato, y, resueltos estos asuntos, se considere en primer término la cuestión del petróleo, para terminar, si es posible en estos tres días, con todos estos importantes proyectos y entrar así al receso anual correspondiente.

Si fuera necesario ampliaría la moción para que sesionemos hasta las 24 horas o hasta una hora más avanzada.

Sr. Presidente (Ferreira). — En discusión la moción de aplazamiento.

Sr. Rodríguez. — Pido la palabra.

Me opongo a la moción formulada por el señor diputado por la Capital, porque considero el asunto del petró-

leo tan fundamental para el Estado como los asuntos económicos.

Todos tenemos conciencia hecha para tratar de inmediato tan debatido asunto y todos también estamos convencidos de la necesidad imprescindible que hay de sancionar la ley del petróleo. De manera que no nos ha de llevar mucho tiempo la consideración del proyecto que viene en revisión del Senado.

Por estas razones voy a votar en contra de la moción del señor diputado por la Capital y pido a la Cámara que se avoque de inmediato —, porque así ya lo ha resuelto —, la consideración de ese asunto tan fundamental para el país.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿Mantiene su moción el señor diputado por la Capital?

Sr. Spinetto. — Sí, señor presidente.

—Después de unos momentos:

Sr. Rodríguez. — Estando en antecámaras el señor ministro de Agricultura, que es el ministro del ramo, yo pediría que se le invitase a ocupar su banca en el recinto.

Sr. Presidente (Ferreira). — Previamente se va a votar la moción de orden formulada por el señor diputado por la Capital, que consiste en postergar la consideración del asunto sobre petróleo y entrar a considerar los despachos financieros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Es curiosa, señor presidente, la situación que se plantea. La Honorable Cámara, en una de sus reuniones últimas, consideró que no había asunto más importante que el relativo al Banco Central y materias conexas, a tal punto que por proposición del señor diputado Bustillo, unánimemente aceptada, la Honorable Cámara resolvió que la Presidencia recién citara a la Cámara una vez que la comisión hubiese despachado esos proyectos, quedando entretanto, ésta sin reunirse.

Los miembros de la comisión hemos trabajado durante un mes y algunos,

que por prescripción médica debíamos haber tomado nuestras vacaciones, no lo hemos hecho para poder cumplir con nuestro deber. Hemos formulado despacho y en tal ocasión me apersoné al señor presidente y lo invité a que convocara a la Cámara para el día martes 26, en razón de que ya estaban formulados los despachos.

A todo esto, la Cámara se reunió en la sesión de ayer y trató otras cuestiones pendientes y hoy se pretende continuar con el petróleo, como mañana podrá ser la ley de educación común; y así sucesivamente, postergando indefinidamente la consideración de asuntos tan vitales.

Yo creo que la naturaleza de los asuntos financieros que están a consideración de la Cámara, obliga a encararlos clara y lealmente, porque no puede estar la situación bancaria y económica del país en esta verdadera mesa de operaciones, sin que el Congreso la aborde y la vote, ya sea en favor o en contra; pero no puede mantenerse indebidamente en esta situación transitoria todo el régimen que estos proyectos afectan.

Es tan sumamente sensata la proposición del señor diputado por la Capital, que por eso la apoyo calurosamente.

Sr. Rodríguez. — Pido la palabra.

Me doy cuenta perfectamente de la situación de espíritu del señor presidente de la Comisión de Presupuesto, que ha debido interrumpir sus vacaciones, reclamadas por su resentida salud; pero también me doy cuenta, como he dicho antes, de que el asunto del petróleo es fundamental y que no va a llevar tiempo a la Cámara. Tengo, también, la convicción, señor presidente, de que una vez discutidos los asuntos financieros, que con tanto ahínco han defendido los señores diputados, y que han de contar en su mayoría con mi voto, la Cámara no ha de reunirse para considerar el asunto relativo al petróleo, pendiente de su resolución desde hace varios años, no obstante tratarse de un asunto de importancia vital para la Nación.

Sr. Spinetto. — El mismo argumento podemos hacer en contra, diciendo que una vez tratado el petróleo, la Cámara no se va a reunir más. No se puede prejuzgar.

Sr. Rodríguez. — El señor diputado sabe que los diputados de la derecha estamos dispuestos a quedarnos en el recinto todo el tiempo que sea necesario para considerar tanto el petróleo como los asuntos financieros.

Sr. Dickmann (E.). — Pido la palabra.

En el asunto del petróleo los diputados socialistas todavía tenemos que agregar algunas consideraciones fundamentales, antes de que el proyecto se convierta en ley.

He pensado que para dar sanción definitiva a dicha ley deberíamos esperar los informes que con tanta oportunidad solicitó el señor diputado Julio A. Noble; pero no tendríamos inconveniente en entrar ahora mismo a considerar el asunto: no supeditaría la consideración del problema del petróleo a tales informes, máxime ahora en que se esgrime este asunto en favor o en contra de la sanción apresurada de los graves e importantes proyectos bancarios y monetarios.

Considero que no hay urgencia para ninguna de las dos cuestiones; ganará la Cámara y el país si se las trata con calma y tranquilidad. Nada hay en la mesa de operaciones de la Cámara; no se trata de ataques agudos, de casos de operación: se trata de asuntos que exigen profunda y serena meditación de los señores diputados.

No podríamos en este momento decidir cuál de ambas cosas urge más. Que lo resuelva la mayoría de la Cámara, ya que en ella aparece la disidencia. Advierto, sí, a los señores diputados que si se apartara ahora el asunto del petróleo, la diputación socialista pediría un cuarto intermedio hasta la sesión de mañana: aun tenemos cuestiones que considerar en el asunto que está sometido a la discusión de la Cámara. Si la mayoría decidiese abordar los asuntos bancarios y monetarios entraríamos a su debate, pero espero que la conciencia legislativa de cada diputa-

do comprenderá la importancia del pedido que hacemos de un cuarto intermedio hasta mañana.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Los señores diputados socialistas saben perfectamente bien cómo en la comisión que presido he procurado en toda forma que los proyectos monetarios y bancarios fuesen estudiados con la extensión y profundidad que exigen. He deseado en toda forma la colaboración de los grupos opositores, porque creo que este Parlamento debe prestigiarse y demostrar al país su eficiencia, haciendo una labor conjunta de todos los factores que lo integran, aunque se discrepe fundamentalmente en los proyectos y en las soluciones.

No soy de los que creen que proyectos de esta naturaleza deben votarse bajo medidas de fuerza. Me basta lo dicho por el señor diputado por la Capital, porque no creo — conociéndolo como lo conozco — que se trata de una maniobra dilatoria...

Sr. Dickmann (E.). — No, señor diputado.

Sr. Martínez. — Por eso digo que me basta la insinuación del señor diputado por la Capital de que ellos necesitan más tiempo para profundizar algunos aspectos de estos problemas, para cambiar mi punto de vista anterior y proponer que ya que la Cámara no puede entrar inmediatamente a estudiar los proyectos relativos a bancos y moneda, aproveche su tiempo tratando entonces el asunto del petróleo. Pero yo voy a modificar la moción porque no es justo que a los miembros de la Comisión de Presupuesto se nos tenga, como a San Lorenzo, sobre la parrilla. Hace tres días que estamos esperando dar el informe sobre la materia. Hago entonces moción concreta, adhiriendo a la del señor diputado por Buenos Aires, de que mañana como primer asunto se comienza a tratar los proyectos sobre bancos y moneda.

Sr. Presidente (Ferreira). — ¿Mantiene su moción el señor diputado por la Capital?

Sr. Spinetto. — La mantengo y añado una razón que me parece fundamen-

tal: el plazo de un día pedido por los señores diputados para completar la información y los detalles para entrar a la discusión de los asuntos económicos pueden tenerlo perfectamente, porque cabe afirmar que no se va a votar nada en los asuntos fundamentales bancarios y monetarios, sin un estudio serio. Por eso me parece conveniente fijar un programa formal y ordenado y de aquí a mañana hay tiempo de informarse y reunir todos los datos necesarios para una discusión profunda y amplia en la que intervendrán numerosos oradores. En esa forma contarán con tiempo suficiente para conseguir los datos que no han podido reunir hasta ahora, a pesar de la laboriosidad que se ha demostrado y que reconocemos.

Insisto, por lo tanto —, y el señor ministro de Hacienda estoy seguro estará de acuerdo — en que entremos a considerar la orden del día 148, sobre asuntos económicos, y votemos la cuestión del petróleo inmediatamente.

No modifica en nada mi moción.

Sr. Rodríguez. — Pido la palabra.

En la sesión celebrada el 31 de Enero, la Cámara resolvió por unanimidad tratar en la primera sesión que realizara, los asuntos del petróleo. Ayer se trataron los despachos sobre obras sanitarias y jubilaciones ferroviarias. Fue desplazado el petróleo para tratarlo hoy con o sin despacho de comisión, de acuerdo a una pregunta que formulara el señor diputado Repetto. La comisión ha producido despacho sobre petróleo, que se encuentra en la mesa de la Presidencia.

Por estas razones, creo que corresponde tratar de inmediato el asunto del petróleo.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar la moción de aplazamiento del despacho sobre petróleo, para entrar a considerar de inmediato los asuntos económicos.

—Se vota y resulta negativa.

Sr. Presidente (Ferreira). — Corresponde tratar el despacho sobre petróleo.

Sr. Martínez. — Si hoy no se tratan los despachos sobre bancos y moneda, propongo que se traten mañana, como primer asunto.

Sr. Corominas Segura. — A continuación del despacho sobre petróleo, deben tratarse los despachos sobre bancos y moneda.

Sr. Presidente (Ferreira). — Se va a votar la proposición de que inmediatamente de terminado el despacho sobre petróleo se traten los asuntos monetarios y bancarios.

—Resulta afirmativa.

7

REGIMEN LEGAL DEL PETROLEO E HIDROCARBUROS FLUIDOS

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación General e Industrias y Comercio han considerado el proyecto de ley venido en segunda revisión del Honorable Senado sobre modificaciones al Código de Minería en lo relativo al régimen de las minas de petróleo e hidrocarburos fluidos; y, por las razones que dará el miembro informante aconsejan a vuestra honorabilidad:

1º — No insistir con respecto al artículo 394 (nuevo) de la sanción de vuestra honorabilidad.

2º — Insistir en el artículo 403 de la sanción de vuestra honorabilidad.

Salá de la comisión, Febrero 27 de 1935.

Carlos D. Courel. — Santiago Grafigna. — Ernesto M. Ardoz. — Enrique C. Jardel. — Adolfo A. Vicchi. — Roberto J. Noble. — Urbano de Iriondo. — Rodolfo L. Vionnet. — Luis Grisolia.

—En disidencia con respecto al artículo 394 votado anteriormente por la Honorable Cámara de Diputados cuya insistencia aconsejan.

Manuel Palacin. — Miguel Briuolo. — Silvio L. Ruggieri. — Daniel Bosano Ansaldo.

Sr. Presidente (Ferreira). — En consideración.

Sr. Presidente (Corominas Segura). — Habiendo terminado este asunto, corresponde considerar la orden del día 148.

9

ORDEN DE LA LABOR

Sr. Dickmann (E.). — Señor presidente: Nuestro bloque pide un cuarto intermedio hasta mañana.

Sr. Presidente (Corominas Segura). — La Cámara decidirá.

Se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio hasta mañana.

—Se vota y resulta negativa.

10

PROYECTOS SOBRE BANCOS Y MONEDA

(Orden del Día número 148)

Honorable Cámara:

La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha tomado en consideración los proyectos de ley pasados en revisión por el Honorable Senado, relativos al Banco Central de la República Argentina, ley de Bancos, Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, modificaciones a las leyes orgánicas del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional y ley de organización; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja prestéis vuestra aprobación a los siguientes proyectos de ley:

I

Banco Central de la República Argentina

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Creación y objeto del Banco Central

Artículo 1º — Créase el Banco Central de la República Argentina por el término de cuarenta años.

Art. 2º — El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Podrá establecer

sucursales o agencias o nombrar corresponsales por resolución de su directorio.

Art. 3º — El Banco tendrá por objeto:

- a) Concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de la fluctuación en las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el valor de la moneda;
- b) Regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios;
- c) Promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario; y aplicar las disposiciones de inspección, verificación y régimen de los bancos establecidos en la ley de bancos;
- d) Actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de los empréstitos públicos.

Capital y subscripción de acciones

Art. 4º — El capital originario del Banco será de 30.000.000 de pesos moneda nacional, dividido en 30.000 acciones de 1.000 pesos moneda nacional cada una.

Las acciones serán nominales y estarán registradas en el mismo Banco, y solamente podrán transferirse con el consentimiento de éste, sin que pueda exigírsele que exprese las razones que tiene para denegar cualquier transferencia. En caso de negarse una transferencia el tenedor podrá exigir que el Banco compre las acciones al valor nominal, reduciendo correlativamente el capital.

Art. 5º — Al constituirse el Banco Central, el gobierno nacional subscribirá 10.000.000 de pesos moneda nacional de acciones. Los bancos nacionales y extranjeros establecidos en la Argentina, que tengan un capital subscripto no inferior a 1.000.000 de pesos moneda nacional deberán subscribir a la par una cantidad de acciones proporcional a su capital realizado hasta completar la suma de 10.000.000 de pesos moneda nacional.

Ningún Banco, institución o persona podrá ser accionista por un valor nominal superior a la quinta parte del capital subscripto por los bancos.

Art. 6º — Los 10.000.000 de pesos moneda nacional del capital que no se subscriben en el momento de la organización del Banco, quedarán a disposición de éste para ser subscriptos de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

Art. 7º — Los bancos que se establezcan en la Argentina y que tengan un capital no inferior a 1.000.000 de pesos moneda nacional, o que aumenten su capital hasta un mínimo de 1.000.000 de pesos moneda nacional, y los bancos accionistas que aumenten su capital, podrán ser requeridos por el Banco Central para suscribir acciones al precio que fije el directorio, a la par o arriba de ella, teniendo en cuenta las reservas acumuladas, y en la misma proporción que la adoptada para la subscripción originaria. El Banco Central queda autorizado para aumentar su capital con este objeto en caso de no ser suficientes los 10.000.000 de pesos moneda nacional destinados a este fin en el artículo 6º, siempre que el gobierno no resuelva vender sus acciones para permitir la subscripción susodicha, o si posteriormente a esta venta lo juzgara conveniente por las razones expresadas en el presente artículo.

Art. 8º — Las acciones del Banco no podrán ser dadas en garantía de préstamo o con otros fines, salvo en casos especiales y sólo con el consentimiento previo y escrito del Banco Central. El presente artículo deberá transcribirse en el dorso de cada acción.

Directorio

Art. 9º — El Banco tendrá un directorio compuesto de un presidente, un vicepresidente y doce directores.

Art. 10. — El presidente y vicepresidente serán argentinos y personas de reconocida experiencia bancaria y financiera, y serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado dentro de las ternas elegidas por la asamblea de bancos accionistas. Durarán siete años en sus funciones y podrán ser reelectos.

El presidente y el vicepresidente deberán dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco, y mientras estén en ejercicio no podrán ocupar otro cargo, remunerado o no.

Tendrán derecho a percibir los sueldos o asignaciones que el directorio determine periódicamente, con la confirmación de la asamblea de los bancos accionistas; pero en ningún caso podrán ser remunerados total o parcialmente

bajo forma alguna de comisión, ni los sueldos o asignaciones que los sean pagados podrán determinarse en relación a las utilidades del Banco.

El presidente y vicepresidente del Banco Central sólo podrán ser separados de sus cargos por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes, conforme al procedimiento establecido para el juicio político.

Art. 11. — Si el presidente o el vicepresidente falleciera o renunciara o en alguna otra forma dejara vacante el cargo antes de cumplirse el período para el cual fué designado, se nombrará a otra persona en la forma establecida en el artículo 10 para ejercer dicho cargo durante el resto del período.

Art. 12. — De los doce directores, uno será elegido por el Poder Ejecutivo; uno por el Banco de la Nación Argentina; seis por los sectores en que se dividirá al efecto la asamblea de los bancos accionistas en la siguiente forma: uno por los representantes del Banco de la Provincia de Buenos Aires y demás bancos provinciales o mixtos del país que fueran accionistas, tres por los representantes de los bancos nacionales y dos por los representantes de los bancos extranjeros; y cuatro elegidos por toda la asamblea de bancos accionistas — a propuesta del directorio y previa consulta de éste con entidades representativas —, entre personas de reconocida experiencia, capacidad y prestigio que deberán ser: un agricultor, un ganadero, un comerciante y un industrial. Ninguna de estas cuatro personas podrá ser director o empleado de Banco. Tampoco podrán formar parte del directorio simultáneamente más de tres extranjeros.

Art. 13. — Los directores elegidos de acuerdo con el artículo 12, durarán tres años en su cargo y podrán ser reelectos, excepto los nombrados por los bancos extranjeros que no podrán serlo sino con intervalo de un período.

Los directores elegidos por los bancos extranjeros serán de diferente nacionalidad, y los bancos de donde proviniesen no podrán ser de un mismo país de origen.

Art. 14. — Si algún miembro del directorio, con excepción del presidente o vicepresidente, falleciese o renunciase o en alguna otra forma dejase vacante su cargo antes de terminar el período para el cual fué designado, se procederá a elegir a otro director en la forma esta-

blecida en el artículo 12 para completar el período.

Art. 15. — No podrán ser elegidos ni continuar como miembros del directorio:

- a) Los empleados o funcionarios de cualquier repartición del gobierno, salvo el primer director a que se refiere el artículo 12, que podrá ser funcionario nacional, y el siguiente que podrá ser funcionario del Banco en cuestión; y los que tuviesen otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquier otra forma que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos federal, provinciales o municipales;
- b) Los insolventes y deudores morosos de cualquiera de los bancos accionistas;
- c) Las personas que hubiesen sido condenadas por delitos comunes.

Art. 16. — Los miembros del directorio actuarán en forma honoraria excepto en el caso previsto en el artículo 18.

Art. 17. — El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, ejercerá en representación del directorio la dirección del Banco, y estará autorizado para actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados a la decisión de la asamblea de bancos accionistas; será al mismo tiempo el representante legal del Banco en todas sus relaciones con terceros.

Art. 18. — El presidente, si lo juzgara conveniente, podrá constituir una comisión consultiva formada por el vicepresidente y dos directores designados por el directorio por un año y reelegibles, de los cuales por lo menos uno deberá ser banquero. La comisión consultiva se reunirá por lo menos una vez por semana. El directorio podrá fijar una remuneración para esos dos directores que deberá ser confirmada por la asamblea de bancos accionistas.

Art. 19. — El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, convocará a las reuniones del directorio cuando lo juzgue conveniente, y por lo menos una vez cada quince días. Siete miembros formarán quórum, y salvo disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente o en su caso el vicepresidente, tendrá doble voto.

Art. 20. — El directorio ejercerá la vigilancia de las operaciones del Banco, y sus atribuciones y deberes serán principalmente los siguientes:

- a) Intervenir en la reglamentación y administración del Banco, aprobar el presupuesto anual de sueldos y gastos, y nombrar, promover y separar de sus puestos a los empleados;
- b) Establecer y clausurar sucursales y agencias;
- c) Nombrar corresponsales en el país y en extranjero, reglamentando sus relaciones con el Banco;
- d) Fijar las condiciones generales y los límites de las distintas operaciones autorizadas por esta ley;
- e) Fijar tasas de redescuento e interés;
- f) Adquirir los inmuebles necesarios para las operaciones del Banco y enajenar los inmuebles adquiridos de acuerdo con el artículo 34, inciso h);
- g) Revisar periódicamente, por lo menos una vez cada seis meses, todos los redescuentos y adelantos;
- h) Aprobar las renovaciones y substituciones de letras de cambio y pagarés de acuerdo con el artículo 34, inciso i);
- i) Resolver sobre la transferencia o caución de acciones del Banco de acuerdo con los artículos 4º y 8º;
- j) Nombrar la comisión consultiva cuando lo solicite el presidente;
- k) Nombrar la o las comisiones de redescuento;
- l) Redactar la memoria anual y presentar el balance y cuenta de ganancias y pérdidas a la asamblea de bancos accionistas.

Asambleas de Bancos Accionistas

Art. 21. — La asamblea ordinaria de bancos accionistas que será convocada por el directorio una vez cada año, se efectuará dentro de los primeros tres meses del ejercicio financiero.

Tres semanas antes de la fecha fijada para la asamblea ordinaria se enviará una citación a cada Banco accionista con el orden del día y el detalle de los asuntos a tratarse.

Toda moción que los accionistas deseen someter a la asamblea deberá comunicarse al

directorio dentro del mes siguiente a la terminación del ejercicio financiero y acompañarse con una exposición de los motivos en que se funda.

Art. 22. — Las asambleas extraordinarias de bancos accionistas se convocarán con dos semanas de anticipación por lo menos, cuando el directorio lo estime conveniente, o cuando lo requiera por escrito un número de bancos accionistas que represente por lo menos una tercera parte de los votos, de acuerdo con el artículo 23.

Estas peticiones deberán exponer siempre las razones que las motivan con indicación de las mociones que serán sometidas a la asamblea.

Las asambleas extraordinarias que convoque el directorio a pedido de los bancos accionistas, se efectuarán dentro de los 30 días de recibida la petición correspondiente por el directorio.

Art. 23. — Las asambleas serán presididas por el presidente, en su ausencia por el vicepresidente, y en ausencia de éste por el síndico.

Cada acción tiene un voto; pero ningún accionista podrá reunir un número de votos que constituya más de la décima parte del capital subscrito por los bancos.

La misma persona no podrá representar más de un Banco accionista en las asambleas.

Art. 24. — Son atribuciones de la asamblea de bancos accionistas:

- a) Discutir, aprobar o modificar las cuentas anuales y la memoria del directorio;
- b) Resolver sobre la distribución de las sumas que se asignarán al fondo de reserva general y al fondo de reserva especial si se dispone crearlo;
- c) Resolver el reparto del dividendo anual;
- d) Elegir las ternas de candidatos para presidente y vicepresidente que deben ser presentados al Poder Ejecutivo y elegir los directores a que se refiere el artículo 12;
- e) Resolver sobre los sueldos y asignaciones del presidente, vicepresidente y los dos miembros del directorio que integran la comisión consultiva;
- f) Deliberar sobre todo otro asunto incluido en el orden del día;
- g) Fijar la remuneración del síndico.

Todas las resoluciones de las asambleas, salvo disposición contraria, serán adoptadas por simple mayoría de votos.

Comisiones de redescuento

Art. 25. — El directorio nombrará una comisión de redescuento para la Casa Central, y en caso necesario para cualquier sucursal del Banco, encargada de examinar todos los documentos presentados para su redescuento, adquisición o a título de garantía de adelantos. El número de personas que formará cada comisión será fijado por el directorio.

Art. 26. — Los miembros de las comisiones de redescuento serán personas conocedoras de las condiciones financieras, comerciales, industriales o agropecuarias del país. Serán nombrados por un período de dos años y no podrán ser reelectos más de la mitad de sus miembros.

Cuando se proceda por primera vez a la designación de los integrantes de alguna comisión de redescuento, la mitad de los miembros será nombrada por un período de un año. No podrán ser miembros de las comisiones de redescuento, los miembros del directorio, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, socios o agentes, ni las personas que se encuentren comprendidas en las disposiciones del artículo 15.

Art. 27. — El cargo de miembro de las comisiones de redescuento será honorario, pero el directorio podrá autorizar el reembolso de los gastos incurridos por dichos miembros en el desempeño de sus funciones.

Art. 28. — Las deliberaciones de las comisiones de redescuento serán secretas.

Ningún miembro de una comisión de redescuento expresará opiniones ni votará respecto de letras o documentos en los cuales tuviere algún interés; y deberá retirarse de la sesión mientras tales letras o documentos estuvieran en consideración.

Art. 29. — La Comisión de Redescuento de la Casa Central será presidida por el funcionario que designe el directorio. En las sucursales, las reuniones de la Comisión de Redescuento serán presididas por el gerente de la sucursal.

El directorio del Banco determinará el número para formar quórum.

Art. 30. — Las resoluciones que aprueban o rechazan letras u otros documentos serán adoptadas por simple mayoría de votos, y en caso de

empate el presidente de la comisión tendrá doble voto.

Art. 31. — El Banco no estará obligado a descontar letras o aceptar valores aprobados por la Comisión de Redescuento. Las letras u otros valores que hubiesen sido rechazados por la Comisión de Redescuento podrán ser aceptados por el Banco, siempre que sean aprobados por el directorio, con el voto de siete directores.

Operaciones del Banco

Art. 32. — El Banco podrá, en las condiciones que fije el directorio:

- a) Emitir billetes de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- b) Comprar y vender oro;
- c) Recibir dinero en depósito en cuenta corriente, que no devengue interés;
- d) Redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de operaciones comerciales relacionadas con la negociación de mercaderías, que lleven por lo menos dos firmas solventes, de las cuales una sea bancaria, vengzan a más tardar dentro de los 90 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que reúnan las condiciones anteriores, pero tengan tres o más firmas solventes, de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de este inciso;
- e) Redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de operaciones relacionadas con la producción, elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales, que lleven por lo menos dos firmas, de las cuales una sea bancaria, vengzan a más tardar dentro de los 180 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que reúnan las condiciones anteriores, pero vengzan en un plazo má-

ximo de 90 días a contar de la fecha de su redescuento o lleven por lo menos tres firmas solventes, de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de este inciso;

- f) Acordar adelantos a los bancos accionistas, por un plazo fijo que no podrá exceder de 90 días, cobrándoles una tasa de interés superior en un punto por lo menos a la tasa oficial mínima del Banco Central para el redescuento de documentos a 90 días vista, sobre los siguientes valores:

1º Letras de cambio y pagarés que reúnan las condiciones establecidas en los incisos d) o e) de este artículo, y hasta la concurrencia del 80 % de su valor nominal;

2º Valores del gobierno nacional cotizados en el mercado, siempre que el importe del adelanto no exceda del 80 % de la cotización en la Bolsa de dichos valores y que el total de tales adelantos conjuntamente con los valores nacionales de propiedad del Banco (excluidos los bonos consolidados del tesoro nacional) no supere el límite a que se refiere el artículo 34, inciso b);

- g) Acordar adelantos sobre oro amonedado o en barras hasta el 95 % de su valor;
- h) Comprar y vender divisas o cambio extranjero;
- i) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales o del Banco Internacional de Ajustes, o de otra entidad que pueda formarse con propósitos análogos de cooperación internacional;
- j) Encargarse de la emisión, compra y venta de valores del gobierno nacional, por cuenta exclusiva de éste; y sin que el Banco pueda suscribir tales valores ni garantizar su colocación;
- k) Administrar la Cámara Compensadora en Buenos Aires y en otras plazas;
- l) Vender a los otros bancos o volver a comprar de los mismos los bonos consolidados del tesoro nacional recibidos

o adquiridos por el Banco en virtud del artículo 7º de la ley de organización y los valores nacionales adquiridos de acuerdo con el artículo 34, inciso b), última parte.

Art. 33. — El Banco publicará en forma permanente las tasas de redescuentos y adelantos. Bajo ningún concepto efectuará redescuentos o adelantos a tasas menores que las fijadas.

Art. 34. — Queda prohibido al Banco:

- a) Emitir billetes de denominación de cinco pesos moneda nacional y menores;
- b) Conceder préstamos al gobierno nacional, ya sea en forma de redescuentos, descuentos, adelantos, créditos en descubierto, compra de letras de tesorería, títulos u otros valores del mismo, o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de:

1º Las operaciones autorizadas en los artículos 32, inciso f), ítem 2, y 44;

2º La adquisición de valores nacionales, que en ningún caso podrá exceder del monto del capital del Banco, sus reservas y el importe amortizado de los bonos consolidados del tesoro nacional recibidos o adquiridos por el Banco en virtud del artículo 7º de la ley de organización;

3º El redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de servicios públicos, que pertenezcan total o parcialmente a la Nación, siempre que los documentos reúnan las condiciones establecidas en el artículo 32, inciso d) o e) y que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de la Nación;

c) Conceder, en circunstancia alguna, a las provincias, municipalidades o reparticiones autónomas dependientes de las mismas, préstamos directos o indirectos en la forma de redescuentos, descuentos, adelantos, créditos en descubierto, o compra de letras, valores o

títulos o en cualquiera otra forma, sin perjuicio del redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de servicios públicos, que pertenezcan total o parcialmente a las provincias o municipalidades, siempre que los documentos reúnan las condiciones establecidas en el artículo 32, incisos d) o e) y que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de las provincias o municipalidades;

d) Garantizar o endosar letras u otras obligaciones del gobierno nacional, provincias, municipalidades, reparticiones autónomas o instituciones similares;

e) Participar directa o indirectamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;

f) Comprar acciones, salvo las del propio Banco en el caso del artículo 4º y las del Banco Internacional de Ajustes o de otra entidad que pueda fundarse con propósitos análogos de cooperación internacional; o conceder préstamos con la garantía de acciones de cualquier índole;

g) Conceder adelantos sin garantía u otorgar créditos en descubierto; salvo en el caso de convenios de créditos recíprocos concertados con otros bancos centrales;

h) Comprar bienes raíces, salvo los que fuesen necesarios para que el Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar mercaderías; y conceder adelantos que tuviesen por garantía bienes raíces o hipotecas. Si en la opinión del directorio corriera peligro algún crédito concedido por el Banco, éste podrá tomar las medidas necesarias para asegurar sus derechos sobre los bienes raíces o mercaderías del deudor, y podrá adquirir tales bienes raíces o mercaderías, pero estará obligado a revenderlos tan pronto como le sea posible;

i) Conceder la renovación o sustitución de letras de cambio o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en garantía por el Banco, salvo en casos excepcionales, en los cuales el directorio podrá autorizar por una sola vez su renovación o sustitución, y por un período que no exceda de 90 días.

Emisión de billetes y garantía metálica

Art. 35. — Durante todo el período para el cual ha sido constituido, el Banco tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la República Argentina, excepto la moneda subsidiaria a que se refiere el artículo 4º de la ley de organización; y ni el gobierno nacional, ni los gobiernos de las provincias, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes u otros documentos que fuesen susceptibles de circular como papel moneda.

Art. 36. — El Banco se hará cargo de todos los billetes de denominaciones superiores a cinco pesos moneda nacional ya emitidos por la Caja de Conversión y los reemplazará por una emisión nueva de billetes del Banco Central.

La emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria de denominaciones de cinco pesos e inferiores (inclusive las monedas de níquel y cobre), a cargo del gobierno nacional, se hará exclusivamente a solicitud y por intermedio del Banco Central, conforme a las necesidades del público; pero en ningún caso podrá exceder de 20 pesos moneda nacional por habitante, de acuerdo con los cálculos anuales de la Dirección General de Estadística de la Nación.

La mitad de la emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria será efectuada mediante el simple canje de una cantidad igual de billetes del Banco Central, cancelándose en forma simultánea una parte equivalente del bono sin interés a que se refiere el artículo 4º de la ley de organización; la otra mitad se entregará directamente y sin canje alguno al tesoro nacional previa deducción del costo de la operación. Una vez cancelado totalmente dicho bono, toda emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria se entregará directamente y sin canje alguno al tesoro nacional y a su exclusivo costo.

Art. 37. — Los billetes serán de las denominaciones superiores a cinco pesos que fije el directorio.

Art. 38. — Los billetes del Banco tendrán curso legal en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en los mismos.

Art. 39. — El Banco mantendrá en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valor del peso, ya sea en oro, divisas o cambio extranjero, equivalente al 25 % como mí-

nimo de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista.

El oro y las divisas o cambio extranjero deberán hallarse libres de todo gravamen y pertenecer en propiedad al Banco sin restricción alguna; y de las divisas o cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto, o sea el remanente libre después de deducidas todas las obligaciones en oro y divisas o cambio extranjero.

Si en un ejercicio determinado, la reserva en relación a los billetes y obligaciones a la vista hubiera sido inferior al 33 % durante 60 días seguidos o 90 días en el total del ejercicio, no se abonará dividendo a los bancos accionistas y los beneficios correspondientes serán destinados al Fondo de Reserva General.

Art. 40. — En ningún caso el Banco podrá tener divisas o cambio extranjero por más del 20 % de las reservas; ni computarlas dentro de las mismas por más del 10 por ciento.

Art. 41. — El Banco estará obligado a cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores al valor en moneda nacional de una barra típica de oro de kilogramos 12,441 (400 onzas «troy»), por oro o, a opción del Banco, por divisas o cambio extranjero.

La tasa que regirá para el canje de billetes por cambio extranjero, o viceversa, no podrá variar en más del 2 % arriba o abajo de la par.

Relaciones con los bancos

Art. 42. — Los bancos nacionales o extranjeros que operen en el país con un capital no inferior a \$ 1.000.000 moneda nacional, deberán mantener en todo momento en el Banco Central los dos tercios del efectivo mínimo que determina la ley de bancos en relación a la magnitud de sus depósitos. Estos fondos formarán la base del sistema de la Cámara Compensadora que el Banco Central administrará en Buenos Aires, y en las otras plazas; pero en caso de que llegase a reducirse a menos del límite legal el efectivo de cualquier Banco, éste deberá reponer de inmediato la diferencia. El Banco Central queda facultado para convenir con el Banco de la Nación Argentina el depósito en las sucursales de éste del efectivo que deben depositar en el Banco Central los bancos del interior y del que deseen depositar las sucursales en el interior como parte integrante del efectivo que corresponda depositar en el Banco Central a los bancos a que pertenecen.

Relaciones con el gobierno

Art. 43. — El gobierno nacional encargará al Banco de todas sus remesas, cambios y transacciones bancarias, tanto en el interior del país como en el extranjero. Los fondos del gobierno nacional serán depositados en el Banco Central. Los depósitos judiciales seguirán efectuándose en el Banco de la Nación Argentina. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, pudiendo excluir de sus disposiciones a las reparticiones autónomas y a los depósitos de garantía, efectuados para intervenir en licitaciones públicas.

Art. 44. — El Banco podrá hacer adelantos, por tiempo limitado al gobierno nacional, para cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación hasta una cantidad que no exceda del 10 % del promedio de los recursos en efectivo que éste haya obtenido en los tres últimos años; todos los adelantos hechos por este concepto deberán ser reembolsados dentro de los doce meses de efectuados; y si cualquier adelanto de esta naturaleza quedase impago después de aquel plazo, no podrá volver a usarse la facultad del Banco para hacer ulteriores adelantos de esta clase en los años subsiguientes hasta que las cantidades adeudadas hayan sido pagadas. Sobre esos adelantos, el gobierno pagará un interés no mayor que el tipo mínimo del redescuento en vigor.

Art. 45. — El Ministerio de Hacienda de la Nación informará trimestralmente al Banco Central acerca del movimiento de la Tesorería, desenvolvimiento de la recaudación y los gastos, estado de la deuda y demás informaciones relativas a la situación financiera.

Art. 46. — El Banco abrirá una cuenta general para la Tesorería General de la Nación, a la cual acreditará todas las recaudaciones de cualquier clase que sean, y todos los adelantos hechos al gobierno, y sólo hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas subsidiarias por orden de la Tesorería y con intervención de la Contaduría General de la Nación.

Art. 47. — El Banco recibirá fondos del gobierno nacional y efectuará pagos por cuenta del mismo, sin percibir remuneración por tales servicios. Conforme a lo dispuesto para todos los depósitos, el Banco no pagará ningún interés sobre las cantidades depositadas en las cuentas del gobierno.

Art. 48. — Las relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Art. 49. — En las localidades donde no tenga sucursal, el Banco Central podrá designar al Banco de la Nación Argentina en calidad de agente para el cobro y pago de fondos del gobierno nacional.

Art. 50. — La sede del Banco y la de sus sucursales, las operaciones que efectúe y los dividendos sobre sus acciones, estarán exentos de todo impuesto o contribución nacional, provincial o municipal, así como también, del sellado en las actuaciones judiciales, operaciones y gestiones judiciales y administrativas que el Banco efectúe ante las autoridades correspondientes o tribunales de cualquier jurisdicción.

Utilidades

Art. 51. — Al cierre de cada ejercicio, y después de deducidas las reservas que se juzgue necesario por deudas incobrables y de cobro dudoso, y efectuada la amortización del activo, se destinará el 20 % de las utilidades líquidas al fondo de reserva general hasta que éste alcance un monto equivalente al 25 % del capital subscrito. Una vez alcanzado este monto, se destinará al Fondo de Reserva General el 10 % de las utilidades líquidas hasta que éste se eleve a una cantidad equivalente al capital subscrito. Del resto, sujeto siempre a las disposiciones del artículo 39, se pagará a los accionistas un dividendo no mayor del 5 % anual sobre el capital en acciones. Del saldo restante se tomará un 10 % para el Fondo de Reserva General del Banco y el resto se acreditará a la cuenta del gobierno nacional.

Cuentas y estados

Art. 52. — El ejercicio financiero del Banco durará un año. Dentro de los 20 días de su cierre, el Banco preparará y publicará su balance y cuenta de ganancias y pérdidas al día del cierre. La memoria anual del Banco será publicada por el directorio antes de la fecha de la asamblea anual.

Art. 53. — Inmediatamente después del día 15 y después del último día de cada mes, el Banco deberá preparar y publicar un estado

de su activo y de su pasivo al cierre de los negocios en los días indicados. Este estado se ajustará a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Disposiciones generales

Art. 54. — Durante el término que fija el artículo 1º, las relaciones que esta ley establece entre el Banco Central y los bancos, las disposiciones referentes a los préstamos directos o indirectos a los gobiernos y la composición del directorio y de las asambleas, no podrán ser modificadas sin la aprobación de los bancos accionistas dada en una asamblea extraordinaria convocada expresamente al efecto.

Art. 55. — Las funciones de síndico serán desempeñadas por uno de los siguientes funcionarios que el Poder Ejecutivo designará anualmente; miembros del Tribunal de Cuentas o procurador del Tesoro. La remuneración del síndico será fijada por la asamblea con las mismas restricciones establecidas en el último párrafo del artículo 10.

Art. 56. — La Inspección General de Justicia se limitará a intervenir en las asambleas con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones respectivas de la presente ley.

Disposiciones transitorias

Art. 57. — El primer vicepresidente del Banco cesará en su mandato después de cinco años de servicios. De los primeros directores, cuatro cesarán en su mandato después de un año, y cuatro después de dos años de servicios, determinándose el orden de su retiro por sorteo; y sin que se aplique, en las elecciones que deberán hacerse para llenar las vacantes, la restricción del artículo 13 relativa a la reelección de los directores elegidos por los bancos extranjeros.

Art. 58. — Hasta tanto no se disponga por ley especial, no entrarán en vigor las prescripciones del artículo 41.

Art. 59. — Los empleados y obreros sujetos al régimen de las leyes de jubilaciones y pensiones civiles o de otras leyes nacionales que se incorporen al Banco Central, podrán optar en el primer año de su funcionamiento, entre seguir bajo el régimen de aquellas leyes o acogerse a la de jubilaciones bancarias.

Art. 60. — En todo cuanto no está previsto en esta ley regirán supletoriamente las dispo-

siciones de la ley de bancos y del Código de Comercio.

Quedan derogadas las disposiciones de otras leyes, en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 61. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

II

Ley de bancos

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Régimen de la ley de Bancos

Artículo 1º — Ninguna persona de existencia visible o ideal podrá desenvolver actividades en el territorio de la República que dependan principalmente de la aceptación de depósitos a la vista o a plazos, ni usar en su razón social, firma comercial o título, las palabras Banco, banquero o bancario, ni abrir sucursales con el mismo calificativo, sin previa autorización del Poder Ejecutivo, que sólo la concederá después de oír al Banco Central y verificar que se ha cumplido con las condiciones de la presente ley y las prescripciones pertinentes de la ley de creación del Banco Central.

La autorización del Poder Ejecutivo nacional no será necesaria en los casos de bancos oficiales de las provincias.

Proporción mínima entre los depósitos y el efectivo

Art. 2º — Los bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros establecidos en la Argentina, deberán mantener en todo momento en el país un efectivo que represente por lo menos el 16 % de sus depósitos a la vista y el 8 % de sus depósitos a plazo. Los bancos que tienen un capital no inferior a un millón de pesos moneda nacional tendrán que mantener los dos tercios por lo menos de dicho efectivo en depósitos a la vista en el Banco Central y el saldo hasta completar el efectivo mínimo fijado, deberá consistir en moneda, sea en billetes o metálico.

Art. 3º — El Banco Central podrá eximir transitoriamente a cualquier Banco y cuando mediaran razones circunstanciales, de la obliga-

ción de efectivo mínimo prescripta por el artículo anterior; pero mientras dure esta exención el Banco en cuestión no podrá repartir beneficios sin autorización del Banco Central; si dentro de los dos años no hubiera cumplido con las disposiciones del artículo 2º, o no hubiera podido presentar un plan que mereciera la aprobación del Banco Central, será liquidado de acuerdo con las disposiciones de esta ley y del Código de Comercio.

Operaciones prohibidas a los bancos

Art. 4º — Queda prohibido a los bancos:

- a) Comprar o conservar en forma permanente la propiedad de bienes raíces que no fueren necesarios para el uso del Banco y sus sucursales. En cuanto a los inmuebles para el propio uso de un Banco, o las acciones u obligaciones de la entidad a que pertenecen los inmuebles en cuestión, deberá someterse a la aprobación del Banco Central un plan gradual de amortización del importe que excediese del 20 % del capital y el 50 % de las reservas del Banco. En lo concerniente a los inmuebles de propiedad de los bancos en la fecha de la ley que no se destinasen a su propio uso, también deberá someterse al Banco Central un plan gradual de liquidación o amortización de los mismos. Cualquier Banco que recibiese bienes raíces en pago de deudas o que los adquiriese en defensa de créditos, tendrá que vender los mismos dentro del plazo de 4 años que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio;
- b) Tener acciones dos años después de su adquisición, excepto lo dispuesto en el inciso anterior; y guardar en cartera, después del mismo plazo, obligaciones que representen más del 20 % del capital de cada una de las entidades que las emitieron y más del 10 % del capital y 25 % de las reservas del Banco; en cuanto a las acciones u obligaciones que en la fecha de esta ley estuvieran fuera de las disposiciones de este inciso, los bancos deberán someter a la

aprobación del Banco Central un plan gradual de liquidación de las mismas. Cualquier Banco que recibiese acciones u obligaciones en pago o defensa de sus créditos tendrá para ajustarse a dichas disposiciones un plazo de 3 años que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con aprobación de las dos terceras partes de su directorio;

- c) Participar directamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase. Las participaciones que los bancos tuviesen en la fecha de la ley o adquiriesen después en pago o defensa de sus créditos, deberán ser liquidadas en la misma forma y plazos que los inmuebles;
- d) Tomar a su cargo la administración de los bienes de sus deudores morosos por un plazo mayor de dos años que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio;
- e) Aceptar de otro Banco acciones del mismo a título de garantía.

Depósitos

Art. 5º — A los efectos de la presente ley, depósitos a la vista significa y comprende a todas las obligaciones pagaderas dentro de 30 días, o sujetas a un aviso previo a su pago menor de 30 días; el término depósito a plazos comprende a todas las obligaciones — con inclusión de los depósitos de ahorro sujetos a lo dispuesto en el artículo 8º, — pagaderas después de 30 días o sujetas a un aviso previo a su pago no menor de 30 días.

Art. 6º — El interés que pagarán los bancos sobre depósitos a la vista será inferior por lo menos en 3 puntos, al tipo de redescuento mínimo del Banco Central; sobre depósitos de ahorro el interés será inferior por lo menos en 1 punto a dicho tipo de redescuento.

Art. 7º — El excedente de los depósitos de ahorro sobre la cantidad de \$ 20.000 moneda nacional, por persona, no devengará interés alguno. En el caso de las sociedades cooperativas y asociaciones mutualistas podrá pagarse interés hasta \$ 50.000 moneda nacional.

Art. 8º — Los bancos no admitirán depósitos de ahorro con la obligación de restituirlos sin previo aviso mínimo de 30 días; pero podrán

devolverlos en cualquier momento y cantidad, sin requerir preaviso; y en todo caso deberán hacerlo para cantidades mínimas y pequeños depósitos, según la reglamentación que deberá dictar el Banco Central.

Art. 9º — En caso de liquidación de un banco, los depósitos de ahorro hasta \$ 5.000 m/n. tendrán privilegio sobre la generalidad de sus bienes muebles después de las otras categorías de créditos privilegiados que enumeran los códigos de Comercio y Civil y la ley de quiebras. El mismo privilegio tendrán los depósitos de las sociedades cooperativas y asociaciones mutualistas hasta \$ 10.000 moneda nacional.

Balances e informes

Art. 10. — Todo Banco deberá publicar dentro de los 60 días de la fecha de cierre de su ejercicio financiero, en los formularios prescriptos por el Banco Central y siempre con anticipación a la realización de su asamblea ordinaria anual:

- 1º Su balance general;
- 2º Su cuenta de ganancias y pérdidas.

El balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas llevará el visto bueno de un contador público nacional.

Art. 11. — Todo Banco establecido en el país deberá presentar mensualmente al Banco Central un estado confidencial sobre sus operaciones, en el formulario que aquél determinará y tendrá la obligación de suministrar al Banco Central cualquier ulterior información aclaratoria o ampliatoria de los datos consignados en este formulario que el Banco Central le requiriese. Estos informes serán firmados por el gerente general y el contador general del Banco, o sus reemplazantes, demostrarán el estado a la fecha del cierre de las operaciones de cada mes y deberán llegar a poder del Banco Central dentro de los 21 días subsiguientes a esa fecha.

El Banco Central publicará mensualmente un resumen del estado de los bancos mostrando los totales de los diferentes rubros, sin poder divulgar los detalles individuales de cada establecimiento.

Inspección de bancos

Art. 12. — Los bancos tendrán la obligación de dar acceso a su contabilidad y a todos sus

libros y documentos a los inspectores que periódicamente deberá mandar el Banco Central. En caso de comprobar violaciones a esta ley o a otras disposiciones legislativas, la Inspección de Bancos del Banco Central dará aviso al procurador fiscal, a fin de que éste gestione la imposición de las penas que correspondan.

Art. 13. — Las funciones de inspección, contralor y examen de los bancos, incluso el requerimiento de balances e informes, ejercitadas hasta el presente por la Inspección General de Justicia, serán del resorte exclusivo del Banco Central, a cuyo cargo queda la aplicación de esta ley.

Art. 14. — Las informaciones recogidas en los bancos por la Inspección de Bancos del Banco Central, tendrán carácter estrictamente confidencial y no serán comunicadas a los miembros del directorio del Banco con excepción del presidente, el que podrá informar al respecto al directorio cuando lo juzgare conveniente.

Art. 15. — La Inspección de Bancos del Banco Central se encargará de la liquidación de los bancos cuando éstos se encontrasen comprendidos dentro de las disposiciones pertinentes del Código de Comercio o de la presente ley. Por el desempeño de esta función, ni el Banco ni sus funcionarios cobrarán honorario alguno; pero el Banco podrá cobrar a la masa el importe de los gastos en que incurriera en el desempeño de la misma.

Operaciones hipotecarias

Art. 16. — Los bancos que reciben depósitos y se dedican a la vez a operaciones hipotecarias, constituirán una sección especial para las mismas, asignándoles un capital determinado. Tales operaciones se financiarán exclusivamente con dicho capital, las reservas de la sección y el producto de la colocación de obligaciones y debentures.

Art. 17. — Las disposiciones de esta ley en materia de cuentas e inspección serán aplicables a las secciones hipotecarias referidas en el artículo anterior, pero no a los bancos hipotecarios que no reciban depósitos.

Disposiciones varias

Art. 18. — Los bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros establecidos en la Argentina, destinarán anualmente por lo me-

nos el 10 % de sus utilidades líquidas para constituir un fondo de reserva, hasta que éste represente como mínimo el 50 % de su capital realizado y el capital y las reservas representen conjuntamente el 33 % de los depósitos de ahorro.

Art. 19. — Los bancos que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán pasibles de multas de \$ 500 m/n. a \$ 50.000; y las personas que hubieran cometido la infracción, si sus actos no tuvieran pena mayor en el Código Penal, serán reprimidas con las mismas multas, o prisión de seis meses a cinco años, o ambas penas a la vez según el monto y la naturaleza de las operaciones y la reincidencia en la infracción.

Art. 20. — En todo cuanto no esté establecido en esta ley, los bancos continuarán rigiéndose por las disposiciones del Código de Comercio.

Art. 21. — Deróganse las disposiciones de otras leyes, en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

III

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Creación y objeto

Artículo 1º — Créase el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias con sede en la Capital Federal, a fin de adquirir inmuebles, créditos y demás inversiones inmovilizadas o congeladas de los bancos y venderlos gradual y progresivamente, propendiendo a la radicación de familias de agricultores en tierras de valores ajustados a su rendimiento real, y a la transferencia de otras inversiones a manos que aseguren su mayor productividad.

Capital y fondo de reserva

Art. 2º — El Instituto Movilizador funcionará con un capital de 10.000.000 de pesos moneda nacional, que será aportado por el gobierno nacional y un fondo de reserva, formado por los fondos resultantes a favor del

gobierno de las transferencias contempladas en el artículo 4º de la ley de organización, y con la emisión de bonos amortizables de acuerdo con el artículo 4º de la presente ley.

Directorio

Art. 3º — El directorio del Instituto Movilizador estará integrado por un presidente designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y tres vocales designados por el directorio del Banco Central, y confirmados por el Poder Ejecutivo, entre personas de reconocida experiencia comercial, industrial o agropecuaria. Los miembros del directorio durarán cuatro años en sus funciones y podrán ser reelectos.

El quórum para el funcionamiento del directorio será de tres miembros.

No podrán ser miembros del directorio los funcionarios y empleados nacionales, provinciales o municipales, los insolventes, los deudores morosos y los que hubieran sido condenados por delitos comunes.

Compra y liquidación de activos congelados

Art. 4º — El Instituto Movilizador podrá pagar el activo que adquiriese de cada Banco, por un valor que no excederá al de inventario, parte en efectivo y parte en bonos nominales amortizables que a ese efecto queda facultado a otorgar con la autorización del Poder Ejecutivo. Estos bonos no podrán ser redescontados. El reembolso total de los bonos a los bancos queda sujeto a la liquidación definitiva de los activos comprados.

Los bancos deberán asegurar al Instituto Movilizador el reintegro total de las sumas que hubieran recibido de éste en pago de los activos transferidos.

Al transferirse los activos congelados al Instituto Movilizador, deberá extenderse a los deudores, en cuanto al plazo y al interés, facilidades correlativas a las que hubiesen obtenido los bancos.

Art. 5º — Dentro del primer año de funcionamiento, el directorio establecerá el plan detallado de liquidación, siguiendo los lineamientos del plan general aprobado por la comisión organizadora, y fijando las normas y el plazo, de acuerdo con los cuales deberá ejecutarse, sujeto a las siguientes modalidades:

- a) Los inmuebles deberán venderse en pública subasta; los impuestos nacionales atrasados que se adeudaren sobre los mismos quedarán en suspenso hasta que se realice la venta;
- b) En materia de créditos deberá agotarse todos los recursos legales para asegurar su cobranza, sin perjuicio de aceptar, por decisión expresa del directorio, convenios o arreglos extrajudiciales que permitan una más pronta o mejor percepción del crédito; sujeto, todo ello, a la reglamentación especial que dictará el Poder Ejecutivo;
- c) No se reconocerá comisiones a cargo del instituto a los intermediarios utilizados en la venta de muebles, inmuebles y semovientes, salvo resolución expresa del directorio.

Administración y reparto del producido

Art. 6º — Para la administración y liquidación de los activos adquiridos, y salvo casos especiales en que podrá valerse de firmas competentes, el instituto utilizará a los bancos existentes, ya sea a los originarios de dicho activo, o a otras, pagando la comisión a convenirse según la índole del mismo y en relación al producido anual.

Art. 7º — El producto anual de la liquidación y los intereses y demás recursos producidos por los créditos y valores transferidos por cada uno de los bancos al Instituto Movilizador y percibidos por éste, será aplicado por el mismo al pago de los intereses y amortización de los bonos que hayan sido entregados a cada Banco en pago de aquellos mismos créditos y valores. Previamente serán deducidos en forma proporcional los fondos requeridos por el artículo 8º de esta ley.

Presupuesto, cuentas e inspección

Art. 8º — El Instituto Movilizador se dará su presupuesto en la forma prescripta por el artículo 10 de la ley 11.672.

Art. 9º — La Contaduría General de la Nación designará un contador delegado en el Instituto Movilizador, de acuerdo con lo dispuesto en la ley de contabilidad y sus decretos reglamentarios. En todo lo que no se oponga expresamente a esta ley, el Insti-

tuto Movilizador se ceñirá a las disposiciones de la ley de contabilidad, pudiendo, sin embargo, apartarse de la misma en casos excepcionales y siempre con la autorización del Poder Ejecutivo.

Art. 10. — Las funciones de examen, inspección y contralor que determina la ley de bancos, se extenderán a las operaciones del Instituto Movilizador.

Art. 11. — Las operaciones que realice el Instituto Movilizador estarán exentas de todo impuesto nacional, provincial o municipal, así como también del sellado en las operaciones y gestiones judiciales y administrativas que el Instituto Movilizador efectúe ante las autoridades correspondientes o tribunales de cualquier jurisdicción.

Relaciones con el Banco Hipotecario Nacional

Art. 12. — Facúltase al Banco Hipotecario Nacional a concertar préstamos con el Instituto Movilizador, sobre los inmuebles adquiridos, a fin de facilitar su venta a terceros; o a convenir previamente con éste la realización de dichos préstamos después de vendidos los inmuebles a terceros.

Art. 13. — En el caso de propiedades susceptibles de ser colonizadas, el Instituto Movilizador, previo asesoramiento del Ministerio de Agricultura, podrá concertar con el Banco Hipotecario Nacional préstamos de colonización.

Art. 14. — El Instituto Movilizador queda facultado para recibir de terceros cédulas del Banco Hipotecario Nacional en pago de créditos o de adquisición de inmuebles, o a recibir de los adquirentes dichas cédulas en garantía del pago de los inmuebles comprados.

Art. 15. — El Instituto Movilizador deberá convenir con el Ministerio de Hacienda y el Banco Hipotecario Nacional, antes de realizar las operaciones referidas en los artículos 12, 13 y 14, los plazos y la forma en que podrá vender en el mercado las cédulas recibidas del Banco Hipotecario Nacional o de terceros, en pago de créditos o de adquisiciones de inmuebles.

Disposiciones varias

Art. 16. — El Instituto Movilizador formulará anualmente una lista de los escribanos públicos que deberán intervenir y re-

gistrar los contratos de compra y venta, convenios y transacciones que deban pasarse en escritura pública. El Instituto Movilizador establecerá su propio arancel para tales operaciones.

Art. 17. — Los procuradores generales de la Nación y del tesoro, así como los asesores en materia legal o técnica de las dependencias del Estado, sean éstas autónomas o no, dictaminarán o asesorarán por escrito a solicitud directa del Instituto Movilizador.

El Instituto Movilizador utilizará los servicios de los técnicos y tasadores del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, salvo casos excepcionales en que juzgue conveniente utilizar a otros especialistas, cuyos servicios se sujetarán a un arancel o remuneración previamente establecidos.

Art. 18. — Las relaciones del Instituto Movilizador con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Ministerio de Hacienda, al cual se le elevarán los balances mensuales, memorias y balances anuales y todas las informaciones que éste le solicite.

Art. 19. — Dentro de los ocho años de funcionamiento del Instituto Movilizador, y a requerimiento del Banco Central, el Poder Ejecutivo deberá dar por terminadas las funciones del instituto, y confiará su liquidación y el cumplimiento de los convenios existentes a una comisión liquidadora o a la Oficina de Inspección de Bancos del Banco Central. Cumplida esta disposición, el Poder Ejecutivo propondrá al Honorable Congreso el destino ulterior de los bienes del Instituto Movilizador.

Art. 20. — Deróganse las disposiciones de otras leyes en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

IV

Modificaciones a la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el artículo 4º de la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina (Nº 4.507), aumentándose dos voca-

les en el directorio del mismo, el que quedará constituido con ocho directores.

Art. 2º — Cuatro vocales serán nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, dándose representación a las diversas regiones del país. Los cuatro restantes los elegirá éste dentro del total de candidatos propuestos por las entidades referidas en el artículo siguiente. En ambos casos se requerirá acuerdo del Senado.

Art. 3º — En cada renovación de directorio del Banco de la Nación Argentina, propondrán al Poder Ejecutivo cuatro candidatos a vocales cada una de las siguientes entidades o agrupaciones de entidades: Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Unión Industrial Argentina; Sociedad Rural Argentina y las otras sociedades rurales; Bolsa de Comercio de Rosario y las otras bolsas de comercio. Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir entre las entidades que proponen candidatos a otra entidad o agrupación de entidades que sean representativas de agricultores o de cooperativas agrícolas, en cuyo caso cada entidad, o agrupación de entidades elegirá tres candidatos.

Art. 4º — Modifícase el artículo 5º de la ley 4.507, aumentándose en \$ 3.000 moneda nacional mensuales, la suma fijada para ser distribuida entre los vocales del directorio, en proporción a su asistencia.

Art. 5º — Para la elección de los cuatro vocales del directorio referidos en el artículo 2º de esta ley, deberán tenerse en cuenta las disposiciones que rigen en el artículo 8º de la ley 4.507, en todo cuanto no se oponga expresamente la presente.

Art. 6º — Modifícase el artículo 12 de la ley 4.507, el que quedará redactado en la siguiente forma: «El directorio no podrá conceder préstamos a la Nación, por un monto superior al 15 % del capital y las reservas del Banco, ni prestar a las provincias y municipalidades, directa o indirectamente, ya sea en forma de descuentos, adelantos, créditos en descubierto, compra de letras, títulos u otros valores, o adelantos concedidos a terceros con garantía de tales letras, títulos o valores, o en cualquier otra forma. Las disposiciones del presente artículo regirán a partir de la constitución del Banco Central y no afectarán las operaciones anteriores a la sanción de esta ley.

«El Banco podrá, sin embargo, conceder adelantos con caución de títulos nacionales, provinciales o municipales que se coticen en la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y cédulas nacionales, siempre que no se trate de operaciones destinadas en una forma u otra a financiar la colocación originaria de dichos valores nacionales para suministrar fondos al gobierno nacional directa o indirectamente; y por un monto que no podrá exceder del 20 % del capital y las reservas del Banco.»

Art. 7º — El Banco de la Nación Argentina sólo podrá redescantar documentos de la cartera de otros bancos que llenen las condiciones exigidas para ser redescantados por el Banco Central.

Art. 8º — El Banco no podrá sino con dos tercios de votos de su directorio, prestar más de \$ 500.000 a una sola firma o hacer a una sociedad anónima préstamos mayores a la mitad de su capital.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

V

Modificaciones a la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Modifícase el artículo 8º de la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, número 8.172, en la siguiente forma:

«De los ocho directores, cuatro serán nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, dándose representación a las diversas regiones del país. Los cuatro restantes los elegirá éste dentro del total de candidatos propuestos por las entidades referidas en el artículo siguiente. En ambos casos se requerirá acuerdo del Senado.»

Art. 2º — En cada renovación del directorio del Banco Hipotecario Nacional propondrán al Poder Ejecutivo cuatro candidatos a vocales cada una de las siguientes entidades o agrupaciones de entidades: Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Sociedad Rural Argentina y las otras sociedades rurales; Bolsa de Comercio de Rosario y las otras bolsas de comercio; y Corporación de Tenedores de Títulos y Acciones y otras entidades gremiales que determinará el Poder Ejecutivo. Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir entre las entidades que proponen candidatos a las que sean representativas de agricultores o de cooperativas agrí-

colas, en cuyo caso cada entidad o agrupación de entidades elegirá tres candidatos.

Art. 3º — Para la elección de los cuatro vocales del directorio referido en el artículo 1º, deberán tenerse en cuenta las disposiciones que rigen en el artículo 8º de la ley 8.172, en todo cuanto no se oponga expresamente la presente.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo

VI

Ley de organización

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Comisión organizadora

Artículo 1º — Autorízase al Poder Ejecutivo para nombrar una comisión organizadora, presidida por el ministro de Hacienda e integrada por cuatro vocales, que tendrá a su cargo proveer todo lo relativo a la organización del Banco Central de la República Argentina (ley número...) y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley número...) y proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos, estatutos y decretos reglamentarios que proyecte para el mejor cumplimiento de las leyes citadas y la Ley de Bancos (ley número...).

Constitución del Banco Central

Art. 2º — El Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado nombrará el primer presidente y vicepresidente del Banco Central, sin necesidad de las ternas prescriptas por el artículo 10 de la ley de creación del Banco Central.

Art. 3º — La Comisión Organizadora determinará la forma de suscripción de las acciones del Banco Central, y los plazos en que los bancos deberán integrar dichas acciones y depositar en el Banco Central los efectivos correspondientes a sus depósitos, de acuerdo con las prescripciones legales.

Art. 4º — Autorízase al Poder Ejecutivo para que en el momento que lo juzgue oportuno y después de haber oído a la Comisión Organizadora, proceda a:

- a) Suprimir la Comisión de Redescuento, la Junta Autónoma de Amortización y la Caja de Conversión;

b) Transferir al Banco Central los rubros activos y pasivos de la Caja de Conversión, junto con los depósitos oficiales del Banco de la Nación Argentina — salvo los de las reparticiones autónomas que resuelva exceptuar, lo mismo que los depósitos de garantía en las licitaciones públicas — el Fondo de Beneficios de Cambios y el Fondo de Divisas Extranjeras. Dichas transferencias se efectuarán de acuerdo con las condiciones y equivalencias que determinará el Poder Ejecutivo. Para el oro de la Caja de Conversión la equivalencia no podrá exceder de 43.000 pesos moneda nacional por el contenido en oro fino de una barra típica de kilogramos 12,441 (400 onzas «troy»);

c) Deducir de la emisión actual, antes de realizar las transferencias mencionadas, la moneda subsidiaria de denominaciones de cinco pesos e inferiores (incluso las monedas de níquel y cobre), de la que se hará cargo el gobierno nacional, así como de la acuñación o emisión futura de esta moneda subsidiaria.

Todo el oro existente en la Caja de Conversión en el momento de dictarse esta ley, deberá transferirse al Banco Central, sin que el gobierno pueda tomar parte alguna de él, ni el Banco pueda usarlo con otros fines que los expresados en la ley de su creación. Hasta tanto se transfieran sus rubros activos y pasivos al Banco Central, la Caja de Conversión sólo podrá emitir billetes de acuerdo con las leyes existentes. Una vez efectuada esa transferencia, el Banco Central no podrá aumentar la emisión en otra forma que no sean las operaciones autorizadas por la ley de su creación.

Al realizarse la transferencia, el saldo del crédito de la Caja de Conversión contra el gobierno nacional por las emisiones anteriores a la ley 3.871, después de deducir el importe de los billetes subsidiarios, quedará representado en el Banco Central por un bono sin interés otorgado por el tesoro nacional.

Las obligaciones estipuladas en pesos oro sellado, que hasta hoy pueden pagarse a 2,27 papel por peso oro, continuarán pagándose en igual forma.

Canje de las emisiones actuales

Art. 5º — Los billetes de la emisión actual de la Caja de Conversión transferidos al Banco Central que no le fuesen presentados para su canje dentro de los dos años contados desde la fecha en que el Banco haya comenzado la emisión de los nuevos billetes, dejarán de tener curso legal, pero podrán ser canjeados en el Banco durante los tres años siguientes.

Al expirar dicho plazo, el saldo que no se haya presentado para el canje será transferido al Fondo de Reserva del Instituto Movilizador, previa deducción del costo del reemplazo de toda la emisión actual de billetes. Sin embargo, los billetes que se presentaran al Banco Central después de vencido el plazo mencionado y dentro de un nuevo término de diez años, serán canjeados por billetes de dicho Banco por cuenta del gobierno.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo, dentro del plazo de dos años, a partir de la iniciación de las operaciones del Banco Central, y por intermedio de éste, conforme al artículo 36 de la ley de creación (ley número ...), reemplazará por nuevos billetes de curso legal los billetes subsidiarios de denominaciones de cinco pesos e inferiores.

El saldo de billetes que no se hubiera presentado al canje tres años después de expirado el plazo de dos años establecido en el párrafo anterior, será destinado al mismo fin previsto por la segunda parte del artículo precedente.

Transcurridos dichos plazos, todos los billetes actuales de denominaciones de cinco pesos e inferiores, dejarán de tener curso legal, pero serán canjeados por moneda subsidiaria a su presentación al Banco Central, dentro de un nuevo término de diez años.

Transformación de la deuda flotante

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo a transformar en bonos consolidados del tesoro nacional de 3 % de interés y $\frac{1}{4}$ % de amortización acumulativa hasta un total de pesos 400.000.000 moneda nacional, el saldo del crédito contra caución de títulos del Empréstito Patriótico y letras de tesorería actualmente en circulación. Esta medida será tomada después de haber oído al respecto a la Comisión Organizadora. Los bonos provenientes de la transformación de las letras serán compra-

dos a la par por el Banco Central con destino a las operaciones que prevé el artículo 32, inciso 1) de su ley de creación (ley número ...).

Art. 8º — El fondo de conversión a que se refiere el artículo 3º de la ley número 3.871 deberá ser cancelado, destinándose su activo a compensar deuda flotante del gobierno nacional.

Art. 9º — Facúltase al Poder Ejecutivo a convenir con el Banco de la Nación Argentina el arreglo definitivo del remanente de la deuda directa e indirecta del gobierno nacional con el mismo, después de haberse cumplido con las disposiciones de esta ley relativas a la deuda flotante, emitiendo al efecto los valores nacionales que fuese necesario.

Constitución del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias

Art. 10. — Antes de la designación del presidente y los vocales del Instituto Movilizador, el Poder Ejecutivo deberá aprobar las normas generales para el funcionamiento del mismo, trazadas por la Comisión Organizadora.

Art. 11. — El Instituto Movilizador procederá de inmediato a examinar los valores congelados que los bancos le ofrezcan y que sean susceptibles de ser adquiridos por aquél, y en particular su relación con el pasivo de redes-cuentos, a fin de proponer a la Comisión Organizadora las condiciones de compra de dichos valores por el instituto, y el plan general de liquidación de los mismos.

Art. 12. — Después de cumplidas las disposiciones del artículo anterior y una vez apartados los fondos requeridos por el gobierno nacional a los fines del cumplimiento del artículo 5º de la ley de creación del Banco Central (ley número ...) y del artículo 2º de la ley de creación del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley número ...), la Comisión Organizadora determinará ad referendum del Poder Ejecutivo, el monto definitivo del fondo de reserva del Instituto Movilizador, el que podrá invertirse, lo mismo que el capital, en valores nacionales o en bonos consolidados del tesoro nacional.

Art. 13. — La diferencia entre el monto inicial de la reserva constituida conforme al artículo 2º de la ley de creación del Instituto Movilizador, y el monto definitivo según el artículo anterior, será transferida al gobierno

nacional, el que la destinará íntegramente a la cancelación de su actual deuda bancaria.

Transferencia de las operaciones de cambio al Banco Central

Art. 14. — La Comisión Organizadora aconsejará al Poder Ejecutivo la forma y oportunidad en que deberá transferir el manejo de las operaciones de cambio al Banco Central, de acuerdo con el mismo, el que se ajustará, mientras no se restablezca la libertad del mercado de cambios, a las normas establecidas por aquél.

Art. 15. — En el Fondo de Beneficios de Cambio transferido al Banco Central de acuerdo con el artículo 4º de la presente ley, se acreditarán las diferencias entre el tipo de compra y el de venta de las divisas provenientes de las exportaciones, las que aun cuando el Poder Ejecutivo autorizara su venta en el mercado libre, sólo podrán ser negociadas por los bancos o firmas autorizadas, así como las divisas provenientes de toda otra operación de cambios; y se debitarán:

- a) Las diferencias de cambio en los servicios de la deuda pública y demás remesas al exterior del gobierno nacional; y los gastos de la Oficina de Control de Cambios, según presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo;
- b) Las diferencias en contra que pudieran resultar entre el valor de compra y el de venta de los granos adquiridos por la Junta Reguladora de Granos; y los gastos de la misma aprobados por el Poder Ejecutivo. Si la diferencia fuera a favor se acreditará a dicho fondo;
- c) Las diferencias de precio que el Poder Ejecutivo mediante organizaciones de emergencia que reputase conveniente, resolviese asignar directa o indirectamente a los productores agropecuarios, según el margen obtenido en la venta de divisas o cambio extranjero provenientes de la exportación del producto o grupo de productos a que se refieren dichas diferencias de precios; y los gastos de tales organizaciones aprobados por el Poder Ejecutivo.

Art. 16. — Los fondos no utilizados en la forma prevista en el artículo anterior podrán

ser incorporados al Fondo de Divisas a que se refiere el artículo 43 de la ley de presupuesto vigente, hasta que el Honorable Congreso decida su aplicación definitiva. También ingresará al mismo fondo el recargo de hasta 20 % (incluida, a los fines del cómputo, la diferencia que exista entre el tipo oficial y el del mercado libre) sobre el importe de las monedas extranjeras correspondientes al valor de las importaciones sin permiso previo, que deberá pagarse en divisas o cambio extranjero en los bancos autorizados antes del despacho a plaza de las mercaderías, conforme lo reglamente el Poder Ejecutivo y mientras se mantenga el sistema de los permisos previos del cambio.

Art. 17. — El Poder Ejecutivo determinará los requisitos necesarios, incluso la declaración jurada, para establecer la índole de todas las operaciones de cambio; podrá requerir de los negociantes de cambio o los que intervengan como compradores, vendedores, intermediarios o en cualquiera otra forma en las operaciones de cambio, las informaciones sobre las mismas que juzgue conveniente, e inspeccionar todos los libros y documentos pertinentes.

Las multas a aplicarse en casos de infracciones o falsas declaraciones, de conformidad con la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, no podrán exceder del décuplo de la operación realizada.

Comisión de Divisas

Art. 18. — Créase con carácter transitorio la Comisión de Divisas bajo la presidencia del ministro de Hacienda, o, en su ausencia, del subsecretario de Hacienda, compuesta de un representante ad honorem designado por cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Banco Central o Comisión Organizadora mientras aquél no se encuentre constituido, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Bolsa de Comercio de Rosario, Unión Industrial Argentina y Centro de Importadores. El director de la Oficina de Control de Cambios tendrá acceso a la comisión, con voz pero sin voto.

Art. 19. — Son funciones de la Comisión de Divisas:

- a) Proponer al Ministerio de Hacienda las normas para el otorgamiento y aplicación de los permisos previos de cambio por la Oficina de Control de Cambios; y verificar el cumplimiento de las normas aprobadas por el mencionado ministerio;
- b) Entender en las reclamaciones presentadas por los importadores a la Oficina de Control de Cambios y aconsejar lo que juzgase conveniente al Ministerio de Hacienda;
- c) Designar subcomisiones asesoras cuando lo juzgue conveniente.

Disposiciones varias

Art. 20. — La Comisión Organizadora someterá su presupuesto a la aprobación del Poder Ejecutivo. Los recursos necesarios se anticiparán de rentas generales, con cargo de devolución por el Banco Central y el Instituto Movilizador cuando éstos se constituyan.

Art. 21. — El procurador general de la Nación, lo mismo que los asesores en materia legal o técnica de los poderes públicos, dictaminarán a solicitud de la Comisión Organizadora.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso dentro del próximo período ordinario de sesiones, de la forma en que ha dado cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Art. 23. — Autorízase al Poder Ejecutivo al promulgar la presente ley a señalar en cada caso el número de las leyes citadas.

Art. 24. — Deróganse las disposiciones de otras leyes en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, Febrero 23 de 1935.

José Heriberto Martínez. — Alfredo J. Alonso. — Benjamín Palacio. — Eduardo Bruchou. — José María Bustillo. — Raúl Godoy. — Pedro Groppo. — Héctor S. López. — Juan Simón Padros. — Abraham de la Vega.

En disidencia con el artículo 15 del proyecto de Banco Central.

José María Bustillo.

En disidencia con los artículos 10 y 15 del proyecto de Banco Central y 1º y 11 del proyecto de Instituto Movilizador.

Abraham de la Vega.

En disidencia en general con los proyectos de Banco Central, Instituto Movilizador de Inversiones bancarias, modificaciones a las leyes de los bancos de la Nación Argentina e Hipotecario Nacional y ley de organización, y parcial con el proyecto de ley de Bancos.

Adolfo Dickmann. — Américo Ghioldi. — José Luis Pena. — Rómulo Bogliolo. — Manuel V. Besasso.

En disidencia en general.

Julio A. Noble.

En disidencia con el artículo 11 del proyecto de Instituto Movilizador:

Raúl Godoy. — Alfredo J. Alonso. — Benjamín Palacio.

Sanción del Honorable Senado

Buenos Aires, 30 de Enero de 1935.

Señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que el Honorable Senado, en sesión de la fecha, ha sancionado los adjuntos proyectos de ley relativos a: Banco Central de la República Argentina, ley de Bancos, Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, modificando las leyes orgánicas de los bancos oficiales y ley de organización, que paso en revisión a esa Honorable Cámara.

Dios guarde al señor presidente.

JULIO A. BOCA.
Gustavo Figueroa.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Creación y objeto del Banco Central

Artículo 1º — Créase el Banco Central de la República Argentina por el término de cuarenta años.

Art. 2º — El Banco tendrá su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Podrá establecer sucursales o agencias o nombrar corresponsales por resolución de su directorio.

Art. 3º — El Banco tendrá por objeto:

- a) Concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de la fluctuación en las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el valor de la moneda;
- b) Regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios;
- c) Promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario; y aplicar las disposiciones de inspección, verificación y régimen de los bancos establecidas en la ley de bancos;
- d) Actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de los empréstitos públicos.

Capital y suscripción de acciones

Art. 4º — El capital originario del Banco será de 30.000.000 de pesos moneda nacional, dividido en 30.000 acciones de 1.000 pesos moneda nacional cada una.

Las acciones serán nominativas y estarán registradas en el mismo Banco, y solamente podrán transferirse con el consentimiento de éste, sin que pueda exigírsele que exprese las razones que tiene para denegar cualquier transferencia. En caso de negarse una transferencia el tenedor podrá exigir que el Banco compre las acciones al valor nominal, reduciendo correlativamente el capital.

Art. 5º — Al constituirse el Banco Central, el gobierno nacional subscribirá 10.000.000 de pesos moneda nacional de acciones. Los bancos nacionales y extranjeros establecidos en la Argentina, que tengan un capital no inferior a 1.000.000 de pesos moneda nacional deberán subscribir a la par una cantidad de acciones proporcional a su capital realizado, hasta completar la suma de 10.000.000 de pesos moneda nacional.

Ningún Banco, institución o persona podrá ser accionista por un valor nominal superior a la quinta parte del capital subscrito por los bancos.

Art. 6º — Los 10.000.000 de pesos moneda nacional del capital que no se subscriben en el momento de la organización del Banco, quedarán a disposición de éste para ser subscritos de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente.

Art. 7º — Los bancos que se establezcan en la Argentina y que tengan un capital no inferior a 1.000.000 de pesos moneda nacional, o que aumenten su capital hasta un mínimo de 1.000.000 de pesos moneda nacional, y los bancos accionistas que aumenten su capital, podrán ser requeridos por el Banco Central para subscribir acciones al precio que fije el directorio, a la par o arriba de ella, teniendo en cuenta las reservas acumuladas, y en la misma proporción que la adoptada para la subscripción originaria. El Banco Central queda autorizado para aumentar su capital con este objeto en caso de no ser suficientes los 10.000.000 destinados a este fin en el artículo 6º, siempre que el gobierno no resuelva vender sus acciones para permitir la subscripción susodicha.

Art. 8º — Las acciones del Banco no podrán ser dadas en garantía de préstamo o con otros fines, salvo en casos especiales, y sólo con el consentimiento previo y escrito del Banco Central. El presente artículo deberá transcribirse en el dorso de cada acción.

Directorio

Art. 9º — El Banco tendrá un directorio compuesto de un presidente, un vicepresidente y doce directores.

Art. 10. — El presidente y el vicepresidente serán argentinos y personas de reconocida experiencia bancaria y financiera, y serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, dentro de las ternas elegidas por la

Asamblea de Bancos Accionistas a propuesta del directorio. Durarán siete años en sus funciones y podrán ser reelectos.

El presidente y el vicepresidente deberán dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco, y mientras estén en ejercicio no podrán ocupar otro cargo, remunerado o no.

Tendrán derecho a percibir los sueldos o asignaciones que el directorio determine periódicamente, con la confirmación de la Asamblea de los Bancos Accionistas; pero en ningún caso podrán ser remunerados total o parcialmente bajo forma alguna de comisión, ni los sueldos o asignaciones que le sean pagados podrán determinarse en relación a las utilidades del Banco.

Art. 11. — Si el presidente o el vicepresidente falleciera o renunciara o en alguna otra forma dejara vacante el cargo antes de cumplirse el período para el cual fué designado, se nombrará a otra persona en la forma establecida en el artículo 10 para ejercer dicho cargo durante el resto del período.

Art. 12. — De los doce directores, uno será elegido por el Poder Ejecutivo; uno por el Banco de la Nación Argentina; seis por los sectores en que se dividirá al efecto la Asamblea de los Bancos Accionistas en la siguiente forma: uno por los representantes del Banco de la Provincia de Buenos Aires y demás bancos provinciales o mixtos del país que fueran accionistas; tres por los representantes de los bancos nacionales y dos por los representantes de los bancos extranjeros; y cuatro elegidos por toda la Asamblea de Bancos Accionistas — a propuesta del directorio y previa consulta de éste con entidades representativas —, entre personas de reconocida experiencia, capacidad y prestigio que deberán ser: un agricultor, un ganadero, un comerciante y un industrial. Ninguna de estas cuatro personas podrá ser director o empleado de Banco. Tampoco podrán formar parte del directorio simultáneamente más de tres extranjeros.

Art. 13. — Los directores elegidos de acuerdo con el artículo 12, durarán tres años en su cargo y podrán ser reelectos, excepto los nombrados por los bancos extranjeros que no podrán serlo.

Los directores elegidos por los bancos extranjeros serán de diferente nacionalidad, y los bancos de donde proviniesen no podrán ser de un mismo país de origen.

Art. 14. — Si algún miembro del directorio, con excepción del presidente o vicepresidente, falleciese o renunciase o en alguna otra forma dejase vacante su cargo antes de terminar el período para el cual fué designado, se procederá a elegir a otro director en la forma establecida en el artículo 12 para completar el período.

Art. 15. — No podrán ser elegidos ni continuar como miembros del directorio:

- a) Los miembros del Congreso nacional o de cualquiera Legislatura provincial o concejo municipal, extendiéndose esta restricción a las personas que hayan aceptado candidaturas para esos puestos; los empleados o funcionarios de cualquiera repartición del gobierno, salvo el primer director a que se refiere el artículo 12, que podrá ser funcionario nacional, y el siguiente que podrá ser funcionario del Banco en cuestión; y los que tuviesen otros cargos o puestos rentados o remunerados en cualquiera otra forma que dependiesen directa o indirectamente de los gobiernos federal, provinciales o municipales;
- b) Los insolventes;
- c) Las personas que hubiesen sido condenadas por delitos.

Art. 16. — Los miembros del directorio actuarán en forma honoraria, excepto en el caso previsto en el artículo 18.

Art. 17. — El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, ejercerá en representación del directorio la dirección de las actividades del Banco, y estará autorizado para actuar y resolver en todos aquellos asuntos que no estuvieran expresamente reservados a la decisión de la Asamblea de Bancos Accionistas; será al mismo tiempo el representante legal del Banco en todas sus relaciones con terceros.

Art. 18. — El presidente, si juzgara conveniente, podrá constituir una comisión consultiva formada por el vicepresidente y dos directores designados por el directorio por un año y reelegibles, de los cuales por lo menos uno deberá ser banquero. La comisión consultiva se reunirá por lo menos una vez por semana. El directorio podrá fijar una remuneración para esos dos directores que deberá ser

confirmada por la Asamblea de Bancos Accionistas.

Art. 19. — El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, convocará a las reuniones del directorio cuando lo juzgue conveniente, y por lo menos una vez cada mes. Siete miembros formarán quórum, y salvo disposición contraria, las resoluciones serán adoptadas por simple mayoría de votos de los miembros presentes. En caso de empate, el presidente o en su caso el vicepresidente, tendrá doble voto.

Art. 20. — El directorio ejercerá la vigilancia de las operaciones del Banco; y sus atribuciones y deberes serán principalmente los siguientes:

- a) Intervenir en la reglamentación y administración del Banco, aprobar el presupuesto anual de sueldos y gastos, y nombrar, promover y separar de sus puestos a los empleados;
- b) Establecer y clausurar sucursales y agencias;
- c) Nombrar corresponsales en el país y en el extranjero, reglamentando sus relaciones con el Banco;
- d) Fijar las condiciones generales y los límites de las distintas operaciones autorizadas por esta ley;
- e) Fijar tasas de redescuento e interés;
- f) Adquirir los inmuebles necesarios para las operaciones del Banco y enajenar los inmuebles adquiridos, de acuerdo con el artículo 34, inciso h);
- g) Revisar periódicamente, por lo menos una vez cada seis meses, todos los redescuentos y adelantos;
- h) Aprobar las renovaciones y substituciones de letras de cambio y pagarés de acuerdo con el artículo 34, inciso i);
- i) Resolver sobre la transferencia o caución de acciones del Banco de acuerdo con los artículos 4º y 8º;
- j) Nombrar la comisión consultiva cuando lo solicitase el presidente;
- k) Nombrar la o las comisiones de redescuento;
- l) Redactar la memoria anual y presentar el balance y cuenta de ganancias y pérdidas a la Asamblea de Bancos Accionistas.

Asambleas de Bancos Accionistas

Art. 21. — La asamblea ordinaria de Bancos Accionistas que será convocada por el directorio una vez cada año, se efectuará dentro de los primeros tres meses del ejercicio financiero.

Tres semanas antes de la fecha fijada para la asamblea ordinaria se enviará una citación a cada Banco accionista con el orden del día y el detalle de los asuntos a tratarse.

Toda moción que los accionistas deseen someter a la asamblea, deberá comunicarse al directorio, dentro del mes siguiente a la terminación del ejercicio financiero, y acompañarse con una exposición de los motivos en que se funda.

Art. 22. — Las asambleas extraordinarias de los bancos accionistas se convocarán con dos semanas de anticipación por lo menos, cuando el directorio lo estime conveniente, o cuando lo requiera por escrito un número de bancos accionistas que represente por lo menos una tercera parte de los votos, de acuerdo con el artículo 23.

Estas peticiones deberán exponer siempre las razones que las motivan con indicación de las mociones que serán sometidas a la asamblea.

Las asambleas extraordinarias que convoque el directorio a pedido de los bancos accionistas, se efectuarán dentro de los 30 días de recibida la petición correspondiente por el directorio.

Art. 23. — El presidente, o en su ausencia el vicepresidente, presidirá las asambleas.

Cada acción tiene un voto; pero ningún accionista podrá reunir un número de votos que constituya más de la décima parte del capital subscrito por los bancos. La misma persona no podrá representar más de un Banco accionista en las asambleas.

Art. 24. — Son atribuciones de la asamblea de bancos accionistas:

- a) Aprobar las cuentas anuales y la memoria del directorio;
- b) Aprobar la distribución de las sumas que se asignarán al fondo de reserva general y al fondo de reserva especial si se dispone crearlo;
- c) Resolver el reparto del dividendo anual;
- d) Elegir, a propuesta del directorio, las ternas de candidatos para presidente y

vicepresidente que deben ser presentadas al Poder Ejecutivo y elegir los directores a que se refiere el artículo 12;

- e) Confirmar los sueldos y asignaciones del presidente, vicepresidente y los dos miembros del directorio que integran la comisión consultiva;
- f) Deliberar sobre todo otro asunto incluido en el orden del día;
- g) Fijar la remuneración del síndico.

Todas las resoluciones de las asambleas, salvo disposición contraria, serán adoptadas por simple mayoría de votos.

Comisiones de redescuento

Art. 25. — El directorio nombrará una comisión de redescuento para la casa central, y en caso necesario para cualquier sucursal del Banco, encargada de examinar todos los documentos presentados para su redescuento, adquisición o a título de garantía de adelantos. El número de personas que formará cada comisión será fijado por el directorio.

Art. 26. — Los miembros de las comisiones de redescuento serán personas conocedoras de las condiciones financieras, comerciales y agrícolas. Serán nombrados por un período de dos años y no podrán ser reelectos.

Cuando se proceda por primera vez a la designación de los integrantes de alguna comisión de redescuento, la mitad de los miembros será nombrada por un período de un año. No podrán ser miembros de las comisiones de redescuento, los miembros del directorio, sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, socios o agentes, ni las personas que se encuentren comprendidas en las disposiciones del artículo 15.

Art. 27. — El cargo de miembro de las comisiones de redescuento será honorario, pero el directorio podrá autorizar el reembolso de los gastos incurridos por dichos miembros en el desempeño de sus funciones.

Art. 28. — Las deliberaciones de las comisiones de redescuento serán secretas.

Ningún miembro de una comisión de redescuento expresará opiniones ni votará respecto de letras o documentos en los cuales tuviere algún interés; y deberá retirarse de la sesión mientras tales letras o documentos estuvieran en consideración.

Art. 29. — La Comisión de Redescuento de la casa central será presidida por el funcionario que designe el directorio. En las sucursales, las reuniones de la Comisión de Redescuento serán presididas por el gerente de la sucursal.

El directorio del Banco determinará el número para formar quórum.

Art. 30. — Las resoluciones que aprueban o rechazan letras u otros documentos serán adoptadas por simple mayoría de votos, y en caso de empate el presidente de la comisión tendrá doble voto.

Art. 31. — El Banco no estará obligado a descontar letras o aceptar valores aprobados por la Comisión de Redescuento. Las letras u otros valores que hubiesen sido rechazados por la Comisión de Redescuento podrán ser aceptados por el Banco, siempre que sean aprobados por el directorio, por mayoría de las tres cuartas partes de los miembros presentes en la sesión.

Operaciones del Banco

Art. 32. — El Banco podrá:

- a) Emitir billetes de acuerdo con las disposiciones de esta ley;
- b) Comprar y vender oro;
- c) Recibir dinero en depósito en cuenta corriente, que no devengue interés;
- d) Redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, en las condiciones establecidas por el directorio, documentos provenientes de operaciones comerciales que representen un movimiento real de mercaderías, lleven por lo menos dos firmas solventes, de las cuales una sea bancaria, vengzan a más tardar dentro de los 90 días a contar desde la fecha de su redescuento y reunan los requisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que reunan las condiciones anteriores pero tengan tres o más firmas solventes de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de este inciso;
- e) Redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, en las condiciones establecidas por el directorio,

documentos emergentes de transacciones en productos agrícolas o ganaderos que lleven por lo menos dos firmas, de las cuales una sea bancaria, vengzan a más tardar dentro de los 180 días a contar desde la fecha de su redescuento y reunan los requisitos exigidos por el Código de Comercio. Cuando se trate de documentos que reunan las condiciones anteriores pero vengzan en un plazo máximo de 90 días a contar de la fecha de su redescuento o lleven por lo menos tres firmas solventes de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de este inciso;

f) Acordar adelantos a los bancos accionistas, por un plazo fijo que no podrá exceder de 90 días, cobrándoles una tasa mínima de interés superior en 1 punto, por lo menos, a la tasa oficial mínima del Banco Central para el redescuento de documentos a 90 días vista, sobre los siguientes valores:

1. Letras de cambio y pagarés que reunan las condiciones establecidas en los incisos d) o e) de este artículo, y hasta la concurrencia del 80 % de su valor nominal;
2. Valores del gobierno nacional cotizados en el mercado, siempre que el importe del adelanto no exceda del 80 % de la cotización en la Bolsa de dichos valores y que el total de tales adelantos conjuntamente con los valores nacionales de propiedad del Banco (excluidos los bonos consolidados del tesoro nacional) no supere el límite a que se refiere el artículo 34, inciso b);
- g) Acordar adelantos sobre oro amonedado o en barras hasta el 95 % de su valor;
- h) Comprar y vender cambio extranjero;
- i) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales o del Banco Internacional de Ajustes;
- j) Encargarse de la emisión, compra y venta de valores del gobierno nacional, por cuenta exclusiva de éste; y sin que el Banco pueda subscribir tales valores ni garantizar su colocación;

- k) Administrar la Cámara Compensadora, en Buenos Aires y en otras plazas;
- l) Vender a los otros bancos o volver a comprar de los mismos los bonos consolidados del tesoro nacional recibidos o adquiridos por el Banco en virtud del artículo 7º de la ley de organización, y los valores nacionales adquiridos de acuerdo con el artículo 34, inciso b) *in fine*.

Art. 33. — El Banco publicará en forma permanente las tasas de redescuentos y adelantos. Bajo ningún concepto afectuará redescuentos o adelantos a tasas menores que las fijadas.

Art. 34. — Queda prohibido al Banco:

- a) Emitir billetes de denominaciones de cinco pesos moneda nacional y menores;
- b) Conceder préstamos al gobierno nacional, salvo los directos autorizados en el artículo 44 o los indirectos autorizados en el artículo 32, inciso f) ya sea en la forma de descuentos, adelantos, créditos en descubierto, compra de letras de tesorería, títulos u otros valores del gobierno nacional, o en cualquiera otra forma; sin embargo, el Banco podrá adquirir valores nacionales hasta un límite que en ningún caso podrá exceder del monto total de su capital, sus reservas y el importe amortizado de los bonos consolidados del tesoro nacional recibidos o adquiridos por el Banco, en virtud del artículo 7º de la ley de organización;
- c) Conceder, en circunstancia alguna, a las provincias, municipalidades, empresas de servicios públicos que pertenezcan a éstas o reparticiones autónomas, préstamos directos o indirectos en la forma de descuentos, adelantos, créditos en descubierto o compra de letras, valores o títulos, o en cualquiera otra forma;
- d) Garantizar o endosar letras u otras obligaciones del gobierno nacional, provincias, municipalidades, reparticiones autónomas o instituciones similares;
- e) Participar directa o indirectamente en cualquiera empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase;

- f) Comprar acciones, salvo las del propio Banco en el caso del artículo 4º y las del Banco Internacional de Ajustes o de otra entidad que pueda fundarse con propósitos análogos de cooperación internacional, o conceder préstamos con la garantía de acciones de cualquiera índole;
- g) Conceder adelantos sin garantía u otorgar créditos en descubierto, salvo en el caso de convenios de créditos recíprocos concertados con otros bancos centrales;
- h) Comprar bienes raíces, salvo los que fuesen necesarios para que el Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar mercaderías y conceder adelantos que tuviesen por garantía bienes raíces o hipotecas. Si en la opinión del directorio corriera peligro algún crédito concedido por el Banco, éste podrá tomar las medidas necesarias para asegurar sus derechos sobre los bienes raíces o mercaderías del deudor, y podrá adquirir tales bienes raíces o mercaderías, pero estará obligado a revenderlos tan pronto como le sea posible;
- i) Conceder la renovación o substitución de letras de cambio o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en garantía por el Banco, salvo en casos excepcionales, en los cuales el directorio podrá autorizar por una sola vez su renovación o substitución, y por un período que no exceda de 90 días.

Emisión de billetes y garantía metálica

Art. 35. — Durante todo el período para el cual ha sido constituido, el Banco tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la República Argentina, excepto la moneda subsidiaria a que se refiere el artículo 5º de la ley de organización; y ni el gobierno nacional, ni los gobiernos de las provincias, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes u otros documentos que fuesen susceptibles de circular como papel moneda.

Art. 36. — El Banco se hará cargo de todos los billetes de denominaciones superiores a cinco pesos moneda nacional ya emitidos por la Caja de Conversión, y los reemplazará por una emisión nueva de billetes del Banco Central.

La emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria de denominaciones de cinco pesos e inferiores (inclusive las monedas de níquel y cobre) a cargo del gobierno nacional, se hará exclusivamente a solicitud y por intermedio del Banco Central, conforme a las necesidades del público, pero en ningún caso podrá exceder de 20 pesos moneda nacional por habitante.

La mitad de la emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria será efectuada mediante el simple canje de una cantidad igual de billetes del Banco Central, cancelándose en forma simultánea una parte equivalente del bono sin interés a que se refiere el artículo 4º de la ley de organización; la otra mitad se entregará directamente y sin canje alguno al tesoro nacional, previa deducción del costo de la operación. Una vez cancelado totalmente dicho bono, toda emisión o acuñación futuras de moneda subsidiaria se entregará directamente y sin canje alguno al tesoro nacional y a su exclusivo costo.

Art. 37. — Los billetes serán de las denominaciones superiores a cinco pesos que fije el directorio.

Art. 38. — Los billetes del Banco tendrán curso legal en todo el territorio de la República Argentina por el importe expresado en los mismos.

Art. 39. — El Banco mantendrá en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valor del peso, ya sea en oro, divisas o cambio extranjero, equivalente al 25 % como mínimo de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista.

El oro deberá hallarse libre de todo gravamen y pertenecer en propiedad al Banco sin restricción alguna; y del cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto, o sea el remanente libre después de deducidas todas las obligaciones en oro o cambio extranjero.

Si durante un año determinado, la reserva en relación a los billetes y obligaciones a la vista hubiera sido inferior al 33 % durante 60 días seguidos o 90 días en el total del ejercicio, no se abonará dividendo a los bancos accionistas y los beneficios correspondientes serán destinados al Fondo de Reserva General.

Art. 40. — En ningún caso el Banco podrá tener divisas por más de 20 % de las reservas, ni computarlas dentro de las mismas por más del 10 %.

Art. 41. — El Banco estará obligado a canjear a la vista sus billetes en cantidades no menores al valor en moneda nacional de una barra típica de oro de kilogramos 12,441 (400 onzas), por oro o, a opción del Banco, por cambio extranjero.

La tasa que regirá para el canje de billetes por cambio extranjero, o viceversa, no podrá variar en más del 2 % arriba o abajo de la par.

Relaciones con los bancos

Art. 42. — Los bancos nacionales o extranjeros que operen en el país con un capital no inferior a un millón de pesos moneda nacional, deberán mantener en todo momento en el Banco Central, la mitad del efectivo mínimo que determina la ley de bancos en relación a la magnitud de sus depósitos. Estos fondos formarán la base del sistema de la Cámara Compensadora que el Banco Central administrará en Buenos Aires, y en las otras plazas; pero en caso de que llegase a reducirse a menos del límite legal el efectivo de cualquier Banco, éste deberá reponer de inmediato la diferencia. El Banco Central queda facultado para convenir con el Banco de la Nación Argentina el depósito en las sucursales de éste, del efectivo que deben depositar en el Banco Central los bancos del interior y del que deseen depositar las sucursales en el interior como parte integrante del efectivo que corresponda depositar en el Banco Central a los bancos a que pertenecen.

Art. 43. — El gobierno nacional encargará al Banco, de todas sus remesas, cambios y transacciones bancarias, tanto en el interior del país como en el extranjero. Los fondos del gobierno nacional serán depositados en el Banco Central. Los depósitos judiciales seguirán efectuándose en el Banco de la Nación Argentina. El Poder Ejecutivo reglamentará este artículo, pudiendo excluir de sus disposiciones a las reparticiones autónomas y a los depósitos de garantía efectuados para intervenir en licitaciones públicas.

Art. 44. — El Banco podrá hacer adelantos, por tiempo limitado, al gobierno nacional, para cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación, hasta una cantidad que no exceda del 10 % del promedio de los recursos en efectivo obtenidos en los tres últimos años; todos los adelantos hechos por este concepto deberán ser reembolsados den-

tro de los doce meses de efectuados; y si cualquier adelanto de esta naturaleza quedase impago después de aquel plazo, no podrá volver a usarse la facultad del Banco para hacer ulteriores adelantos de esta clase en los años subsiguientes, hasta que las cantidades adeudadas hayan sido pagadas. Sobre esos adelantos, el gobierno pagará un interés no mayor al tipo mínimo del resdescuento en vigor.

Art. 45. — El Ministerio de Hacienda de la Nación informará periódicamente al Banco Central acerca del movimiento de la tesorería, desenvolvimiento de la recaudación y los gastos, estado de la deuda y demás informaciones relativas a la situación financiera.

Art. 46. — El Banco abrirá una cuenta general de caja para la Tesorería General de la Nación, a la cual acreditará todas las recaudaciones de cualquiera clase que sean, y todos los adelantos hechos al gobierno, y sólo hará pagos o transferencias de esta cuenta a cuentas subsidiarias por orden de la tesorería y con intervención de la Contaduría General de la Nación.

Art. 47. — El Banco recibirá fondos del gobierno nacional y efectuará pagos por cuenta del mismo sin percibir remuneración por tales servicios. Conforme lo dispuesto para todos los depósitos, el Banco no pagará ningún interés sobre las cantidades depositadas en las cuentas del gobierno.

Art. 48. — Las relaciones del Banco Central con el Poder Ejecutivo se mantendrán por intermedio del Ministerio de Hacienda.

Art. 49. — En las localidades donde no tenga sucursal, el Banco Central podrá designar al Banco de la Nación Argentina en calidad de agente para el cobro y pago de fondos del gobierno nacional.

Art. 50. — La sede del Banco y la de sus sucursales, las operaciones que efectúe y los dividendos sobre sus acciones, estarán exentos de todo impuesto o contribución nacional, provincial o municipal, así como también del sellado en las actuaciones judiciales, operaciones y gestiones que efectúe ante los tribunales federales y ordinarios.

Utilidades

Art. 51. — Al cierre de cada ejercicio, y después de deducidas las reservas que se juzgue necesario por deudas incobrables y de cobro dudoso, y efectuada la amortización

del activo, se destinará el 20 % de las utilidades líquidas al Fondo de Reserva General hasta que éste alcance un monto equivalente al 25 % del capital subscrito. Una vez alcanzado este monto, se destinará al Fondo de Reserva General el 10 % de las utilidades líquidas hasta que éste se eleve a una cantidad equivalente al capital subscrito. Del resto, sujeto siempre a las disposiciones del artículo 39, se pagará a los accionistas un dividendo no mayor del 5 % anual sobre el capital en acciones. Del saldo restante se tomará un 10 % para el Fondo de Reserva General del Banco y el resto se acreditará a la cuenta del gobierno nacional.

Cuentas y estados

Art. 52. — El ejercicio financiero del Banco durará un año. Dentro de los 20 días de su cierre, el Banco preparará y publicará su balance y cuenta de ganancias y pérdidas al día del cierre. La memoria anual del Banco será publicada por el directorio antes de la fecha de la asamblea anual.

Art. 53. — Inmediatamente después del día 15 y después del último día de cada mes, el Banco deberá preparar y publicar un estado de su activo y de su pasivo al cierre de los negocios en los días indicados. Este estado se ajustará a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo.

Disposiciones generales

Art. 54. — Durante el término que fija el artículo 1º, las relaciones que esta ley establece entre el Banco Central y los bancos, las disposiciones referentes a los préstamos directos o indirectos a los gobiernos y la composición del directorio y de las asambleas, no podrán ser modificadas sin la aprobación de los bancos accionistas, dada en una asamblea extraordinaria convocada expresamente al efecto.

Art. 55. — Las funciones del síndico serán desempeñadas por uno de los siguientes funcionarios que el Poder Ejecutivo designará anualmente: miembros del Tribunal de Cuentas; procurador del Tesoro e inspector general de Justicia. La remuneración del síndico será fijada por la asamblea con las mismas restricciones del artículo 10 *in fine*.

Art. 56. — La Inspección General de Justicia se limitará a intervenir en las asam-

bleas con el fin de asegurar el cumplimiento de las disposiciones respectivas de la presente ley.

Disposiciones transitorias

Art. 57. — El primer vicepresidente del Banco cesará en su mandato después de cinco años de servicios. De los primeros directores, cuatro cesarán en su mandato después de un año, y cuatro después de dos años de servicios, determinándose el orden de su retiro por sorteo, y sin que se aplique, en las elecciones que deberán hacerse para llenar las vacantes, la restricción del artículo 13 relativa a la reelección de los directores elegidos por los bancos extranjeros.

Art. 58. — Hasta tanto no se disponga por ley especial, no entrarán en vigor las prescripciones del artículo 41.

Art. 59. — Los empleados y obreros de la Nación, sujetos al régimen de la ley 4349 que se incorporen al Banco Central, podrán optar en el primer año de su funcionamiento, entre seguir bajo el régimen de dicha ley o acogerse a la ley de jubilaciones bancarias.

Art. 60. — Deréganse las disposiciones de otras leyes, en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 61. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dado en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a 31 de Enero de 1935.

JULIO A. ROCA.
Gustavo Figueroa.

Ley de bancos

Artículo 1º — Ninguna persona de existencia visible o ideal podrá desenvolver actividades en el territorio de la República que dependan principalmente de la aceptación de depósitos a la vista o a plazos, ni usar en su razón social, firma comercial o título, las palabras «banco», «banquero» o «bancario», ni abrir sucursales con el mismo calificativo, sin previa autorización del Poder Ejecutivo, que sólo la concederá después de oír al Banco Central y verificar que se ha cumplido con las condiciones de la presente ley y las prescripciones pertinentes de la ley de creación del Banco Central.

La autorización del Poder Ejecutivo nacional no será necesaria en los casos de bancos oficiales de las provincias.

Proporción mínima entre los depósitos y el efectivo

Art. 2º — Los bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros establecidos en la Argentina, deberán mantener en todo momento un efectivo que represente por lo menos el 16 % de sus depósitos a la vista y el 8 % de sus depósitos a plazo. Los bancos que tienen un capital no inferior a un millón de pesos moneda nacional, tendrán que mantener la mitad por lo menos de dicho efectivo en depósitos a la vista en el Banco Central y el saldo, hasta completar el efectivo mínimo fijado, deberá consistir en moneda, sea en billetes o metálico.

Art. 3º — El Banco Central podrá eximir transitoriamente a cualquier Banco y cuando mediaran razones circunstanciales, de la obligación de efectivo mínimo prescrita por el artículo anterior; pero mientras dure esta exención el Banco en cuestión no podrá repartir beneficios sin autorización del Banco Central; si dentro de los dos años no hubiera cumplido con las disposiciones del artículo 2º, o no hubiera podido presentar un plan que mereciera la aprobación del Banco Central, será liquidado de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio.

Operaciones prohibidas a los bancos

Art. 4º — Queda prohibido a los bancos:

- a) Comprar o conservar en forma permanente la propiedad de bienes raíces que no fueren necesarios para el uso del Banco y sus sucursales. En cuanto a los inmuebles para el propio uso de un Banco, o las acciones u obligaciones de la entidad a que pertenecen los inmuebles en cuestión, deberá someterse a la aprobación del Banco Central un plan gradual de amortización del importe que excediese del 20 % del capital y el 50 % de las reservas del Banco. En lo concerniente a los inmuebles de propiedad de los bancos en la fecha de la

ley, que no se destinasen a su propio uso, también deberá someterse al Banco Central un plan gradual de liquidación o amortización de los mismos. Cualquier Banco que recibiese bienes raíces en pago de deudas o que los adquiriese en defensa de créditos, tendrá que vender los mismos dentro del plazo de 4 años que el Banco Central podrá extender, en casos excepcionales, con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio;

b) Tener acciones dos años después de su adquisición, excepto lo dispuesto en el inciso anterior; y guardar en cartera, después del mismo plazo, obligaciones que representen más del 20 % del capital de cada una de las entidades que las emitieron y más del 10 % del capital y 25 % de las reservas del Banco; en cuanto a las acciones u obligaciones que en la fecha de esta ley estuvieran fuera de las disposiciones de este inciso, los bancos deberán someter a la aprobación del Banco Central un plan gradual de liquidación de las mismas. Cualquier Banco que recibiese acciones u obligaciones en pago o defensa de sus créditos, tendrá, para ajustarse a dichas disposiciones, un plazo de 3 años que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con aprobación de las dos terceras partes de su directorio;

c) Participar directamente en cualquier empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase. Las participaciones que los bancos tuviesen en la fecha de la ley o adquiriesen después en pago o defensa de sus créditos, deberán ser liquidadas en la misma forma y plazos que los inmuebles;

d) Tomar a su cargo la administración de los bienes de sus deudores morosos, por un plazo mayor de dos años, que el Banco Central podrá extender en casos excepcionales con la aprobación de las dos terceras partes de su directorio;

e) Aceptar de otro Banco acciones del mismo a título de garantía.

Depósitos

Art. 5º — A los efectos de la presente ley, «depósitos a la vista» significa y comprende a todas las obligaciones pagaderas dentro de 30 días, o sujetas a un aviso previo a su pago menor de 30 días; el término «depósito a plazos» comprende a todas las obligaciones — con inclusión de los depósitos de ahorro sujetos a lo dispuesto en el artículo 8º —, pagaderas después de 30 días o sujetas a un aviso previo a su pago no menor de 30 días.

Art. 6º — El interés que pagarán los bancos sobre depósitos a la vista será inferior por lo menos en 3 puntos al tipo de descuento mínimo del Banco Central; sobre depósitos de ahorro el interés será inferior por lo menos en 1 punto o dicho tipo de descuento.

Art. 7º — El excedente de los depósitos de ahorro sobre la cantidad de \$ 20.000 moneda nacional, por persona, no devengará interés alguno. En el caso de las sociedades cooperativas y asociaciones mutualistas, podrá pagarse interés hasta \$ 50.000 moneda nacional.

Art. 8º — Los bancos no admitirán depósitos de ahorro obligándose a restituirlos sin previo aviso mínimo de 30 días; pero podrán devolverlos en cualquier momento y cantidad, sin requerir preaviso; y en todo caso deberán hacerlo para cantidades mínimas y pequeños depósitos, según la reglamentación que deberá dictar el Banco Central.

Art. 9º — En caso de liquidación de un Banco, los depósitos de ahorro hasta \$ 5.000 moneda nacional tendrán privilegio sobre la generalidad de sus bienes muebles después de las otras categorías de créditos privilegiados que enumeran los códigos de Comercio y Civil y la ley de quiebras. El mismo privilegio tendrán los depósitos de las sociedades cooperativas y asociaciones mutualistas hasta \$ 10.000 moneda nacional.

Balances e informes

Art. 10. — Todo Banco deberá publicar dentro de los 60 días de la fecha de cierre de su ejercicio financiero, en los formularios prescritos por el Banco Central y siempre con anticipación a la realización de su asamblea ordinaria anual:

1º Su balance general;

2º Su cuenta de ganancias y pérdidas.

El balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas llevará el visto bueno de un contador público nacional.

Art. 11. — Todo Banco establecido en el país deberá presentar mensualmente al Banco Central un estado confidencial sobre sus operaciones, en el formulario que aquél prescribirá; y tendrá la obligación de suministrar al Banco Central cualquier ulterior información aclaratoria o ampliatoria de los datos consignados en este formulario que el Banco Central le requiriese. Estos informes serán firmados por el gerente general y el contador general del Banco, o sus reemplazantes, demostrarán el estado a la fecha del cierre de las operaciones de cada mes y deberán llegar a poder del Banco Central dentro de los 21 días subsiguientes a esa fecha.

El Banco Central publicará mensualmente un resumen del estado de los bancos, mostrando los totales de los diferentes rubros, sin poder divulgar los detalles individuales de cada establecimiento.

Inspección de bancos

Art. 12. — Los bancos tendrán la obligación de dar acceso a su contabilidad y a todos sus libros y documentos a los inspectores que periódicamente deberá mandar el Banco Central. En caso de comprobar violaciones a esta ley o a otras disposiciones legislativas, la inspección de bancos del Banco Central dará aviso al procurador fiscal, a fin de que éste gestione la imposición de las penas que correspondan.

Art. 13. — Las funciones de inspección, control y examen de los bancos, incluso el requerimiento de balances e informes, ejercitadas hasta el presente por la Inspección General de Justicia, serán del resorte exclusivo del Banco Central, a cuyo cargo queda la aplicación de esta ley.

Art. 14. — Las informaciones recogidas en los bancos por la inspección de bancos del Banco Central, tendrán carácter estrictamente confidencial y no serán comunicadas a los miembros del directorio del Banco con excepción del presidente, el que podrá informar al respecto al directorio cuando lo juzgare conveniente.

Art. 15. — La inspección de bancos del Banco Central se encargará de la liquidación

de los bancos cuando éstos se encontrasen comprendidos dentro de las disposiciones pertinentes del Código de Comercio o de la presente ley. Por el desempeño de esta función, ni el Banco ni sus funcionarios cobrarán honorario alguno; pero el Banco podrá cobrar a la masa el importe de los gastos en que incurriera en el desempeño de la misma.

Operaciones hipotecarias

Art. 16. — Los bancos que reciben depósitos y se dedican a la vez a operaciones hipotecarias, constituirán una sección especial para las mismas, asignándoles un capital determinado. Tales operaciones se financiarán exclusivamente con dicho capital, las reservas de la sección y el producto de la colocación de obligaciones y debentures.

Art. 17. — Las disposiciones de esta ley en materia de cuentas e inspección serán aplicadas a las secciones hipotecarias referidas en el artículo anterior, pero no a los bancos hipotecarios que no reciban depósitos.

Disposiciones varias

Art. 18. — Los bancos nacionales o sucursales de bancos extranjeros establecidos en la Argentina, destinarán anualmente por lo menos el 10 % de sus utilidades líquidas, para constituir un fondo de reserva, hasta que éste represente como mínimo el 50 % de su capital realizado y el capital y las reservas representen conjuntamente el 33 % de los depósitos de ahorro.

Art. 19. — Los bancos que infrinjan las disposiciones de esta ley serán pasibles de multas de \$ 500 m/n. a \$ 50.000 m/n.; y las personas que hubieran cometido la infracción, si sus actos no tuvieran pena mayor en el Código Penal, serán reprimidas con las mismas multas o prisión de seis meses a cinco años, o ambas penas a la vez según el monto y la naturaleza de las operaciones y la reincidencia en la infracción.

Art. 20. — En todo cuanto no esté establecido en esta ley, los bancos continuarán rigiéndose por las disposiciones del Código de Comercio.

Art. 21. — Deróganse las disposiciones de otras leyes, en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 22. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a 31 de Enero de 1935.

JULIO A. ROCA.
Gustavo Figueroa.

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias

Creación y objeto

Artículo 1º — Créase el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias con sede en la Capital Federal, a fin de adquirir los inmuebles y demás inversiones inmovilizadas o congeladas de los bancos y venderlos gradual y progresivamente, propendiendo a la radicación de familias de agricultores en tierras de valores ajustados a su rendimiento real, y a la transferencia de otras inversiones a manos que aseguren su mayor productividad.

Capital y fondo de reserva

Art. 2º — El Instituto Movilizador funcionará con un capital de \$ 10.000.000 m/n. y un fondo de reserva, formados por los fondos resultantes a favor del gobierno de las transferencias contempladas en el artículo 4º de la ley de organización, y con la emisión de bonos amortizables de acuerdo con el artículo 4º.

Directorio

Art. 3º — El directorio del instituto estará integrado por un presidente y dos vocales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y un vocal designado por el directorio del Banco Central entre personas de reconocida experiencia comercial y agropecuaria, por todo el término que dure el funcionamiento del mismo. No podrán ser miembros del directorio los funcionarios y empleados nacionales o provinciales, los insolventes y las personas que hubieran sido condenadas por delitos.

Compra y liquidación de activos congelados

Art. 4º — El Instituto Movilizador podrá pagar el activo que adquiriere de cada Banco parte en efectivo y parte en bonos amortiza-

bles, que a ese efecto podrá emitir con la autorización del Poder Ejecutivo. El reembolso total de los bonos a los bancos queda sujeto a la liquidación definitiva de los activos comprados.

Los bancos deberán asegurar al Instituto Movilizador el pago total de los créditos que transfiriesen al mismo, así como el valor íntegro de los otros activos adquiridos por el Instituto Movilizador.

Al transferirse los activos congelados al instituto liquidador deberá extenderse a los deudores, en cuanto al plazo y el interés, facilidades correlativas a las que hubiesen obtenido los bancos.

Art. 5º — Dentro del primer año de funcionamiento, el directorio establecerá el plan detallado de liquidación, siguiendo los lineamientos del plan general aprobado por la comisión organizadora, y fijando las normas y el plazo, de acuerdo con los cuales deberá ejecutarse, sujeto a las siguientes modalidades:

- a) Los inmuebles deberán venderse en licitación privada o pública o en remate público, según conviniese mejor en cada caso; los impuestos atrasados que se adendaren sobre los mismos quedarán en suspenso hasta que se realice la venta;
- b) En materia de créditos deberá agotarse todos los recursos legales para asegurar su cobranza, sin perjuicio de aceptar por decisión expresa del directorio, convenios o arreglos extrajudiciales que permitan una más pronta o mejor percepción del crédito; sujeto, todo ello, a la reglamentación especial que dictará el Poder Ejecutivo;
- c) No se reconocerán comisiones a cargo del instituto a los intermediarios utilizados en la venta de muebles, inmuebles y semovientes, salvo resolución expresa del directorio.

Administración y reparto del producido

Art. 6º — Para la administración y liquidación de los activos congelados, y salvo casos especiales en que podrá valerse de firmas competentes, el instituto utilizará a los bancos existentes, ya sea a los originarios de dicho activo, o a otros, pagando la comisión a convenirse, según la índole del mismo y en relación al producido anual.

Art. 7º — El producido anual de la liquidación y los intereses y demás recursos percibidos por el instituto una vez apartados los fondos requeridos por el artículo 8º de esta ley, se empleará íntegramente en pagar los intereses y la amortización sobre los bonos amortizables en poder de cada Banco, según lo que hubiere producido el activo congelado transferido por el mismo al Instituto Movilizador.

Presupuesto, cuentas e inspección

Art. 8º — El instituto se dará su presupuesto que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo.

Art. 9º — La Contaduría General de la Nación designará un contador delegado en el Instituto Movilizador, en orden a lo dispuesto en la ley de contabilidad (ley número 428) y a sus decretos reglamentarios. En todo lo que no se oponga expresamente a esta ley, el Instituto Movilizador se ceñirá a las disposiciones de la ley de contabilidad (ley número 428) pudiendo, sin embargo, apartarse de la misma en casos excepcionales y siempre con la autorización del Poder Ejecutivo.

Art. 10. — Las funciones de examen, inspección y control que determina la ley de bancos, se extenderán a las operaciones del Instituto Movilizador.

Art. 11. — Las operaciones que realice el Instituto Movilizador estarán exentas de toda contribución o impuesto nacional, provincial o municipal, así como también del sellado en las actuaciones judiciales, operaciones y gestiones que verifique ante los tribunales federales y ordinarios.

Relaciones con el Banco Hipotecario Nacional

Art. 12. — Facúltase al Banco Hipotecario Nacional a concertar préstamos con el Instituto Movilizador, sobre los inmuebles adquiridos de los bancos o recibidos en pago de créditos, a fin de facilitar su venta a terceros; o a convenir previamente con éste la realización de dichos préstamos después de vendidos los inmuebles a terceros.

Art. 13. — En el caso de propiedades susceptibles de ser colonizadas, el instituto, previo asesoramiento del Departamento de Agricultura, podrá concertar con el Banco Hipotecario Nacional los préstamos de colonización au-

torizados por las leyes respectivas en la forma prescripta en el artículo precedente.

Art. 14. — El Instituto Movilizador queda facultado para recibir de terceros, cédulas en pago de créditos o de adquisición de inmuebles, o a recibir de los adquirentes dichas cédulas en garantía del pago de los inmuebles comprados.

Art. 15. — El instituto deberá convenir con el Departamento de Hacienda y el Banco Hipotecario Nacional, antes de realizar las operaciones referidas en los artículos 12, 13 y 14, los plazos y la forma en que podrá vender en el mercado las cédulas recibidas del Banco Hipotecario Nacional o de terceros, en pago de créditos o de adquisiciones de inmuebles.

Disposiciones varias

Art. 16. — El Instituto Movilizador establecerá su propia escribanía para intervenir y registrar los contratos de compraventa, convenios y transacciones que deban pasarse en escritura pública. La escribanía intervendrá asimismo en las adjudicaciones que se efectúen por licitación pública o privada. Funcionará anexa a la Escribanía General de Gobierno y a ésta se transferirán los protocolos y archivos una vez terminado el funcionamiento del Instituto Movilizador.

Art. 17. — Los procuradores generales de la Nación y del tesoro, así como los asesores en materia legal o técnica de las dependencias del Estado, sean éstas autónomas o no, dictaminarán o asesorarán por escrito a solicitud directa del Instituto Movilizador.

El Instituto Movilizador utilizará los servicios de los técnicos y tasadores del Banco de la Nación Argentina y del Banco Hipotecario Nacional, salvo casos excepcionales en que juzgue conveniente utilizar a otros especialistas.

Art. 18. — Las relaciones del Instituto Movilizador con el Poder Ejecutivo se efectuarán por conducto del Departamento de Hacienda, al cual se le elevarán los balances mensuales, memorias y balances anuales y todas las informaciones que éste le solicite.

Art. 19. — Dentro de los siete años de funcionamiento del Instituto Movilizador, el Banco Central, previa aprobación del Poder Ejecutivo, podrá dar por terminadas sus funciones y confiar su liquidación y el cumplimiento de los convenios existentes a una comisión liquidadora o a su oficina de inspección de bancos.

Art. 20. — Deróganse las disposiciones de otras leyes en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 21. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a 31 de Enero de 1935.

JULIO A. ROCA.

Gustavo Figueroa.

Modificaciones a la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina

Artículo 1º — Modifícase el artículo 4º de la ley orgánica del Banco de la Nación Argentina (número 4.507), aumentándose dos vocales en el directorio del mismo, el que quedará constituido con ocho directores.

Art. 2º — Cuatro vocales serán nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, dándose representación a las diversas regiones del país. Los cuatro restantes los elegirá éste dentro del total de candidatos propuestos por las entidades referidas en el artículo siguiente. En ambos casos se requerirá acuerdo del Senado.

Art. 3º — En cada renovación de directorio del Banco de la Nación Argentina, propondrán al Poder Ejecutivo cuatro candidatos a vocales cada una de las siguientes entidades: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Unión Industrial Argentina, Sociedad Rural Argentina y Bolsa de Comercio de Rosario de Santa Fe. Facúltase al Poder Ejecutivo a incluir entre las entidades que proponen candidatos, a una que sea genuinamente representativa de los agricultores, en cuyo caso cada entidad elegirá tres candidatos.

Art. 4º — Modifícase el artículo 5º de la ley 4.507, aumentándose en tres mil pesos moneda nacional mensuales la suma fijada para ser distribuida entre los vocales del directorio, en proporción a su asistencia.

Art. 5º — Para la elección de los cuatro vocales del directorio, referidos en el artículo 2º de esta ley, deberán tenerse en cuenta las disposiciones que rigen en el artículo 8º de la ley 4.507, en todo cuanto no se oponga expresamente la presente.

Art. 6º — Modifícase el artículo 12 de la ley 4.507, el que quedará redactado en la siguiente forma: «El directorio no podrá conceder préstamos a la Nación, por un monto superior al 15 % del capital y las reservas del Banco, ni prestar a las provincias y mu-

nicipalidades, directa o indirectamente, ya sea en forma de descuentos, adelantos, créditos en descubierto, compra de letras, títulos u otros valores o adelantos concedidos a terceros con garantía de tales letras, títulos o valores, o en cualquiera otra forma. Las disposiciones del presente artículo regirán a partir de la constitución del Banco Central y no afectarán las operaciones anteriores a la sanción de esta ley.

«El Banco podrá, sin embargo, conceder adelantos con caución de títulos y cédulas nacionales, siempre que no se trate de operaciones destinadas en una forma u otra a financiar la colocación originaria de dichos valores nacionales para suministrar fondos al gobierno nacional directa o indirectamente, y por un monto que no podrá exceder de otro 15 % del capital y las reservas del Banco.»

Art. 7º — El Banco no podrá prestar más de \$ 500.000 m/n. a una sola firma, ni hacer a una sociedad anónima préstamos mayores a la mitad de su capital, sino con dos tercios de votos de su directorio.

Art. 8º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a 31 de Enero de 1935.

JULIO A. ROCA.

Gustavo Figueroa.

Modificaciones a la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional

Artículo 1º — Modifícase el artículo 8º de la ley orgánica del Banco Hipotecario Nacional, número 8.172, en la siguiente forma:

«De los ocho directores, cuatro serán nombrados directamente por el Poder Ejecutivo, dándose representación a las diversas regiones del país. Los cuatro restantes los elegirá éste dentro del total de candidatos propuestos por las entidades referidas en el artículo siguiente. En ambos casos se requerirá acuerdo del Senado.»

Art. 2º — En cada renovación de directorio del Banco Hipotecario Nacional, propondrá al Poder Ejecutivo cuatro candidatos a vocales, cada una de las siguientes entidades: Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Sociedad Rural Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario de Santa Fe y Corporación de Tenedores de Títulos y Acciones. El Poder Ejecutivo podrá agregar a tales instituciones, una entidad genuinamente representativa de los agri-

cultores, en cuyo caso cada una de las cinco instituciones elegirá tres candidatos.

Art. 3° — Para la elección de los cuatro vocales del directorio, referido en el artículo 1°, deberá tenerse en cuenta las disposiciones que rigen en el artículo 8° de la ley 8.172, en todo cuanto no se oponga expresamente la presente.

Art. 4° — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a 31 de Enero de 1935.

JULIO A. ROCA.

Gustavo Figueroa.

Ley de organización

Comisión organizadora

Artículo 1° — Autorízase al Poder Ejecutivo para nombrar una comisión organizadora, bajo la presidencia del ministro de Hacienda, que tendrá a su cargo proveer todo lo relativo a la organización del Banco Central de la República Argentina (ley número ...) y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias (ley número ...) y proponer al Poder Ejecutivo los reglamentos, estatutos y decretos reglamentarios que proyecte para el mejor cumplimiento de las leyes citadas y la Ley de Bancos (ley número ...).

Constitución del Banco Central

Art. 2° — El Poder Ejecutivo nombrará el primer presidente, vicepresidente y demás miembros del primer directorio del Banco Central, sujeto a las condiciones fijadas en la ley de creación del mismo.

La designación de presidente y vicepresidente del primer directorio se hará también con acuerdo del Senado.

Art. 3° — La comisión organizadora determinará la forma de suscripción de las acciones del Banco Central y los plazos en que los bancos deberán integrar dichas acciones y depositar en el Banco Central los efectivos correspondientes a sus depósitos, de acuerdo con las proscripciones legales.

Art. 4° — Autorízase al Poder Ejecutivo para que en el momento que lo juzgue oportuno y después de haber oído a la comisión organizadora, suprima la Comisión de Redescuento, la Junta Autónoma de Amortización

y la Caja de Conversión, y transfiera al Banco Central sus rubros activos y pasivos, junto con los depósitos oficiales del Banco de la Nación Argentina — salvo los de las reparticiones autónomas que resuelva exceptuar, lo mismo que los depósitos de garantía en las licitaciones públicas — el Fondo de Beneficios de Cambios (acuerdo general de ministros del 28 de Noviembre de 1933) y el Fondo de Divisas Extranjeras (artículo 43 de la ley de presupuesto vigente); de acuerdo con las condiciones y equivalencias que se determinará por el Poder Ejecutivo; y previa deducción de la circulación actual de la moneda subsidiaria de denominaciones de cinco posos e inferiores (incluso las monedas de níquel y cobre) de la que se hará cargo el gobierno nacional así como de la acuñación o emisión futura de esta moneda subsidiaria. Todo el oro existente en la Caja de Conversión en el momento de dictarse esta ley deberá transferirse al Banco Central, sin que el gobierno pueda tomar parte alguna de él, ni el Banco pueda usarlo con otros fines que los expresados en la ley de su creación. Hasta tanto se transfieran sus rubros activos y pasivos al Banco Central, la Caja de Conversión sólo podrá emitir billetes de acuerdo con las leyes existentes. Una vez efectuada esa transferencia, el Banco Central no podrá aumentar la emisión en otra forma que no sea las operaciones autorizadas por la ley de su creación.

Al realizarse la transferencia, el saldo de crédito de la Caja de Conversión contra el gobierno nacional por las viejas emisiones, después de deducir el importe de los billetes subsidiarios, quedará representada en el Banco Central por un bono sin interés otorgado por el tesoro nacional.

Las obligaciones estipuladas en pesos oro sellado, que hasta hoy pueden pagarse a 2,27 papel por peso oro, continuarán pagándose en igual forma.

Canje de las emisiones actuales

Art. 5° — Los billetes de la emisión actual de la Caja de Conversión transferidos al Banco Central que no le fuesen presentados para su canje dentro de los dos años contados desde la fecha en que el Banco haya comenzado la emisión de los nuevos billetes, dejarán de tener curso legal pero podrán ser canjeados en el Banco durante los tres años siguientes.

Al expirar dicho plazo, el saldo que no se haya presentado para el canje será transferido al Fondo de Reserva del Instituto Movilizador, previa deducción del costo del reemplazo de toda la emisión actual de billetes. Sin embargo, los billetes que se presentaran al Banco Central después de vencido el plazo mencionado, serán canjeados por billetes de dicho Banco por cuenta del gobierno.

Art. 6º — El Poder Ejecutivo dentro del plazo de dos años, a partir de la iniciación de las operaciones del Banco Central, y por intermedio de éste, conforme al artículo 36 de la ley de creación (ley número ...), reemplazará por nuevos billetes de curso legal los billetes subsidiarios de denominaciones de cinco pesos o inferiores.

Transcurrido dicho plazo, todos los billetes actuales de denominaciones de cinco pesos e inferiores, dejarán de tener curso legal, pero serán canjeados por moneda subsidiaria a su presentación al Banco Central.

El saldo de billetes que no se hubiera presentado al canje, tres años después de expirado el plazo de dos años establecido en el presente artículo, será destinado al mismo fin previsto por la segunda parte del artículo precedente.

Transformación de la deuda flotante

Art. 7º — Facúltase al Poder Ejecutivo a transformar en bonos consolidados del tesoro nacional de 3 % de interés y $\frac{1}{4}$ % de amortización acumulativa, el saldo del crédito contra caución de títulos del Empréstito Patriótico, y Letras de Tesorería actualmente en circulación, hasta un total de \$ 400.000.000 moneda nacional. Esta medida será tomada después de haber oído al respecto a la comisión organizadora. Los bonos provenientes de la transformación de las letras serán comprados a la par por el Banco Central con destino a las operaciones que prevé el artículo 32, inciso 1) de su ley de creación (ley número ...).

Art. 8º — El fondo de conversión a que se refiere el artículo 3º de la ley número 3.871 deberá ser cancelado, destinándose su activo a compensar deuda flotante del gobierno nacional.

Art. 9º — Facúltase al Poder Ejecutivo a convenir con el Banco de la Nación Argentina el arreglo definitivo del remanente de su deu-

da directa e indirecta con el mismo, después de haberse cumplido con las disposiciones de esta ley relativas a la deuda flotante del gobierno nacional, emitiendo al efecto los valores nacionales que fuese necesario.

Constitución del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias

Art. 10. — Antes de designar el presidente y los tres vocales del Instituto Movilizador, el Poder Ejecutivo deberá aprobar las normas generales para el funcionamiento del mismo trazadas por la comisión organizadora.

Art. 11. — El Instituto Movilizador procederá de inmediato a examinar las inversiones congeladas de los bancos, y en particular su relación con el pasivo de redescuentos, a fin de proponer a la comisión organizadora las condiciones de compra de dichas inversiones por el instituto, y el plan general de liquidación de las mismas.

Art. 12. — Después de cumplidas las disposiciones del artículo anterior y una vez apartados los fondos requeridos por el gobierno nacional a los fines del cumplimiento del artículo 5º de la ley de creación del Banco Central (ley número ...) la comisión organizadora determinará ad referendum del Poder Ejecutivo, el monto definitivo del fondo de reserva del Instituto Movilizador destinado a posibles quebrantos, el que podrá invertirse, lo mismo que el capital, en valores nacionales o en bonos consolidados del tesoro nacional.

Art. 13. — La diferencia entre el monto inicial de la reserva constituida conforme al artículo 2º de la ley de creación del Instituto Movilizador, y el monto definitivo según el artículo anterior, será transferida al gobierno nacional, el que la destinará íntegramente a la cancelación de la deuda flotante bancaria.

Transferencia gradual de las operaciones de cambio al Banco Central

Art. 14. — La comisión organizadora aconsejará al Poder Ejecutivo la forma y oportunidad en que deberá transferir gradualmente el manejo de las operaciones de cambio al Banco Central, de común acuerdo con el mismo, el que se ajustará a las normas establecidas por aquél, entretanto se restablezca la libertad del mercado de cambios.

Art. 15. — En el Fondo de Beneficios de Cambio transferidos al Banco Central, de acuerdo con el artículo 4º de la presente ley, se acreditarán las diferencias entre el tipo de compra y el de venta de las divisas provenientes de las exportaciones, las que aun cuando el Poder Ejecutivo autorizara su venta en el mercado libre sólo podrán ser negociadas por los bancos o firmas autorizadas así como las divisas provenientes de toda otra operación de cambios, y se debitarán:

- a) Las diferencias de cambio en los servicios de la deuda pública y demás remesas al exterior del gobierno nacional y los gastos de la Oficina de Control de Cambios, según presupuesto aprobado por el Poder Ejecutivo;
- b) Las diferencias en contra que pudieran resultar entre el valor de compra y el de venta de los granos adquiridos por la Junta Reguladora de Granos; y los gastos de la misma aprobados por el Poder Ejecutivo; si la diferencia fuera a favor, se acreditará a dicho fondo;
- c) Las diferencias de precio que el Poder Ejecutivo mediante organizaciones de emergencia que reputase conveniente, resolviese asignar directa o indirectamente a los productores agropecuarios, según el margen obtenido en la venta de divisas proveniente de la exportación del producto o grupo de productos a que se refieren dichas diferencias de precios; y los gastos de tales organizaciones aprobados por el Poder Ejecutivo.

Art. 16. — Los fondos no utilizados en la forma establecida en el artículo anterior podrán ser incorporados al Fondo de Divisas creado en el artículo 43 de la ley de presupuesto vigente, hasta que el Honorable Congreso decida su aplicación definitiva; también ingresará al mismo fondo el recargo de hasta 20 % sobre el importe de las monedas extranjeras, correspondientes al valor de las importaciones sin permiso previo, que deberá pagarse en divisas en los bancos autorizados antes del despacho a plaza de las mercaderías, conforme lo reglamente el Poder Ejecutivo y mientras se mantenga el sistema de los permisos previos de cambio.

Art. 17. — El Poder Ejecutivo determinará los requisitos necesarios, incluso la declaración jurada, para establecer la índole de todas las operaciones de cambio, podrá requerir de los negociantes de cambio o los que intervengan como compradores, vendedores, intermediarios o en cualquiera otra forma en las operaciones de cambio, las informaciones sobre las mismas que juzgue conveniente, e inspeccionar todos los libros y documentos pertinentes.

Las multas a aplicarse en casos de infracciones o falsas declaraciones, de conformidad con la reglamentación dictada por el Poder Ejecutivo, no podrán exceder del décuplo de la operación realizada.

Comisión de Divisas

Art. 18. — Créase con carácter transitorio la Comisión de Divisas bajo la presidencia del ministro de Hacienda o en su ausencia del subsecretario de Hacienda, compuesta de un representante ad honorem designado por cada una de las siguientes entidades: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Ministerio de Agricultura, Banco Central o Comisión organizadora mientras éste no se encuentre constituido, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Unión Industrial Argentina y Centro de Importadores. El director de la Oficina de Control de Cambios tendrá acceso a la comisión, con voz pero sin voto.

Art. 19. — Son funciones de la Comisión de Divisas:

- a) Proponer al Departamento de Hacienda las normas para el otorgamiento y aplicación de los permisos previos de cambio por la Oficina de Control de Cambios y verificar el cumplimiento de las normas aprobadas por el mencionado departamento;
- b) Entender en las reclamaciones presentadas por los importadores a la Oficina de Control de Cambios y aconsejar lo que juzgase conveniente al Departamento de Hacienda;
- c) Designar subcomisiones asesoras cuando lo juzgue conveniente.

Disposiciones varias

Art. 20. — La Comisión Organizadora someterá su presupuesto a la aprobación del Poder Ejecutivo. Los recursos necesarios se anticipa-

rán de rentas generales, con cargo de devolución por el Banco Central y el Instituto Monetizador cuando éstos se constituyan.

Art. 21. — El procurador general de la Nación, lo mismo que los asesores en materia legal o técnica de los poderes públicos, dictaminarán a solicitud de la Comisión Organizadora.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso dentro del próximo período ordinario de sesiones, de la forma en que ha dado cumplimiento a las disposiciones de esta ley.

Art. 23. — Autorízase al Poder Ejecutivo, al promulgar la presente ley, a señalar en cada caso el número de las leyes citadas.

Art. 24. — Deróganse las disposiciones de otras leyes en cuanto se opongan al cumplimiento de la presente.

Art. 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a 31 de Enero de 1935.

JULIO A. ROCA.

Gustavo Figueroa.

Sr. Presidente (Corominas Segura). — En consideración.

— Ocupa su asiento en el recinto, el señor ministro de Hacienda, doctor Federico Pinedo.

Sr. Martínez. — Pido la palabra.

Entra a consideración de esta Honorable Cámara un conjunto de proyectos sobre bancos y moneda, de gran importancia, y no obstante que le ha correspondido a este Parlamento estudiar y abordar en su actuación fecunda, proyectos de toda clase sobre asuntos de alto interés público, puede decirse sin hipérbole, que ninguno como éstos están llamados a tener más intensa repercusión y honda trascendencia.

En efecto, las cuestiones sobre moneda y sobre bancos están tan vinculadas a los fenómenos de la circulación e intercambio económico, que no sólo afectan un cúmulo inmenso de intereses, sino que además suscitan las más apasionadas controversias. Esta es una de aquellas materias en las cuales se pueden sostener con aparente razón,

los puntos de vista más contradictorios, y en que a veces la pasión puede llegar hasta deformar y presentar como expresiones de peligros a instituciones adoptadas como modelo en otras partes y de indisecable conveniencia para nuestro país.

No voy a recordar los lugares comunes al respecto, comenzando por el conocido aserto de que si el teorema de Euclides, verdad absoluta de las matemáticas, afectara algún interés, él hubiera sido ya contestado y supuesto de falso; pero sí quiero hacer presente cómo soluciones que desde el punto de vista teórico podrían ser objetadas con razón, porque conmueven principios doctrinarios determinados, cuando esas mismas soluciones son tomadas por otros países y en alguna forma su incidencia nos beneficia, se reciben aquí, dejando a un lado aquellos principios con el aplauso entusiasta de nuestros ortodoxos más firmes.

Tal el caso reciente del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, declarando la constitucionalidad de la derogación de la cláusula oro en los contratos; fallo que al beneficiar a todos los deudores del mundo, dado el rol de acreedor mundial de Estados Unidos, ha merecido porque a nosotros nos beneficiaba, permitiéndonos pagar en dólares papel depreciado, obligaciones contraídas a pagar en dólares oro, grandes aplausos, aun de parte de aquellos que, si se hubiera tomado en nuestro país una medida semejante para favorecer a los deudores internos argentinos, habrían llamado a somatén y afirmado que se había violado la fe pública, que el crédito quedaba quebrantado porque no se habían cumplido los compromisos en la forma estrictamente convenida y por último que se hacía un verdadero despojo a los acreedores. Pero la abrogación de la cláusula oro ha sido hecha por Estados Unidos e Inglaterra. Ello altera los contratos. Su validez ha sido declarada empero por sus tribunales superiores, más por razones económicas que jurídicas nos favorece y entonces hasta los campeones del derecho estricto, como no les afecta, baten el

parche a la sabiduría de aquella legislación arbitraria, si se quiere, pero realista.

Estos proyectos, por su naturaleza, porque están destinados a cambiar la estructura bancaria y monetaria del país, por la inseguridad que representa mientras no se ha adoptado una forma definitiva, son de aquellos que deben ser estudiados y resueltos con alguna urgencia. No se explica ni se concibe que proyectos de esta índole puedan permanecer durante meses y años en el tapete de la discusión pública; en el seno de las comisiones o en la mesa de disección de la Cámara. El sobado ejemplo que a veces se trae del laborioso trámite seguido para la modificación del sistema bancario de Estados Unidos, cuando se creó el sistema de la Reserva Federal en 1913, obedeció a causas especiales de estudio previo del régimen monetario mundial y de paso de un sistema de dispersión bancaria a un régimen de concentración y coordinación que alteraba substancialmente hábitos y modalidades peculiares.

En cambio, cuando no ha habido más que readaptar o coordinar instituciones ya existentes o suplementarlas como en el caso nuestro, el proceso ha sido rápido. El ministro Pinedo ha recordado, a ese efecto, en el Senado de la Nación cómo leyes semejantes a éstas, y tal vez algunas de mayor trascendencia, han sido votadas algunas en pocas semanas y otras en días, en países que siempre se nos presentan como modelos. Así, la ley Glass Steegall, en Estados Unidos, que modifica las condiciones del redescuento de la Reserva Federal, al permitir préstamos sobre papeles y títulos que hasta entonces no eran considerados como elegibles por el Banco Central, fué sancionada en pocas semanas. Lo mismo la ley de reconstrucción financiera. La ley que revaluaba el dólar, fué votada en pocas horas. En Bélgica la ley del año 1926 fué votada en tres días.

En Francia, la ley de Poincaré de relevamiento del franco, en siete días; la que autorizaba a comprar oro arriba de la par tuvo un trámite parlamenta-

rio de sólo tres días y la que fijó el nuevo valor a oro del franco fué tramitada y votada en un solo día.

Sin embargo, se ha hablado aquí de precipitación en el estudio y en la tramitación de estas leyes, cuando entre la presentación de los proyectos por el Poder Ejecutivo y la discusión en esta Cámara, casi van a transcurrir dos meses y cuando la Comisión de Presupuesto de este cuerpo se ha tomado más de un mes para hacer un estudio profundizado de los mismos. Es que, señor presidente, a falta de razones valederas, se han buscado todos los pretextos, se ha llamado con todas las campanas de alarma, se han agitado todos los argumentos para combatir una iniciativa oportuna y necesaria y de fecundas consecuencias para el ordenamiento bancario y monetario del país. Algunas veces hasta el patriotismo de los legisladores se ha invocado, incitándolos para que no concurrieran a las sesiones a fin de obstruir por el ausentismo, que es el suicidio del régimen parlamentario, la sanción de estas leyes; cuando lo lógico es que todos en la medida de sus fuerzas o de sus vocaciones contribuyeran con sus luces y consejos a corregir lo que pudieran tener de erróneo, o mejorarlas en lo que fueran susceptibles de perfeccionamiento.

Se ha dicho que estos proyectos tienen el fin mezquino de salvar a determinados bancos, cuando los bancos son en cierta medida instituciones públicas, y la caída de cualquiera de ellos, que hoy es imposible, sería una calamidad nacional de quién sabe qué hondas repercusiones. Se ha criticado a los partidos políticos de que no han expresado todavía sus opiniones sobre la materia, como si los partidos políticos fueran academias de ciencias económicas; y en ese afán opositor se ha llegado a sugerir que mientras cada uno de los miembros de este Parlamento no estuviera en condiciones de dictar una cátedra sobre la materia, no era conveniente tratar estos proyectos.

Pero el Congreso no puede dejar impresionarse por tan débiles argumentos. Su función es legislar y planteado

por el Poder Ejecutivo, que es el responsable de la dirección de las finanzas nacionales, los proyectos sobre creación del Banco Central, sobre ley de bancos, Instituto Movilizador, comisión organizadora de estas leyes y modificación de las actuales leyes orgánicas de los bancos oficiales, el Parlamento debe estudiarlos y resolverlos, porque todo el sistema anterior queda en realidad pendiente y provisional hasta que la soberanía popular, expresada por el órgano de su representación, decida cuál ha de ser la suerte definitiva de los mismos.

Por otra parte, no puede decirse que este estudio haya sido hecho con precipitación. En la comisión hemos tenido buen cuidado de hacer una tarea prolija y minuciosa. Se ha solicitado la opinión de los ex ministros de Hacienda de la Nación, opiniones que figuran en el anexo a la orden del día que tienen en sus bancas los señores diputados. De esas opiniones, dos fueron expresadas categóricamente, en un todo de acuerdo con los proyectos: la de los doctores Uriburu y Piñero. El doctor Pérez excusó su opinión por ser presidente del Banco Hipotecario Nacional, que aunque es repartición autónoma, su nombramiento depende del Poder Ejecutivo. El doctor Hueyo contestó en la forma que los señores diputados conocen.

La comisión aceptó en gran parte las indicaciones de los representantes socialistas y requirió de los bancos los informes que aquéllos reputaban necesarios y que eran compatibles con el secreto bancario y las disposiciones del Código de Comercio.

La comisión estudió detenidamente los proyectos y les ha introducido reformas que si bien no alteran su estructura esencial, aclaran y definen algunos puntos importantes que habían sido materia de crítica o argüidos de obscuridad. Ha hecho una labor seria y concienzuda, que la Honorable Cámara apreciará y podemos decir sin jactancia que hemos cooperado al mejoramiento de los proyectos.

Mi tarea como miembro informante de la comisión es en realidad fácil, porque este asunto viene a la consideración de la Cámara popular después de haber sido discutido y aprobado por el Senado en debates de gran profundidad, donde tanto por parte del señor ministro de Hacienda como por parte de los senadores informantes o impugnantes de los proyectos, hubo un gran acopio de erudición, un espíritu crítico certero y un análisis documentado. Lo substancial sobre los mismos ya se ha dicho, pero aun a trueque de repetir conceptos e insistir sobre puntos de vista ya contemplados, mi papel de miembro informante me obliga a esta tarea, de cuya extensión y aridez pido excusas a la Honorable Cámara.

Entrando a la cuestión en debate, diré que en esta materia de bancos y de moneda no se reforma por el prurito de reformar. Se reforma cuando hay realmente necesidad de encauzar las herramientas de que se dispone, cambiar las instituciones que se tienen, coordinar los elementos dispersos que se cuentan o establecer nuevos organismos que se necesitan. Nuestro sistema monetario está en realidad quebrantado o, mejor dicho, *détragué*, para emplear el término francés, que no le agrada a mi colega el señor diputado Pena.

Sr. Pena. — He dicho que son tantos los adjetivos que hay en nuestro idioma, y de los que se ha usado y abusado, que hasta es de mal gusto usar uno extranjero, que no todos pueden entender.

Sr. Martínez. — Nuestro sistema de conversión, que es un sistema autóctono, que fué en su hora un gran sistema y que sin embargo cuando se implantó fué calumniado y hasta se nos hizo aparecer como quebrantadores en cierta forma de la fe pública...

Sr. Dickmann (E.). — Eso lo ha reconocido todo el mundo.

Sr. Martínez. — Y todo el mundo después hizo, lo que en 1899 hicimos nosotros.

Sr. Dickmann (E.). — Porque no había otra cosa que hacer.

Sr. Martínez. — Ha llegado después a ser considerado como el modelo típico de la estabilización monetaria. Sin embargo, cuando fué creado sonaron también como ahora las trompetas en contra de ese sistema.

Sr. Pena. — Entonces se descubrió por los alquimistas.

Sr. Martínez. — El sistema argentino, consistía en el establecimiento de una Caja de Conversión, destinada, como su nombre lo dice, a convertir las emisiones circulantes por oro, aunque en realidad sólo funcionó la parte provisional del sistema, el artículo 7º de la ley 3.871 que vino a ser la parte substancial del mismo, que consistía en cambiar 44 centavos oro por un peso papel moneda legal y viceversa....

Sr. Repetto (N.). — La «viceversa» funcionó poco.

Sr. Martínez. — ... fué concebido en su conjunto como un mecanismo de conversión completo, es decir, destinado a efectuar la transformación de la moneda interior en moneda internacional y simultáneamente la transformación de la moneda internacional en moneda interior.

Además, este sistema fué aplicado al papel moneda, lo cual le confiere su carácter actual y destaca bien cómo este sistema es el antepasado de todos los sistemas modernos de patrón de cambio. De este modo aquellos que consideran al sistema de la India como el antecesor del nuestro y por lo tanto, que el régimen argentino no hizo sino seguir las huellas de lo que ya se había realizado en otros países, apreciarán la diferencia substancial entre ambos y convendrán en el carácter peculiar del sistema argentino, que ha llegado a ser considerado en su hora como el modelo clásico de la estabilización.

Sabido es que el gobierno de la India, para pagar las jubilaciones de sus funcionarios ingleses cuando éstos volvían a Inglaterra, como para hacer el servicio de los empréstitos, tenía que comprar libras esterlinas que debía adquirir las con rupias, moneda de plata, porque este metal servía tradicional-

mente como medio de intercambio en la India británica. Como la plata había bajado de valor y esta baja se seguía acentuando por el acrecentamiento de la producción de este metal y por la desmonetización que se producía a causa de la transformación de varios sistemas monetarios, resultaba un grave quebranto para el gobierno de la India el tener que comprar libras esterlinas con esta moneda depreciada. Cada baja de la rupia significaba un suplemento de gastos para el gobierno de la India. Por eso idearon ellos, previo estudio de una comisión que se reunió en Londres, disociar la rupia del metal plata decretando una cotización fija. Esa cotización, por ley del 26 de Junio de 1893, fué de 16 peniques la rupia. Pero era menester evitar que se comprara plata en el mercado libre y se llevara a la India para hacerla acuñar como rupia, que tenía como queda dicho, un valor mayor que el metal plata. Para ello prohibieron la acuñación libre de la plata. De este modo, la única forma de obtener rupias era enviar oro o libras esterlinas que valían como oro y aceptar el cambio de 16 peniques.

En realidad, hicieron de esta moneda de plata una moneda fiduciaria, porque tenía un valor de cambio superior al del metal con que se acuñaba. El mecanismo que más tarde se llamó patrón oro de cambio quedó constituido en esa forma.

Por eso muchos autores encuentran en el sistema hindú un antecedente inmediato del sistema argentino. Sin embargo, difiere substancialmente de aquél. El sistema hindú necesitaba dos reservas. Una de oro en Londres y otra de plata en la India. Además el sistema argentino fué aplicado al papel moneda y no al metal. Aquél fué concebido como un medio de evitar la desvalorización de la rupia. Este para impedir la valorización del papel.

Dice el profesor Baudin, de la Universidad de Dijon: que, como ocurre a menudo, los hechos han precedido a la teoría y que a la luz de las experiencias argentina e hindú, el economista

norteamericano Conan ha tenido la suerte poco común de exponer la teoría del patrón de cambio y poder aplicar su propio sistema en Filipinas.

El gobierno de Estados Unidos le invitó en 1903 a establecer un régimen monetario nuevo en las islas Filipinas. Conan empleó una moneda de plata que llevó su nombre, cuya acuñación limitó, e hizo decretar la conversión a tipo fijo de esta moneda, por el dólar norteamericano, por intermedio de una oficina. En otras palabras, el gobierno se comprometía a entregar, a tarifa idéntica e invariable, letras de cambio de las Filipinas contra Estados Unidos y letras de cambio de Estados Unidos contra las Filipinas, las primeras en oro, garantizadas por una reserva de metal amarillo, y las segundas en plata. Ocurrió que el balance de cuentas siguió siendo desfavorable al archipiélago, que el papel contra Nueva York fué mucho más solicitado que el papel contra Manila, y la reserva de oro disminuyó rápidamente. Esta experiencia nos demuestra — dice el profesor Baudin — la importancia del valor de la reserva, en lo que tendremos que profundizar.

El sistema argentino de conversión, entonces, señor presidente, al principio criticado y calumniado, fué considerado como el ejemplo típico de estabilización y tomado como modelo. El ministro Pinedo se ha referido a esta justiciera reparación histórica, no solamente en sus conferencias en el Instituto Popular, de 1931, sino también en el debate realizado en el Senado, con motivo de la discusión de estas leyes, recordando que el profesor Schaeffer, en una obra premiada por la Universidad de Colonia, lo presenta como tipo clásico de la estabilización monetaria, conociéndose el sistema como sistema argentino o sistema Tornquist.

Pero nuestro sistema sólo funcionó bien en las épocas de prosperidad. Demasiado rígido en las épocas de abundancia, permitía con la afluencia del oro el aumento del circulante papel; pero cuando el oro volvía a salir al

contraer el circulante provocaba alarmas injustificadas y críticas por la disminución de los medios de pago, que obligaron a su suspensión, primero en 1914 hasta 1927 y luego en 1929 hasta el presente.

Nada más oportuno me parece, que leer algunos párrafos del interesante trabajo sobre «La acción de emergencia en el problema monetario» publicado por el Ministerio de Hacienda en la época del doctor Enrique Uriburu, donde se hace una crítica concienzuda de nuestro sistema.

La vuelta espontánea a la paridad. — La crisis internacional ha sorprendido a la Argentina con una organización monetaria en extremo inadecuada.

En Agosto de 1927, después de 14 años de inconvertibilidad, el país pudo retornar al patrón oro. Lo hizo a la deriva, arrastrado por las circunstancias favorables que, en este como en otros casos de su historia financiera, solucionaron espontáneamente sus problemas, sin hacerle soportar de inmediato el costo de sus errores y su imprevisión.

El país volvió entonces a la paridad sin violencia alguna, a favor de la abundante inversión de dinero extranjero en empréstitos públicos y colocaciones privadas, y de la mejora en los precios internacionales de los granos y las carnes. Esta mejora no solamente neutralizó los efectos depresivos de la valorización del peso sobre dichos productos, en nuestro mercado, sino que se tradujo a la vez en un apreciable aumento de sus cotizaciones internas.

La Caja de Conversión se abrió sencillamente, sin haberse resuelto los problemas vinculados en forma estrecha a la moneda. De la deuda flotante legada por la administración anterior, sólo se consolidó una parte; y en lugar de hacerlo con el resto, especialmente con las Letras de Tesorería caucionadas en el Banco de la Nación, se prefirió emplear en nuevos gastos el producto de los empréstitos.

El metálico y la expansión del crédito. — Las mismas circunstancias favorables que promovieron el retorno a la par, determinaron un fuerte influjo de metálico en el país. En el período que transcurrió entre el 1º de Mayo de 1927 y el 1º de Septiembre de 1928, crecieron en pesos oro 180,5 millones las existencias vi-

sibles de metálico en la Caja de Conversión y los bancos.

Como suele suceder en tiempos análogos, aflojándose los resortes del crédito. Los bancos particulares redujeron sus tipos de interés para estimular el empleo de sus recursos acrecentados. Las instituciones oficiales no pudieron substraerse a la influencia de este ambiente de bonanzas; hablóse entonces de la baja del interés de las cédulas hipotecarias; y el Banco de la Nación Argentina resolvió reducir el tipo de sus descuentos. Fué en Mayo de 1928, cuando todos los indicios del mercado financiero internacional sugerían el desenvolvimiento inminente de un período de tensión monetaria. Muy poco tiempo antes el Banco Federal de Reserva de Nueva York había subido sus tasas, en franca reacción contra la política de crédito fácil seguida anteriormente, política que, como se sabe, contribuyó a fomentar en todo el mundo, la inversión de capitales de Estados Unidos.

Nuestro mercado monetario no fué insensible al acicate de las tasa de interés. Los balances bancarios de Julio de 1928 registran ya el primer incremento de préstamos después de un largo descenso. Más tarde se sumaría a este primer impulso, un factor de mucha mayor trascendencia en el proceso de inflación del crédito, a saber, el progresivo desequilibrio de las finanzas oficiales.

Las importaciones de metálico, al traducirse en la expansión del crédito, incubaron poco a poco las fuerzas de reacción monetaria.

La abundancia de fondos, indujo a algunos bancos a buscar inversiones que, sin ser intrínsecamente malas, son incompatibles con el principio de liquidez del activo bancario. En esos momentos la existencia de un control de bancos pudo ser de gran eficacia. Pero, desgraciadamente, el Congreso no consideró necesario legislar sobre este asunto antes de la apertura de la Caja, no obstante el proyecto del Poder Ejecutivo y las reiteradas enseñanzas de la experiencia bancaria nacional y extranjera.

Fué el segundo punto débil del retorno a la par. Pero tal vez el más importante haya sido no tener en cuenta el carácter precario de nuestro sistema de circulación.

El patrón oro esporádico. — La Caja de Conversión, o su precursora, la Oficina de Cambios del Banco de la Provincia, sólo ha funcionado en tiempos de bonanza, sin que

esto signifique desconocer su importantísimo papel histórico en la vida monetaria del país como freno al emisionismo caótico. La Oficina de Cambios, cuyo mecanismo sería más tarde el de la Caja, fué creada en 1867, y funcionó sin tropiezos mientras afluyó el metálico por la incorporación de fondos del exterior. Pero tuvo que cerrarse en 1876, después que el balance de pagos adversos exigió la salida de metálico.

El primer período de patrón oro posterior a la reconstrucción política del país, duró, pues, nueve años. El segundo lapso se inicia en 1881 con la reapertura de la Oficina de Cambios, y se desarrolla hasta 1886, en que vuelve a ser suspendido cuando aparecen dificultades considerables para mantenerlo.

Transcurren luego dieciséis años de moneda inconvertible y fluctuante, hasta que en 1903 comienza a actuar la ley de conversión de 1899, al calor de las inversiones de capitales extranjeros y los saldos positivos del intercambio comercial. El oro se acumula rápidamente y la Caja de Conversión pasa por la primera prueba de adversidad en 1907, resistiendo con éxito las extracciones de metálico provocadas por la intensa crisis bancaria de Estados Unidos. Los bancos habían manejado el crédito con cautela, sin que los tentase el aprovechamiento de sus encajes aparentemente excesivos. Mas no sucedió así en el período subsiguiente. Nuevas importaciones de oro abultan las existencias de los establecimientos bancarios, y llevan a éstos a una política imprudente de ensanche en sus préstamos. En 1913 se invierte el fenómeno, y el metálico refluye del país, poniendo a los bancos en una situación tanto más difícil cuanto mayor había sido su empeño en estimular la puja de los valores inmobiliarios. Ya en ese año se preconiza el cierre de la Caja de Conversión, que recién se hace efectivo en Agosto del siguiente, al estallar la guerra.

El tercer período de conversión dura, pues, diez años, o sea algo más que los dos precedentes.

Suceden luego otros catorce años de moneda inconvertible. En Agosto de 1927 se vuelve al patrón oro, con la efímera duración que conocemos. Desde Diciembre de 1929 estamos en plena inconvertibilidad.

El patrón oro ha sido, pues, en nuestro país un fenómeno intermitente y de duración relativamente corta. En los sesenta y cinco años

que, transcurren a partir de 1867 sólo hemos tenido veintitrés años de conversión.

Las fallas del sistema son sólo un factor. — Muy lejos estamos de afirmar que nuestras peripecias monetarias se deben exclusivamente a fallas del sistema. Ha habido factores de hondo arraigo, tanto o más importantes que las deficiencias orgánicas del mecanismo. Debemos manifestar rotundamente que no hay sistema monetario que pueda resistir el déficit del gobierno depuesto, sobre todo si a sus consecuencias se añaden las de una crisis internacional de extraordinaria intensidad y duración.

Pero téngase también presente que semejante estado de cosas en materia financiera no podría ocurrir con la misma amplitud si el ordenamiento monetario y bancario hubiese sido diferente. Un Banco con la intervención mixta del capital oficial y privado no hubiera permitido, sin duda alguna, que la Tesorería General de la Nación girase en exceso sobre su cuenta hasta constituir un débito de casi \$ 150.000.000. Tampoco habrían podido las instituciones particulares de crédito prestar con tanta liberalidad a los contratistas del Estado hasta tener una apreciable proporción de estas deudas en cartera. Una buena ley de bancos hubiese evitado a tiempo estas desviaciones y aquellas otras inmovilизaciones exageradas a que nos hemos referido con anterioridad.

Y un Banco Central, manejado con tino, habría amortiguado las tendencias expansivas del crédito mediante la absorción y esterilización del circulante creado por las importaciones de metálico.

Pero no es el caso de seguir con hipótesis sobre lo que hubiese podido ser en lugar de lo que fué. Lo esencial es anotar esas fallas del sistema e indicar sus correlativos en la medida en que son posibles, subrayando a la vez los otros factores concomitantes que se requieren para que ese sistema funcione adecuadamente a sus fines.

Como decía anteriormente, nuestro sistema sólo funcionó en épocas de prosperidad. Pudo soportar la grave crisis de 1907, pero al estallar la conflagración europea en 1914 fué clausurada. Como para una moneda inconvertible su valor depende únicamente de la rareza de la misma, es decir, de la mayor o menor cantidad que haya

de ésta con independencia absoluta de su cobertura metálica, desde el momento que esta cobertura al no funcionar la convertibilidad es inoperante, hemos llegado al caso aparentemente paradójico de que nuestra divisa con una garantía de oro del 80 % estuviera en 1921 depreciada; porque el oro encerrado en los sótanos de la Caja de Conversión, sin desempeñar su función específica de poderse cambiar por los billetes que lo representan, no puede darle al billete inconvertible nada de su substancia.

La Caja de Conversión volvió a abrirse en 1927. Esto pudo hacerse porque en aquellas épocas de prosperidad el valor de nuestras exportaciones fué suficientemente grande y además se colocó en el exterior una serie de empréstitos, a los que había que sumar los capitales extranjeros que se incorporaban; pero en cuanto la crisis mundial comenzó a hacerse sentir, cuando nuestras exportaciones disminuyeron, a medida que los capitales se repatriaban, y había que continuar con los servicios financieros, no obstante los déficit de los balances de pagos; comenzó el drenaje del oro en la Caja de Conversión y el presidente Irigoyen sin ley del Congreso, por decreto, la clausuró el 16 de Diciembre de 1929, día en el cual y por las razones que más adelante daré, fué extendido definitivamente el certificado de defunción de este instituto que con orgullo fué uno de las grandes creaciones de los hombres que hicieron nuestro relevamiento económico al final de la pasada centuria.

Después de la clausura de la Caja, se le fueron agregando con el andar del tiempo otras instituciones. El redescuento monetario, establecido en virtud de las leyes del año 1914, pero que en realidad no se había aplicado, comenzó a emplearse. Y entonces, el viejo sistema fué deformándose más, porque al lado de los billetes que representaban las antiguas emisiones inconvertibles, al lado de los billetes que eran certificados de oro pero que no podían ser convertidos en oro, por la clausura de la Caja, teníamos los bi-

lletes que representaban los documentos comerciales llevados al redescuento monetario.

Sr. Pena. — Eso no fué bajo la presidencia de Irigoyen.

Sr. Martínez. — ¿Usted quiere defenderlo a Irigoyen?

Sr. Pena. — No. Quiero restablecer la verdad.

Sr. Martínez. — Eso fué bajo el Gobierno Provisional y fué una medida necesaria en aquel momento, porque la escasez del medio circulante, por la exportación del oro para el servicio de las deudas públicas dejadas por el régimen depuesto, lo exigían.

Por último, la agudez de la crisis económica que tuvo que soportar el Gobierno Provisional y en gran parte también, el gobierno actual, a quien ha cabido la pesada tarea de hacer en medio de inmensas dificultades el relevamiento económico y financiero del país, agravados por los desaciertos y despilfarros de la administración anterior, en la época del señor Irigoyen, a quien parece admirar el señor diputado.

Sr. Pena. — No me atribuya ninguna admiración. El señor diputado ha dicho que Irigoyen dió el certificado de defunción a la Caja de Conversión y que en seguida le atribuyó la función del redescuento, y yo le he rectificado diciéndole que eso no lo hizo Irigoyen, sino el Gobierno Provisional.

Sr. Martínez. — Irigoyen cerró la Caja de Conversión, sin ley que lo autorizara; y como en materia económica, producido un hecho determinado, las consecuencias del mismo o su reparación ya no depende de la voluntad de los sucesores, debe buscarse en aquel acto la causa de la quiebra de un sistema determinado.

Sr. Presidente (Corominas Segura). — Para el mayor orden del debate, ruego a los señores diputados se sirvan no dialogar.

Sr. Martínez. — Continúo, señor presidente. Entonces a los billetes provenientes del redescuento monetario hubo que agregar después los que provenían de la parte redescotada del emprés-

tito Patriótico, redescuento que fué también una necesidad impuesta por las circunstancias, dada que la subscripción directa de aquél, si bien alcanzó el volumen previsto por sus autores, este volumen no era de las dimensiones necesarias para las necesidades fiscales que era menester remediar con urgencia. Los señores diputados recordarán, porque son hechos recientes, cómo el actual gobierno se hizo cargo de la administración del país en condiciones financieras y económicas realmente difíciles. En momentos en que los bancos sufrían un verdadero drenaje en sus depósitos y sus encajes se reducían a las cifras mínimas, en circunstancias en que los impuestos eran contradiados ante las autoridades judiciales por reputarlos inconstitucionales los contribuyentes; en una época en que desaparecían día a día las posibilidades, no sólo de expansión de nuestro comercio de exportación, sino también de mantenimiento de los tradicionales mercados para los productos argentinos, en momentos en que la administración estaba impaga en más de cuatro meses y existía una pesada deuda pública flotante. Y el gobierno tuvo que afrontar y resolver todos esos graves problemas. Encauzar la economía del país, restablecer las finanzas, comprimir los gastos públicos, equilibrar el presupuesto haciendo reducciones drásticas, mantener el honor nacional haciendo el servicio integral de la deuda pública; mejorar el régimen tributario, sancionando tributos como el impuesto a la renta, que dan un nuevo sentido a la justicia tributaria; proveer a todo lo conducente para que el navío estadual azotado por todos los vendavales, salvara los escollos, como lo ha hecho, llegando al puerto definitivo de un mensurable mejoramiento colectivo.

Y entre los expedientes a que tuvo que recurrir fué al Empréstito Patriótico como un medio que permitiera regularizar el pago de la administración y la cancelación de las deudas comerciales de gobierno, deudas que a su vez gravitaban sobre los bancos, porque éstos, imprudentemente, habían otorgado ex-

cesivos créditos a los acreedores del Estado y venían así en definitiva a soportar gran parte de la deuda flotante. Y como en aquellas circunstancias no se podía recurrir, por razones que todos los señores diputados conocen y aprecian, al crédito externo, no había más remedio que apelar, en parte al ahorro nacional y en parte a la creación por el redescuento de medios adicionales de pago, porque también era inconveniente extraer todo del ahorro colocado en los bancos, a los cuales se quería fortalecer, como ocurrió, estimulando la liquidez de los créditos del gobierno que los agobiaban.

Sintetizando, entonces, tenemos: nuestra Caja de Conversión fué un modelo de estabilización en su tiempo. Detuvo la valorización del peso papel que se producía, porque a pesar de no tener éste ningún respaldo de oro cuando se dictó la ley 3.871, como no se habían hecho nuevas emisiones y como en el entre tanto el país había progresado por aumento de población, riqueza y transacciones, el medio circulante estaba en función con las necesidades del país y en realidad, a medida que éstas aumentaban, aquél resultaba cada vez más reducido, lo que producía una rareza de medios de pago que en virtud de la conocida teoría cuantitativa de la moneda, determinan el aumento del valor de ésta. Por ello, si no se le hubiera puesto un límite de 44 centavos para la conversión, es posible que hubiera vuelto el peso papel a la paridad, es decir, a valer los 100 centavos oro. El artículo 7º de la ley de conversión 3.871, al establecer que la Caja emitiría y entregaría a quien lo solicitase, billetes moneda de curso legal por moneda de oro sellado en la proporción de 1 peso moneda nacional por 44 centavos de oro sellado, puso un *plafond* al valor del peso papel, pues quien necesitaba éste y en cualquiera cantidad, le bastaba ir a la Caja y entregar oro para que por cada 44 centavos oro se le diera 1 peso papel y de este modo al no necesitar buscarlo en plaza, no aumentaba la demanda de los mismos.

La Caja de Conversión funcionó bien en las épocas de bonanza, pero no po-

día funcionar bien en las épocas de penuria económica, como ya se ha explicado, y cuando fué sometida a esas pruebas hubo que clausurarla porque, aunque el rol del oro es entrar y salir en una Caja de Conversión y por consiguiente el stock de metal amarillo de éstas debe estar sujeto a esas continuas y a veces pronunciadas oscilaciones, no se puede evitar el luchar con ciertos fetichismos. El oro de la Caja, aunque esté encerrado, aunque no desempeñe su función, es para mucha gente, algo intocable, tan sagrado como la propia enseña de la Patria, y la salida del metal para llenar sus funciones monetarias tal vez hubiera sido considerada por muchos como una traición. Pero clausurada la Caja, cualquiera sea el volumen del oro acumulado a los fines monetarios, ya no significaba nada ese oro, porque el billete es inconvertible, es lo que dice Cassell en su obra, *Problemas de la Estabilización*.

«Está muy extendida la fantástica idea de que el valor de una moneda se determina por «algo oculto», bien sea una reserva oro, o de cualquier otro valor objetivo, un patrimonio nacional o del Estado, o bien una capacidad tributaria, o cualquiera otra cosa. Toda la discusión sobre la cuestión valutaria desde comienzos de la guerra mundial se embrolló en gran medida por dirigir la atención a «lo que oculta la unidad monetaria» o a lo que posiblemente «puede ocultar», y por la idea de que ello es en algún modo decisivo para su valor. Este error ha sido tan fatal cuando se trataba de enjuiciar exactamente la desvalorización de las monedas durante el período de inflación, como cuando se trataba la cuestión de cómo sería posible restablecer una situación valutaria estable. Sólo es posible formarse una idea exacta de la importancia de este problema, cuando se percibe claramente el principio fundamental de la teoría del dinero, según el cual, el valor del dinero sólo puede determinarse por la escasez de la cuantía de medios de pago circulantes, y esta escasez constituye en sí y por sí el único apoyo real y efectivo para el valor de una moneda.»

Establecida la imposibilidad del funcionamiento de la Caja y considerando, como hemos dicho, que junto con la institución inicial se le han ido agregando en el transcurso del tiempo otras instituciones y aditamentos como el redescuento monetario de papeles de comercio y el de títulos del gobierno que corresponden al Empréstito Patriótico, llegamos a esta conclusión: Que es imposible volver atrás. Que es imposible reconstruir con los restos dispersos la antigua y hermosa construcción.

Nadie podría pensar seriamente, me imagino, que hubiera la más remota posibilidad de abrir ahora la Caja de Conversión y menos dada la depreciación actual de nuestro signo monetario. Tampoco puede ser un ideal el seguir bajo un régimen de inconvención. Tanto los particulares como los partidos políticos, anhelan una moneda sana y estable; y para que una moneda sea estable, no digo que sea indispensable, pero sí conveniente su convertibilidad y como la experiencia mundial nos demuestra que para asegurar permanentemente ésta, en vez de los instrumentos rígidos y automáticos que son las cajas de conversión, son más convenientes los organismos elásticos y flexibles de los bancos centrales, nos resulta indispensable crear esas instituciones para dirigir la moneda, cuya convertibilidad con respecto al metal amarillo asegura su fijeza con relación a las otras monedas también convertibles; y, por ende, le proporciona toda su utilidad como medida de valores e instrumento de intercambio. Y como la experiencia también nos revela que no basta regular la moneda en sí, sino que es necesario regular el crédito, función ésta que respalda a aquélla, el Poder Ejecutivo ha creído con razón que sobre las ruinas de nuestra Caja de Conversión que fué en su hora una gran institución, pero que no puede subsistir porque el curso de los acontecimientos la ha reducido a añicos, debe levantar el edificio moderno y adecuado de una nueva institución: el Banco Central de la República Argentina.

Esta opinión del Poder Ejecutivo no es solamente suya sino de técnicos autorizados en la materia. Hace dos años, como es de pública notoriedad, nos visitó el señor Niemeyer...

Sr. Dickmann (E.). — ¿Por su voluntad?

Sr. Martínez. — Por invitación del gobierno argentino.

Sr. Dickmann (E.). — Y le pagaron.

Sr. Martínez. — Entiendo que no le pagaron ningún honorario. Por otra parte, que haya venido espontáneamente o por invitación, para el caso es lo mismo.

Sr. Dickmann (E.). — No para una función de esta naturaleza. Fué invitado y pagado por el gobierno. Es necesario decirlo.

Sr. Martínez. — No conozco los secretos de la Casa de Gobierno, pero entiendo que no fué pagado.

Este experto británico de reconocida autoridad, miembro del poderoso Banco de Inglaterra, estudió en el país las condiciones monetarias y financieras.

Sr. Dickmann (E.). — A pedido del gobierno.

Sr. Simón Padrós. — No podía ser de otra manera.

Sr. Dickmann (E.). — Pudo venir a estudiar.

Sr. Martínez. — No veo la importancia que pueda tener que haya venido invitado o no.

Sr. Dickmann (E.). — ¿Si me permite el señor diputado?... Tiene importancia. No quiero ahora ni aumentar ni achicar la autoridad del señor Niemeyer, pero quiero colocar exactamente el valor de su opinión. Fué invitado y pagado por el gobierno argentino y ha emitido su opinión, sobre cuyo valor no me expido ahora.

Sr. Simón Padrós. — En su día el ministro de Hacienda informó que no había sido pagado.

Sr. Dickmann (E.). — No habrá sido pagado su trabajo, pero ha sido una gran comisión y el gobierno ha pagado su estada, sus gastos, etcétera.

Sr. Simón Padrós. — ¿Faltaría que traigan un huésped y le cobren los gastos! (Risas).

Sr. Martínez. — El señor Niemeyer estudió la situación y su opinión estaba respaldada, además de su autoridad técnica, por el alto prestigio del Banco de Inglaterra, al que pertenece. Hizo un informe que todos los señores diputados conocen y en cuyo punto 10 establece claramente: «A fin de remediar esta situación, recomiendo que se tomen medidas inmediatas para coordinar la organización bancaria mediante la creación de un Banco Central de reserva y combinar esta medida con una legislación paralela que contemple ciertos aspectos del sistema bancario en general. He creído conveniente, para no tener que extenderme demasiado y presentar mis sugerencias en forma concreta, resumir la esencia de mis diversas recomendaciones dándole la forma de proyectos de ley, y al hacerlo deseo expresar que mucho debo a varios proyectos ya publicados en la Argentina y que me han sido de considerable ayuda. Y en el punto 11: «El sistema de Banco Central, evidentemente no puede producir todos sus efectos si no existe y mientras no exista un cambio exterior libre que se funde sobre una paridad legal de la moneda nacional y a su logro deben dirigirse todos los esfuerzos. No creo, sin embargo, en el momento actual y dado el estado en que se halla la mayor parte de las principales monedas del mundo, sea posible tomar decisiones definitivas respecto del valor futuro del peso o siquiera de su futura base. Creo deber colocarme, por consiguiente, en el caso de que esta cuestión será resuelta más tarde, cuando sea posible suprimir el control de los cambios por una nueva ley monetaria. Pero ello no es razón suficiente para no proceder a la erección de un Banco Central; antes, por el contrario, puesto que no sólo las dificultades del período intermedio requerirán una dirección coordinada, sino que el Banco Central sería por sí mismo un medio valioso para llegar a una moneda estable y un asesor de apreciable valor cuando se trate de establecer el momento y el tipo de la estabilización».

Vale decir que el señor Niemeyer, ya contestaba por anticipado la objeción presuntiva de los que sostienen que no conviene crear un Banco Central mientras no ha llegado todavía el momento de estabilizar el peso.

Pero no solamente el señor Niemeyer creía conveniente la instalación de un Banco Central. Tenemos al señor Kemmerer que ha fundado casi todos los bancos centrales de Sud América, y que ha organizado el sistema que lleva su nombre. No voy a fatigar a la Cámara leyendo el informe de Kemmerer, pero sí voy a pedir su inserción en la parte respectiva. Sin embargo, no me resisto al deseo de leer lo siguiente: «La creación del Banco Central de Chile, responde a la necesidad de dotar a ese país de un organismo capaz de mantener la estabilidad de la moneda y el medio circulante, de acuerdo al movimiento de los negocios. Se ha discutido mucho sobre cuáles deben ser las condiciones que debe reunir un Banco Central. Pero la experiencia de la posguerra ha permitido sintetizar las características de tales bancos». Un Banco Central debe poseer el *monopolio de la emisión* para poder regular en forma efectiva el medio circulante. Su actuación bancaria debe *estar libre* de toda clase de *influencia política*, para poder realizar su función dentro de un marco nacional carente de parcialidad. Debe estar dotado, en consecuencia, de un directorio variado en que se encuentren representadas las diversas actividades nacionales, y en el que si bien tenga una participación el gobierno, su influencia sea mínima en la dilucidación definitiva de los asuntos bancarios. Debe ser *un banco de bancos* que posea la *centralización de las reservas del país*, obtenida mediante encajes obligatorios o facultativos de los distintos bancos comerciales de la Nación, que entregan una parte de sus reservas al Banco Central. No debe hacer *competencia* a los otros bancos. Por eso no deberá pagar intereses por los depósitos que reciba, con el fin de evitar la atracción de capital privado a dicha institución, en desmedro de la ganancia de

los bancos comerciales. Debe conceder préstamos y redescuentos a los bancos acionistas en los momentos de emergencia. De ahí que su cartera deba ser esencialmente *líquida y realizable*, para poder satisfacer los pedidos urgentes de numerario que se le hicieran. Su carácter específico de Banco Central, le obliga a no realizar operaciones a largo plazo que son de dudosa liquidez, a no interesarse en actividades comerciales, y a no tratar de usufructuar en demasía el negocio bancario con el fin de obtener dividendos apreciables, que le obliguen la mayor parte de las veces a interesar una parte de sus fondos en operaciones comerciales, llevándole a la situación apremiante de no tener el circulante necesario en los momentos críticos por que pueda atravesar el mercado monetario.

En síntesis, la falta de injerencia política en su administración, el monopolio en la emisión de billetes, la centralización de las reservas bancarias, la regulación del medio circulante mediante la aplicación de la tasa de descuento y las operaciones del mercado abierto, y la *estabilidad del signo monetario*, que es la consecuencia de todos estos hechos, permiten que el Banco Central, realice una función de trascendental importancia en el mecanismo financiero económico de la Nación.

Su existencia permite una atenuación de las crisis periódicas que sufre un país, y lo que es más importante aún, consigue la estabilidad de la moneda, que constituye en el mundo económico contemporáneo la condición sine qua non para que los negocios se realicen con soltura, confianza y tranquilidad.»

Pero es que tenemos, señor presidente, una experiencia más reciente todavía, y esa experiencia nos la da un país de condiciones físicas semejantes a las nuestras, de producción competitiva con nosotros, de instituciones similares. Me refiero al Canadá. El Canadá acaba de establecer por ley del 3 de Junio de 1934 su Banco Central, y ese Banco Central ha sido creado pre-

vio el estudio de una comisión presidida por el señor Mac Millan, la Real Comisión de Bancos y Moneda del Canadá, algunas partes de cuyo estudio pido la inserción también a la Honorable Cámara.

Dice: «El Banco Central tiene tareas de carácter nacional e internacional. Del punto de vista nacional un Banco Central tratará de regular la moneda y el crédito dentro de los límites establecidos por la ley y los estatutos, teniendo en cuenta los intereses primordiales de la vida económica de la Nación, y deberá dentro de lo posible controlar y defender el valor exterior de la unidad monetaria nacional. Del punto de vista internacional deberá buscar, mediante una cooperación oportuna y conveniente con los institutos similares de otros países, atenuar las fluctuaciones en el nivel general de las actividades económicas. De un Banco Central no puede esperarse que influya directamente en el precio de una mercadería determinada, ni es posible que se cargue al Banco Central con la responsabilidad de controlar el nivel general de precios del país. Existen muchos factores de distinta naturaleza que influyen en dicho nivel; no pudiendo esperarse de un Banco Central que funcione directamente dentro de la órbita monetaria, que tenga un control completo sobre dicho nivel, si bien puede tener ciertas influencias sobre los precios».

«Un Banco Central — agrega el informe a que me refiero — no es, pues, ni puede ser un competidor de los bancos comerciales. Sus funciones son reguladoras e indirectas», con lo cual contesta también a la objeción de los que pretenden que sobre la base del Banco de la Nación, convertido en una sociedad mixta, podría instalarse el Banco Central.

Sobre la oportunidad o inoportunidad de establecer un Banco Central, mientras dure la inconvención, dice el informe Mac Millan: «Lejos de ser inoportuno su establecimiento, existen razones poderosas para su creación. El hecho de que por el momento el dólar

canadiense sea una moneda inconvertible puede considerarse más bien, desde un cierto punto de vista — y resulta admirable, señor presidente, que se prevean todas las objeciones posibles —, como una ventaja de una desventaja en las operaciones preliminares del Banco. Evidentemente el Banco debe trabajar en estrecho acuerdo con el gobierno en lo pertinente al valor externo de la unidad monetaria, y si estuviera desenvolviendo a este respecto una política nacional, el Banco deberá tener claramente el apoyo del gobierno en sus operaciones de cambio internacional. En estas circunstancias, el Banco eludiría, al comenzar sus operaciones, los peligros que pudiera tener si iniciara sus tareas con la obligación legal de asegurar la convertibilidad del circulante en un momento en que las fuerzas económicas, gradualmente acumuladas, hubieran debilitado ya la posición de la moneda canadiense».

Respecto a las objeciones que pudieran presentar la aplicación de un Banco Central en el régimen bancario, dice la comisión Mac Millan que, por el contrario, los bancos centrales estarían expresamente destinados a vigorizar el sistema bancario existente. La transferencia inicial de los activos que requiere de los bancos no es de un carácter que pueda perturbar las operaciones de los bancos comerciales. Al referirse, finalmente, al costo del establecimiento del Banco Central, sostiene la comisión que no debe ser grande, porque su capital deberá ser de proporciones modestas, por lo mismo que no existirá la necesidad de producir grandes ganancias para pagar dividendos a sus asociados.

Como se ve, señor presidente, estamos en muy buena compañía: el profesor Kemmerer, el perito Niemeyer, la Real Comisión Mac Millan y luego la experiencia de todo el mundo, donde se han instalado bancos centrales en todos los países, de los cuales uno de los últimos, el de Grecia, se ha establecido por inspiración de la sociedad de las Naciones y la estructura de cuyo Banco ha servido ya en parte

de modelo a varios otros bancos centrales.

Entonces, señor presidente, si es imposible el retorno al viejo sistema de la Caja de Conversión, por las deformaciones que ha sufrido con el tiempo; si el país desea volver a la estabilidad monetaria y a la convertibilidad de su billete, es necesario crear un organismo adecuado para lograr estos propósitos. Este organismo es una institución que se llama Banco Central y que tiene por objeto, como dice en su definición el artículo 3º de nuestro proyecto de ley, concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de las fluctuaciones en la exportación y las inversiones de capital extranjero, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el valor de la moneda; y está destinada a regular la cantidad del crédito y de los medios de pago adaptándolos al volumen real de los negocios; y a promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario; y si estas instituciones han sido organizadas en países semejantes al nuestro y tenemos toda una experiencia al respecto, ¿qué razones valdras puede haber para oponerse a la creación de un instituto semejante?

Yo me explicaría si nuestra Caja de Conversión funcionara, si nuestro billete fuera convertible, que por razones puramente teóricas no se cambiara un sistema que funciona bien por otro que aparentemente es más perfecto; pero, como ya lo he dicho, no existen más que ruinas de aquellas instituciones; y cuando es un absurdo el sólo pensar que con los elementos dispersos del régimen de la Caja de Conversión, hoy *détraqué*, puede volverse a la convertibilidad de los billetes; cuando el peso argentino se ha depreciado por las causas conocidas y como una consecuencia de la crisis aguda que soportamos, de la disminución del valor de la exportaciones, por los servicios financieros al exterior que tenemos que hacer, por el drenaje de fondos producidos, a pesar de todas las medidas del control de cambios, ¿cómo puede pretenderse que se resu-

citen aquellas instituciones caducas y que se oponga a la creación del Banco Central, por solo espíritu de contradicción?

El Poder Ejecutivo ha elaborado un plan perfectamente orgánico y armónico. El fondo, el eje del sistema, es el Banco Central, para poder llegar en su hora a la convertibilidad de nuestra moneda, para regular el volumen de los medios de pago, para atenuar consecuencias de la fluctuación que pueda determinar el curso irregular de nuestras exportaciones o en la incorporación de capitales extranjeros sobre nuestra moneda, crédito y actividades comerciales.

Pero un Banco Central sería imposible establecerlo sin una ley reguladora de bancos, sin que el Banco Central manejara y controlara todo el organismo bancario del país, pusiera los frenos indispensables, marcara las rutas convenientes, eligiera el papel redescontable; y por eso el Poder Ejecutivo proyecta la ley de bancos, cuya necesidad ha sido tan sentida, independientemente de estos proyectos, que ya existían a la consideración del Parlamento algunas iniciativas como la de nuestro distinguido colega por Mendoza, el señor diputado Godoy, o la de los señores diputados socialistas que encabeza el diputado Bogliolo.

Pero la ley de bancos tampoco podría aplicarse sin un reajuste previo, porque los bancos han sufrido las consecuencias de la crisis y no se puede pasar bruscamente de una situación a otra, sin una serie de medidas que permitan llegar a la liquidez bancaria. Una disciplina bancaria no puede establecerse sin que previamente no se dé una gran base de sustentación a estos organismos, y para dársela el Poder Ejecutivo proyecta un Instituto Movilizador.

Sr. Pena. — ¿Hay también bancos *détraquéé*?

Sr. Martínez. — No hay bancos *détraquéé*. Pero los bancos por su propio contenido sufren con mayor intensidad las consecuencias de la crisis. Simples intermediarios entre el ahorro que busca una inversión y el que desea emplearlo, responden a su masa deposi-

tante al mismo tiempo que muchos de sus deudores por la caída de los precios y demás consecuencias de la crisis, no pueden cumplir sus obligaciones o necesitan plazos mayores que los comunes, lo que determina la congelación de parte de sus activos. El Instituto Movilizador tampoco es una invención. En materia de instituciones no hay que creer en la fecundidad de los hombres. Son siempre más o menos las mismas, modificadas a veces por situaciones de ambiente, de climas, de circunstancias; pero más o menos las instituciones humanas son todas semejantes en los distintos países y esto más a medida que avanza el acercamiento espiritual entre los pueblos. Ya he recordado en esta Cámara el ejemplo clásico de la justicia federal de Estados Unidos: considerado al principio como un invento genial de los convencionales de Filadelfia, resultó posteriormente, a raíz de ciertas investigaciones históricas, que en Egipto había magistrados que desempeñaban funciones semejantes de jueces de excepción, de juez de extranjeros, que son nuestros jueces federales y los jueces de la constitución de Filadelfia. Lo mismo ocurre en la materia de que me estoy ocupando: el Poder Ejecutivo inteligentemente ha adaptado construcciones que ya existen en otros países. Y respecto del Instituto Movilizador tenemos el modelo reciente de Bélgica, en el cual se inspira principalmente el proyecto argentino.

Sentados estos postulados, de que para establecer el Banco Central es menester una ley de bancos y para que esta ley de bancos no sea una ficción sino una realidad, es indispensable el Instituto Movilizador, la Cámara encontrará las razones por las cuales su Comisión de Presupuesto y Hacienda ha despachado favorablemente estos proyectos, como un conjunto armónico y coordinado, que constituye un solo plan y cuyas piezas importantes es absurdo separar.

Y paso, entonces, señor presidente, a analizar dichos proyectos.

Ya he dado las razones que abonan para el establecimiento del Banco Cen-

tral. Estudiemos, entonces, la estructura del proyecto que está a consideración de la Cámara.

El Poder Ejecutivo proyecta crear un Banco Central de la República Argentina sobre la base de una sociedad privada, pero de interés público, que tenga toda la independencia necesaria del Estado y que al mismo tiempo goce de los privilegios que le sean indispensables y desempeñe las funciones específicas que le corresponden. La razón de esta construcción sobre una base de sociedad privada estriba en la necesidad de que un organismo tan delicado esté en absoluto desvinculado de la política. No se explicaría en nuestro medio ni en ningún otro la creación de un Banco Central dependiente del gobierno, porque sería introducir un factor de perturbación y desconfianza, y la base del crédito, como es sabido, reposa justamente en la confianza.

El Banco Central que se crea es de capital limitado, para que el aporte de los bancos accionistas no sea gravoso y porque por la índole misma de esta institución no necesita mayores capitales. Las acciones son nominativas, para que pueda tener el Banco el control de sus propios accionistas, y por eso se establece que el Banco puede negar, sin dar razones, el traspaso de esas acciones. El capital del Banco es sólo de 30.000.000: 10.000.000 que subscriben los bancos con un capital mayor de 1.000.000 de pesos, 10.000.000 que aporta el gobierno nacional, y los otros 10.000.000 que quedan pendientes de subscripción para que puedan incorporarse en el futuro nuevos bancos o lo puedan hacer los que actualmente tengan menos de 1.000.000 de capital subscripto cuando lleguen a tener más de esa cantidad.

En términos generales se considera que no es necesario que un Banco Central posea un capital excesivo. Así lo sostiene la comisión Mac Millan en sus sugerencias sobre la creación del Banco de Canadá. El profesor Kemmerer dice lo mismo. Por otra parte, un capital excesivo alienta la concesión de préstamos imprudentes y otras prácticas ban-

carias malsanas, pues un Banco desea, naturalmente, tener sus fondos colocados en forma adecuada, en inversiones que rindan utilidad.

Tengo aquí una planilla comparativa del capital autorizado de los principales bancos centrales, expresado en millones de francos a la par; comprendo 26 bancos centrales, y la Argentina ocuparía por este proyecto el décimo lugar. Inglaterra tiene 1.813 millones de francos; Estados Unidos, 973; España, 871; y la Argentina vendría a tener 325.

He aquí la lista:

**Capital autorizado de los principales
bancos centrales**

(En millones de francos a la par)

1 Inglaterra	1.813,5
2 Estados Unidos	973,9
3 España	871,7
4 Japón	763,4
5 Bélgica	709,8
6 Italia	671,7
7 Polonia	572,7
8 Chile	465,8
9 Suecia	342,0
10 Argentina	325,0
11 Colombia	290,7
12 Suiza	246,2
13 Noruega	239,4
14 Holanda	205,2
15 Dinamarca	184,7
16 Francia	182,5
17 Hungría	133,9
18 Canadá	127,6
19 Sud Africa	124,2
20 Austria	107,7
21 Bulgaria	92,2
22 Rumania	91,6
23 Nueva Zelandia	62,1
24 Dantzig	39,7
25 Estonia	34,2
26 Lituania	30,6

Como he dicho, el proyecto establece la integración del capital por parte del Estado y por parte de los bancos comerciales del país. Es, como se ve, un sistema mixto. Este sistema mixto ha sido considerado conveniente por tra-

tadistas tan eminentes como Gregory, que hace consideraciones muy importantes sobre la propiedad del Banco Central. Este autor, en su obra sobre *Gold, unemployment and capitalist*, London 1933, establece que el primer punto que surge al discutir la forma de gobierno de un Banco Central es el de su propiedad. La reacción actual contra los bancos centrales de posesión estatal encuentra su origen natural en las dificultades a que se han visto expuestos los bancos centrales en el período bélico y posbélico. Estas dificultades a que se han visto expuestos la mayoría de los bancos fueron muy agudas cuando el Estado era el único propietario, debido a que por estas circunstancias la facultad de nombramiento se encontraba localizada en los poderes políticos. «No puede negarse que en ciertos países existe un fuerte sentimiento político en favor de los bancos gubernamentales, pero debe manifestarse que este sentimiento puede modificarse si se da a conocer al público los siguientes puntos de vista: a) El peligro inherente que tiene un Banco de propiedad del Estado, de ser, bajo la presión política, un mero instrumento de finanzas dislocadas; b) El fundamento débil de establecer un Banco gubernamental cuando existe un mercado amplio de capitales y cuando existe un fondo de experiencia general de orden bancario y comercial, que puede utilizar el Banco para la constitución de su personal ejecutivo. Esto se aplica, sin duda a todos los Dominios británicos.» Sigue Gregory en una enumeración que sería larga, para concluir que la adopción del principio de un Banco de accionistas no excluye la participación del Estado en la propiedad de un Banco Central, ya que todo lo que se hace es limitar su participación a un interés minoritario en la empresa.

El principio de que el Banco debería ser poseído por accionistas está perfectamente de acuerdo con la limitación de los poderes de interferencia de los accionistas, como se establece en la gran mayoría de los bancos centrales europeos. Los bancos centrales no exis-

ten para beneficio de los accionistas, sino que los accionistas existen para beneficio del Banco Central. Ello es una necesidad para prevenir que el Banco esté expuesto a ser controlado por intereses políticos.

Según el artículo 3º del proyecto, como he dicho, el Banco tiene como funciones: «a) Concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de la fluctuación en las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el valor de la moneda; b) Regular la cantidad de crédito y de los medios de pago, adaptándolos al volumen real de los negocios; c) Promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario, y aplicar las disposiciones de inspección, verificación y régimen de los bancos establecidos en la ley de bancos; d) Actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de los empréstitos públicos.

Es de advertir que no todos los bancos centrales enuncian el objeto de su funcionamiento, pero hay muchos que lo establecen. Nos parece acertado a los miembros de la comisión el pensamiento del Poder Ejecutivo de fijar con precisión cuál es el alcance del Banco Central y sus funciones específicas.

Entre las leyes de bancos centrales que establecen claramente su objeto, tenemos el Banco Nacional austriaco, que en su artículo 1º dice que se establece con el fin de regular la circulación monetaria de Austria, así como de facilitar la compensación de pagos y proveer a la utilización de los capitales disponibles dentro de los límites de sus estatutos. Su función principal es la de preparar los pagos en efectivo, vale decir, el rescate de los billetes en metálico, mediante la fijación de una reserva en oro y en depósitos pagaderos en moneda estable, y la de asegurar el mantenimiento de la convertibilidad cuando ella se establezca. Mientras tanto, el Banco usará de todos sus medios para asegurar que

por lo menos sus billetes, cuando estén expresados en la moneda de un país de patrón oro o moneda estable, no sufran depreciación.

El propósito del Banco Nacional de Bulgaria es el de mantener el valor áureo de sus billetes, y a tal fin posee el control de la circulación monetaria (artículo 2º). El objeto de la creación del Banco de la ciudad libre de Dantzig, es el de regular la circulación monetaria, facilitar la compensación de pagos, las transacciones en cambio exterior y realizar todos los otros negocios bancarios autorizados por sus estatutos. (Artículo 2º).

El Banco de Estonia tiene como primer deber el de asegurar que el valor áureo de sus billetes permanezca estable. A tal fin, deberá ejercer un control dentro de los límites de sus estatutos, sobre la circulación monetaria y el crédito.

El objetivo del Banco de Finlandia es el de mantener la estabilidad y garantía de su sistema monetario y ayudar y facilitar la circulación del numerario. (Artículo 1º).

El Reichbank alemán tiene la tarea de regular la circulación monetaria en todo el territorio de Reich, así como la de facilitar la compensación de los pagos y proveer a la utilización del capital disponible. (Artículo 1º).

El primer deber del Banco de Grecia es el de asegurar la estabilidad del valor metálico de sus billetes. A tal fin ejercerá un control sobre la moneda y el crédito de Grecia, dentro de los límites establecidos en sus estatutos. (Artículo 4º).

El Banco Nacional de Hungría deberá regular la circulación monetaria, facilitar la compensación de pagos y tomar las medidas convenientes para la utilización del capital disponible, de acuerdo a las disposiciones de los estatutos. Su función principal será la de preparar la convertibilidad mediante la formación de una reserva de oro en lingotes y de fondos pagaderos en moneda estable y la de asegurar el mantenimiento de los pagos metálicos tan pronto como ellos fueren estableci-

dos. Proveerá de todos los medios a su disposición para mantener la estabilidad de sus billetes en términos del patrón cambio oro, hasta tanto se vuelva a la convertibilidad. (Artículo 1º).

El artículo 1º del Banco de Lituania dispone que sus funciones son las de regular la circulación monetaria, facilitar los pagos nacionales y extranjeros, obtener un sistema monetario vigoroso y estable, y estimular el crecimiento de la agricultura, el comercio y la industria. (Artículo 1º).

El Banco de Polonia se establece con el propósito de mantener la estabilidad de la moneda y de regular la circulación y el crédito. (Artículo 1º).

El objeto de la creación del Banco Nacional de Rumania es el de mantener la estabilidad de la moneda, así como de proveer a la circulación monetaria y al control del crédito. (Artículo 1º).

El propósito del establecimiento del Banco Nacional Suizo es el de regular el mercado monetario y de facilitar los pagos. (Artículo 2º).

En el preámbulo de la ley que crea los Bancos de Reserva Federal, se habla de su establecimiento con el fin de ofrecer una moneda elástica, de facilitar el redescuento del papel comercial, y de establecer un contralor bancario más efectivo en Estados Unidos de América.

El último Banco Central que acaba de crearse, al que me he referido ya, es el de Canadá y posee un mayor detalle en cuanto a los fines a que será dedicado. En efecto, la ley del Banco Central de Canadá, aprobada el 3 de Julio de 1934, dispone en su preámbulo la conveniencia de establecer un Banco Central en Canadá con el fin de regular el crédito y el circulante, para satisfacer los mejores intereses de la vida económica de la Nación, así como para controlar y proteger el valor externo de la unidad monetaria nacional, mitigar por su influencia las fluctuaciones en el nivel general de la producción, el comercio, los precios y la ocupación, dentro de lo que fuera posible

y estuviere al alcance de la acción monetaria, así como promover el bienestar económico financiero del Dominio.

El artículo 3° del proyecto argentino, enuncia todo el plan de acción a cargo del futuro Banco Central.

En su inciso 1° dice que el Banco Central tendrá por objeto: «Concentrar reservas suficientes para moderar las consecuencias de la fluctuación en las exportaciones y las inversiones de capitales extranjeros, sobre la moneda, el crédito y las actividades comerciales, a fin de mantener el valor de la moneda.»

Respecto de los incisos b), c) y d) a que antes me he referido, están de acuerdo con los principios sustentados por los tratadistas más eminentes que se han ocupado del asunto. Así el profesor Gregory, que también he citado, establece las dos funciones principales de un Banco Central: «la de asegurar la estabilidad financiera interna, y la paridad de la moneda local con el patrón oro internacional. La conservación de las reservas áureas, el monopolio de la emisión, el derecho de poseer los depósitos del gobierno y los encajes de los bancos comerciales y las facultades de redescuento y emisión, no son fines en sí, sino los medios por los cuales se logran esos objetivos fundamentales que tiene en vista un Banco Central». Y continúa diciendo que «un Banco Central no debe solicitar más poderes que los necesarios para el control del crédito y de los cambios y que todos los elementos que fijan la situación del Banco Central, como ser capital, emisión, descuento, depósitos, etcétera, deben ser juzgados de un solo punto de vista, o sea la forma en que afectan las posibilidades del Banco Central para controlar las condiciones del crédito y de los cambios».

El inciso c) del proyecto argentino, dice que el Banco tendrá por objeto promover la liquidez y el buen funcionamiento del crédito bancario, etcétera.

Para que ello pueda cumplirse es menester que el Banco circunscriba claramente sus operaciones. Dice Gregory: «Que a un Banco Central debe dár-

sele el derecho de descontar y realizar adelantos, pero definiendo imperativamente dentro de qué límite deben confinarse esas operaciones. Es axiomático que hay cierta clase de operaciones de préstamos que no se encuentran dentro de las atribuciones de un Banco Central, como ser los préstamos directos garantizados con bienes raíces. Pero en las naciones nuevas en que no existe un mercado monetario perfectamente organizado, y en que, por consiguiente, no es fácil obtener préstamos e inversiones de carácter tan líquido como en las naciones más adelantadas, surge la tentación de permitir al Banco Central de participar en préstamos algo más líquidos que los préstamos sobre bienes raíces, pero menos líquidos que las inversiones y adelantos sobre letras a corto plazo. Esta tentación que surge fuertemente cuando la opinión pública protesta contra la actuación de los bancos comerciales o cuando se encuentra limitada la oferta de crédito a prestatarios solventes, se exterioriza en las demandas de ampliación de la clientela bancaria, en el deseo que se permita al Banco Central realizar operaciones bancarias comerciales, y que tome a su cargo transacciones ajenas a su objetivo. Estas demandas son peligrosas, al poder llevar al Banco Central a un grado de iliquidez».

El inciso d) del artículo 3° del proyecto de Banco Central argentino, dice que: «el Banco tendrá por objeto actuar como agente financiero y consejero del gobierno en las operaciones de crédito externo o interno y en la emisión y atención de los empréstitos públicos».

Esto está de acuerdo con las disposiciones que rigen los bancos centrales, y es propiciada por todos los tratadistas. Así, sir Ernst Harvey, que ocupa un cargo de gran importancia en el Banco de Inglaterra, dice que «un Banco Central debe tener a su cargo todos los negocios bancarios de su propio gobierno.» La razón de esta concentración de los negocios bancarios gubernamentales en el Banco Central, la da Harvey así:

«Debido a las desigualdades que existen en las diferentes estaciones del año en el monto de las recaudaciones y gastos nacionales, es inevitable que el gobierno posea en ciertos momentos fuertes saldos acreedores, y en otros momentos sea prestatario de sumas importantes de dinero. Es únicamente por la concentración de todas las operaciones gubernamentales en manos del Banco Central, que éste puede efectuar diariamente los ajustes de crédito necesarios para evitar las fluctuaciones constantes en la oferta y valor del dinero.»

El directorio del Banco Central estará compuesto por un presidente y un vicepresidente «que serán argentinos y personas de reconocida experiencia bancaria y financiera, y serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y dentro de ternas elegidas por la asamblea de bancos accionistas. Durarán siete años en sus funciones y podrán ser reelectos. El presidente y el vicepresidente deberán dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco, etcétera.»

Como se ve, se ha querido en toda forma evitar la influencia política en la dirección del Banco Central. El presidente y el vice son elegidos por ternas propuestas por asambleas de bancos y deberán tener acuerdo del Senado. El proyecto primitivo del Poder Ejecutivo establecía que, a su vez, el presidente y vice deberían ser propuestos por el directorio a la asamblea y que la asamblea elegiría las ternas para que el Poder Ejecutivo designara al presidente y al vice de entre los miembros de ella. El Honorable Senado agregó la condición del acuerdo correspondiente de ese cuerpo. En la comisión nos pareció que era excesivo este sistema que establece una serie de frenos en la elección de los miembros, presidente y vice del directorio y por eso creímos pertinente la supresión, en el artículo 10 de «... a propuesta del directorio.»

En proyectos anteriores se preveía que el presidente y el vice, que tienen

en este proyecto una duración determinada de siete años, pudieran ser removidos, y así había una disposición de que lo fueran por ley del Congreso tomada por dos tercios de votos de cada Cámara. Pero eso podía determinar que, por motivos puramente políticos, sin ninguna razón fueran removidos el presidente y el vice del Banco; y la comisión, entonces, completando el pensamiento del Poder Ejecutivo ha establecido que no pueden removerse el presidente y el vice sino por el procedimiento del juicio político para que estén fundadas las razones de esa remoción, vale decir por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes.

El presidente y el vice deberán dedicar todas sus actividades al servicio exclusivo del Banco y mientras estén en ejercicio no podrán ocupar otro cargo remunerado o no. Esta es una disposición tomada de muchas leyes de origen anglosajón. Se ha querido la dedicación exclusiva para sustraerlos por completo a toda otra actividad. Alguna vez se planteó en la comisión la cuestión de si esta incompatibilidad era tan absoluta que debieran abandonar sus propios intereses y entonces se dijo con claridad que el presidente y el vice del Banco Central no podrían ocupar ningún cargo en la dirección o gerencia de cualquier negocio, aunque fuere privado o propio, pero que esa incompatibilidad no les privaba de la atención de sus intereses personales, de visitar una estancia, por ejemplo, o vigilar un establecimiento industrial del que fueran accionistas, solicitar rendición de cuentas a sus administradores, inspeccionar, etcétera.

El señor diputado Pueyrredón me pregunta si pueden ser directores de cualquiera otra sociedad y le contesto categóricamente que no. Toda su actividad debe estar exclusivamente al servicio del Banco, pero no se puede humanamente prohibir que si tienen intereses privados, como deben tenerlos, no los vigilen.

Sr. Ministro de Hacienda. — La fórmula inglesa, dice: ocupar todo el tiempo; pero pensamos que el tiempo a veces se ocupa en otras actividades que no son meramente comerciales.

Sr. Martínez. — El artículo 12 establece la forma en que se compone el directorio. De los doce miembros, uno será elegido por el Poder Ejecutivo; uno por el Banco de la Nación Argentina; seis por los sectores en que se dividirá al efecto la asamblea de los bancos accionistas, en la siguiente forma: uno por los representantes del Banco de la Provincia de Buenos Aires y demás bancos provinciales o mixtos del país que fueran accionistas, tres por los representantes de los bancos nacionales; y dos por los representantes de los bancos extranjeros; y cuatro, elegidos por toda la asamblea de bancos accionistas, a propuesta del directorio y previa consulta de éste con entidades representativas entre personas de reconocida experiencia, capacidad y prestigio, que deberán ser: un agricultor, un ganadero, un comerciante y un industrial. Ninguna de estas cuatro personas podrá ser director o empleado de Banco. Tampoco podrán formar parte del directorio simultáneamente más de tres extranjeros.

Todos los economistas y banqueros eminentes que han analizado el funcionamiento y la estructura de los bancos centrales están de acuerdo en que hay que evitar en toda forma la infiltración gubernamental en las actividades del organismo regulador del crédito.

Mr. Harvey, del Banco de Inglaterra, dice a este respecto que las actividades del Banco Central deben estar libres del control gubernamental, así como de la influencia de la política. Las consideraciones que se hacen sobre este punto, son las siguientes: Para que un Banco Central funcione con el máximo de eficiencia es menester que se asegure el apoyo y la confianza de todas las clases sociales. Sólo con la satisfacción de los intereses generales del país y por la adopción de una política de finanzas y economía sanas, puede esa institución tener la esperanza de una tradición de

servicios nacionales en que reposan confiadamente todos los grupos que forman la población de un país. Un Banco Central debe estar libre de todo manejo gubernamental y político. Ello no quita que el pueblo, representado por el gobierno, participe de las ganancias y de los privilegios otorgados por el Parlamento al Banco Central. Pero cuando los intereses del gobierno se consideren sumamente grandes como para exigir la representación estatal en el directorio del Banco, esa representación deberá estar siempre limitada a una minoría del directorio. El resto del directorio deberá consistir en personas que no tengan una actividad prominente en la política, y que puedan traer a las reuniones, no sólo un vasto conocimiento de las finanzas locales e internacionales, sino también de los problemas más importantes que surgen de la industria y del comercio nacionales. Estas personas deberán ser de tal independencia de criterio que aseguren que los negocios del Banco serán manejados con un amplio concepto de estadistas, sin tener en cuenta los intereses personales o de grupo.

El profesor Kemmerer coincide también con estas opiniones. En la exposición de motivos con que acompaña su proyecto de Banco Central del Perú, dice que la forma de la elección de los miembros del directorio y los requisitos necesarios para que puedan desempeñar el cargo, constituye uno de los elementos más primordiales del mismo, ya que el directorio controlará la política del Banco y que el éxito o el fracaso de éste dependerá en gran parte de las clases de personas que integren el directorio.

Más adelante sostiene Kemmerer, que los directores deberán ser personas cuya habilidad e integridad inspiren amplia confianza en el público, hombres destacados e independientes, de fuerza moral, que se nieguen a aceptar cualquiera petición peligrosa o influencias de parte de los políticos o del gobierno, o motivada por intereses económicos, vinieren de donde vinieren. Los miembros del directorio, agrega, deberán

conocer las principales industrias del país, siendo conveniente que algunos de ellos representaran e interpretaran, además, cada una de las fases más importantes de la actividad económica nacional.

Para no alargar esta cita de Kemmerer, terminaré diciendo que este profesor sintetiza así su punto de vista al respecto. Dice que la experiencia ha enseñado al mundo que los dos más grandes peligros que amenazan a un Banco Central son, primero, el peligro de su explotación por el gobierno o elementos políticos con fines políticos; y segundo, el peligro de su explotación por los banqueros para sacar utilidades bancarias. Sostiene el economista americano, en cuanto al primer punto, que en tiempos difíciles al gobierno, urgentemente necesitado a menudo, le sería más sencillo conseguir fondos de una manera o de otra del Banco Central, en lugar de imponer fuertes alzas en los impuestos o introducir economías drásticas en los gastos públicos, siendo asimismo probable que el último procedimiento sería más impopular. Pero en el caso de extralimitarse dichas demandas de dinero, como frecuentemente suele suceder, no tarda en producirse la inflación monetaria, el agotamiento de las reservas de oro y el derrumbe del patrón oro.

Puesto que existe interés que en las funciones de un Banco Central el gobierno tenga sus representantes en el directorio y como, por otra parte, el Banco Central correrá serios peligros de ser explotado por el gobierno, su representación en este directorio deberá ser limitada para impedir que los directores del gobierno dominen en el directorio.

Como se ve, el proyecto del Poder Ejecutivo ha seguido en estas partes como en el resto del mismo, las indicaciones que la experiencia en esta materia ha aconsejado.

Voy, ahora, a reseñar sintéticamente — porque me doy cuenta que el tema es árido y si insisto en algunos puntos de vista es porque tengo la obligación, como miembro informante

de la comisión, de dejar perfectamente aclarado el concepto y el alcance de las disposiciones de esta ley — cuáles son las disposiciones más semejantes de la legislación extranjera sobre la intervención gubernamental en los directorios de los bancos centrales, porque éste es uno de los puntos que más se han controvertido sobre la materia.

Dicen Kisch y Elkin en su obra *Central Banks*, sintetizando sus opiniones, que en Estados Unidos de América el gobernador del Consejo de Reserva Federal es designado por el presidente de la República. En casi todos los países, con excepción de Inglaterra y Alemania, el jefe responsable de la administración del Banco Central es designado por el jefe del Estado o por el gobierno, y en algunos casos uno o más miembros del Consejo Ejecutivo se designan asimismo por el Estado. En el caso de Chile, el gobierno tiene el derecho de designar dentro del directorio, que está compuesto de diez directores, a tres directores, pero el directorio elige su propio presidente. En el Perú, si bien el directorio tiene el derecho de elegir su propio presidente, éste debe elegirse de los directores designados por el gobierno, que ascienden a tres, en un total de diez directores. La carta orgánica del Banco de Grecia, que fué elaborada por la Liga de las Naciones en el mes de Septiembre de 1927, otorgó al Banco Central una gran independencia del Estado. Si bien el gobierno, de acuerdo con el Banco Nacional de Grecia debía designar al primer gobernador y vicesgobernador, las designaciones futuras para estos puestos debían ser hechas por los accionistas. La elección del gobernador requerirá la aprobación del gobierno, que no tendrá más voz en la formación del directorio.

Como el derecho de designar ciertos miembros del directorio no da al Estado un poder continuo de contralor, éste se establece por otros métodos. En Italia, el contralor general de la emisión, a cargo del Banco de Italia, se realiza por el ministro de Fi-

nanzas y el control es ejercido por una comisión oficial. Además, el ministro de Finanzas puede anular cualquiera decisión de la asamblea general o del consejo administrativo cuando la considere contraria a la ley y a los estatutos, actuando bajo su propia iniciativa o por el informe de un funcionario gubernamental que él haya designado para atender las reuniones de estos cuerpos. Ciertas cartas orgánicas de bancos continentales, de las que pueden ser un ejemplo las de Austria, Grecia, Hungría, Holanda y Dinamarca, disponen la designación de un comisionado gubernamental o real con facultades de contralor. En algunos casos la designación del comisionado estatal es realizada por la Corona o el presidente, y si bien no hay duda que la elección se realiza bajo el consejo de gobierno, este hecho da al cargo un carácter en cierto modo distinto al de una designación política. Los deberes del comisionado gubernamental se encuentran generalmente limitados a observar que los negocios del Banco se desenvuelvan de acuerdo con la ley y los estatutos. En cualquier punto en que se suscite una controversia, el comisionado tiene un veto suspensivo hasta el momento en que se dilucide el asunto por acuerdo entre el Banco y el gobierno, o por arbitraje.

En los estatutos del Banco de Copenhague se dispone que cuando los gerentes deseen modificar la tasa de descuento, deben notificar de ello al ministro de Finanzas. El ministro está autorizado a participar personalmente o por medio de su asistente en la discusión sin estar autorizado a votar. Además, se establece que ninguna orden del gobierno entorpecerá directa o indirectamente las actividades del Banco. El comisionado bancario real preside las reuniones de los directores, pero no tiene voto, y se dispone expresamente que no tomará parte alguna en la administración diaria del Banco; su derecho de intervención formal se restringe a los casos en que los gerentes violan la carta orgánica o los reglamentos del Banco. En todos estos ca-

sos el papel que desempeña el comisionado estatal es el de un contralor sistemático de las actividades administrativas del Banco, y se armoniza con la exigencia que establece que el Banco será independiente de la intervención o contralor estatal en la ejecución de sus actividades diarias.

En Polonia, las medidas son un poco más perfeccionadas. El presidente del Banco, que es designado por el presidente de la República, tiene el derecho de veto suspensivo respecto a las decisiones del consejo bancario que son en su opinión contrarias a las leyes del país, las disposiciones del Banco o los intereses del Estado. Una vez ejercitado el derecho de veto, el asunto cuestionado se eleva al ministro de Finanzas, y la acción que se contempla en el veto, queda definitivamente suspendida si el veto del presidente recibe la aprobación del ministro de Finanzas en el término de tres días. Se coloca entonces el peso de la responsabilidad en el presidente del Banco, que debido a esas disposiciones tiene un poder especial dentro del directorio. Al mismo tiempo, con objeto de mantener contacto con el Banco, el ministro de Finanzas tiene el derecho de designar un delegado que puede asistir a las reuniones del consejo y del directorio como asesor, pudiendo solicitar toda clase de información. Debe notarse que el delegado oficial no tiene ningún poder legal de intervención.

En Checoeslovaquia los poderes del comisionado gubernamental que se elige de los funcionarios del Ministerio de Finanzas, son de mayor alcance que en los países arriba mencionados, y es su deber el de oponerse a cualquier resolución de los órganos del Banco si ellos están en desacuerdo con la ley, los estatutos, o los intereses del Estado; y tiene en la ley el mismo derecho de veto suspensivo cuando el Banco actúa en contra de los intereses del Estado, así como cuando actúa en contraposición a las normas estatutarias. En ambos casos, cuando no se produce un acuerdo entre el Banco y el gobierno, el punto controvertido se eleva a una comisión de arbitraje formada por

dos representantes del Banco y dos representantes del gobierno. En Rumania, el comisionado gubernamental tiene el derecho de intervención respecto de cualquier decisión tomada por el directorio en contra de los intereses del Estado. El control gubernamental sobre el Banco Central es aún mayor en el Japón, en que los controladores que actúan bajo la dirección del ministro de Finanzas controlan todos los puntos que tienen relación con las operaciones del Banco del Japón. Se reservan amplios poderes de intervención al gobierno, y las decisiones del consejo administrativo están en muchos casos sujetas a la aprobación gubernamental antes de poder hacerse efectivas. Los reglamentos del Banco disponen que el gobierno controlará todas las operaciones del Banco y evitará no sólo cualquiera operación que esté en desacuerdo con la ley y los reglamentos, sino también cualquiera medida que el gobierno pueda considerar desventajosa para el Estado. Los poderes extensos concedidos a los gobiernos de Checoslovaquia, Rumania y especialmente del Japón, están sujetos a la crítica, al existir el peligro que ellos puedan introducir consideraciones políticas en la administración del Banco. Es cierto que el gobierno puede tomar intervención únicamente cuando se considera que el Banco Central actúa en contra de los intereses del Estado, pero un gobierno no puede considerar que los intereses del Estado y los intereses políticos son términos sinónimos, hechos sobre los cuales no puede estar de acuerdo ningún estudiante de historia o de política.

En el artículo 13 se establece que los directores elegidos de acuerdo con el artículo anterior, durarán tres años en el ejercicio de sus funciones y que pueden ser reelectos, con excepción de los nombrados por los bancos extranjeros, los que no podrán ser reelegidos sino con intervalo de un período. Esta disposición es similar a la que estaba en el proyecto del Poder Ejecutivo y que sólo se modificó con el agregado del intervalo de un período, con el objeto de aclarar que no podrían ser reelegidos inmediatamente, pero que por

esto no quedaba excluida su reelección ulterior.

La comisión ha suprimido la prohibición que existía en el artículo 15 para que los miembros del Congreso puedan ser miembros del Banco Central, pues considera que una disposición semejante importaba una *capitis diminutio* para los miembros del Parlamento, que por cualquiera circunstancia pudieran ir a formar parte de ese importante organismo.

Las razones que pueden darse para que los miembros del Parlamento no formen parte del Banco Central, en realidad no son las mismas que las que podrían existir para evitar la ingerencia gubernamental. Para impedir ésta se reduce al mínimo la representación del gobierno en el directorio. Pero si no hay inconvenientes y en cambio puede ser necesario que exista una representación gubernativa mínima, ¿qué inconveniente habría para que algún miembro del Parlamento, pues no es de suponer que fuesen muchos, tuviera asiento en aquél? Habría posiblemente ventajas porque a través de éste habría una fiscalización legislativa por vía indirecta.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º de la Honorable Cámara, doctor Roberto J. Noble.

Además, señor presidente, existen antecedentes de otros bancos centrales, en que son directores del mismo, miembros del Parlamento. En algunas partes, por razón de su función legislativa, como en el Riksbank de Suecia, que es oficial, hay miembros del Parlamento; y en otros los hay por elección, como en el Banco de Inglaterra, de que forman parte actualmente, según el *Witaker's Almanack* de 1935, Eduardo Carlos Grenfell, miembro de la Cámara de los Comunes y lord Hyndley of Meads, miembro de la Cámara de los Lores.

En el artículo 5º se ha agregado entre las personas que no pueden formar parte del directorio, no sólo a los insolventes, sino además a los deudores morosos de cualquiera de los bancos accionistas. Además, se ha completado el

inciso c) estableciendo que las personas que hubieran sido condenadas por delitos, tienen que haberlo sido por delitos comunes, para excluir de la prohibición a los condenados por delitos políticos.

El artículo 20 enumera bien claramente todas las funciones del directorio, que son:

Artículo 20. — El directorio ejercerá la vigilancia de las operaciones del Banco, y sus atribuciones y deberes serán principalmente las siguientes:

- a) Intervenir en la reglamentación y administración del Banco, aprobar el presupuesto anual de sueldos y gastos, y nombrar, promover y separar de sus puestos a los empleados;
- b) Establecer y clausurar sucursales y agencias;
- c) Nombrar corresponsales en el país y en el extranjero, reglamentando sus relaciones con el Banco;
- d) Fijar las condiciones generales y los límites de las distintas operaciones autorizadas por esta ley;
- e) Fijar tasas de redescuento e interés;
- f) Adquirir los inmuebles necesarios para las operaciones del Banco y enajenar los inmuebles adquiridos de acuerdo con el artículo 34, inciso h);
- g) Revisar periódicamente, por lo menos una vez cada seis meses, todos los redescuentos y adelantos;
- h) Aprobar las renovaciones y subsituciones de letras de cambio y pagarés, de acuerdo con el artículo 34, inciso i);
- i) Resolver sobre la transferencia o caución de acciones del Banco, de acuerdo con los artículos 4º y 8º;
- j) Nombrar la comisión consultiva cuando lo solicitase el presidente;
- k) Nombrar la o las comisiones de redescuento;
- l) Redactar la memoria anual y presentar el balance y cuenta de ganancias y pérdidas a la Asamblea de Bancos Accionistas.

El artículo 25 establece la facultad del directorio para nombrar comisiones de redescuento para la casa central y en los casos necesarios para cualquiera

sucursal, encargadas de examinar todos los documentos presentados para su redescuento, admisión o a título de garantía de adelantos.

Las funciones de la Comisión de Redescuento como la Cámara apreciará, son de gran importancia.

En los artículos 25 a 31 que se refieren a éstas, se han introducido modificaciones que no han hecho más que aclarar el contenido de los mismos, que no constituyen una novedad, pues han sido esbozados por el Consejo de la Liga de las Naciones en su informe sobre la creación del Banco Central de Grecia en 1927, informe que fué aprobado por el gobierno griego el 10 de Noviembre del citado año. En él se establecen disposiciones semejantes. Lo mismo ocurre con el Banco Central de Letonia, Lituania, Polonia, Rumania.

En el texto de mi exposición intercalaré estos antecedentes que ilustran sobre la materia.

He aquí dichas disposiciones que corresponden al título cuarto de los estatutos del Banco Central griego y que incluye los artículos 40 a 43.

«Artículo 40. — Se crearán comisiones de descuentos para examinar todos los papeles presentados al descuento, o en garantía de adelantos.

«Cada uno de los miembros de la comisión deberá comprometerse por declaración escrita, — después de entrar en funciones — a comportarse en sus funciones con rigurosa imparcialidad. Cada uno de los miembros de dichas comisiones de descuentos, no podrá dar a conocer sus opiniones o votar sobre los papeles en que estuviera interesado en cualquiera forma. Durante el examen de dichos papeles abandonará la comisión.

«Los debates de la comisión son confidenciales. Las decisiones relativas a la aceptación o el rechazo de dichos papeles serán tomadas por simple mayoría de votos, teniendo el presidente el derecho de desempatar la votación.

«Artículo 41. — El Consejo de Administración del Banco nombrará comisiones de descuento para la casa central y sucursales autorizadas a efectuar in-

dependientemente las operaciones de descuento. Esas comisiones tendrán el número de personas fijadas por el Consejo de Administración. Los miembros de esas comisiones deberán estar informados de la situación comercial, industrial y agrícola de las regiones de que tengan que ocuparse por la propia índole de los documentos. El quórum se constituye según las condiciones fijadas por el Consejo de Administración. Los miembros de las comisiones de descuento serán nombrados por dos años y no serán reelegibles de inmediato. Desde el momento en que son designados por primera vez, se fijará por sorteo la terminación del mandato de la mitad de sus miembros al expirar el primer año. Las funciones de los miembros de la Comisión de Descuentos son honorarias; los gastos efectuados por los miembros de la Comisión de Descuentos en el ejercicio de sus funciones, deberán ser aprobados por el Consejo de Administración.

«Los parientes hasta el tercero grado inclusive, así como los asociados y representantes de los miembros del Consejo de Administración, no podrán ser designados miembros de una comisión de descuento; aplicándose la misma interdicción a las personas incapacitadas para ser accionistas del Banco Central.

«Artículo 42. — El presidente de la Comisión de Descuentos de la casa central, es, asimismo, director del Servicio de Descuentos, y en su ausencia desempeñará esas funciones cualquier otro miembro del directorio.

«En las sucursales, el gerente preside las reuniones de las comisiones de descuento.

«Artículo 43. — El Banco no está obligado a descontar los papeles aceptados por la Comisión de Descuentos. Igual decisión podrá tomar el directorio, no obstante ser ella contraria a la de dicha comisión.

«Los papeles rechazados por la Comisión de Descuentos, podrán también ser descontados por el Banco, siempre que en cada caso exista la aprobación de

las tres cuartas partes del Consejo de Administración.»

El Banco Central de Estonia posee asimismo, en su carta orgánica, unos artículos que se refieren a las comisiones de descuentos.

Por el artículo 41 del Banco de Estonia se establece que las comisiones de descuentos serán nombradas por el directorio para la casa central y las sucursales que realizan operaciones independientes de préstamos. Esas personas deberán estar familiarizadas con las condiciones agrícolas, comerciales e industriales de la localidad. Su designación es por dos años, y no pueden ser reelegidos al año siguiente. Las funciones son de carácter honorario. Según el artículo 42, el gerente de la Oficina de Descuentos será el presidente de la Comisión de Descuentos de la casa central, mientras que en las sucursales desempeñará esas funciones el gerente de sucursales.

El directorio no está obligado a descontar las letras aceptadas por la Comisión de Descuentos.

En casos excepcionales puede descontarse los papeles rechazados por la Comisión de Descuentos, si ello se produce por la aprobación unánime del directorio.

El Banco Central de Lituania dispone en sus artículos 35, 36 y 37 la creación de una Comisión de Descuentos, cuyos miembros son elegidos por el Consejo Consultivo General, entre los expertos de asuntos económicos, comerciales e industriales. Estos expertos pueden ser miembros del Consejo Consultivo.

Los miembros se eligen por dos años, y son reelegibles. La Comisión de Descuentos, examina los documentos comerciales que se le ofrecen e informa al Consejo para su aceptación.

El Banco Central de Polonia establece, asimismo, las Comisiones de Descuentos en sus artículos 61 y 62. En ellos se establece que las letras presentadas al descuento son examinadas por la Comisión de Descuentos que preside el gerente de sucursales del Banco. El presidente puede rechazar las letras o títulos aprobados por la comisión, pudiendo

elevarse el asunto al directorio, si la comisión lo deseara.

Los miembros de la Comisión de Descuentos son designados por el Consejo entre las personas conocedoras de la agricultura, industria y comercio del distrito, después de haber sido consultadas las asociaciones de negocios del distrito. Duran tres años en sus funciones y son reelegibles. Ningún miembro está autorizado a expresar su opinión sobre un documento en el que estuviere interesado. Los miembros de la comisión juran el cumplimiento de su cargo ante el presidente del Banco.

En el Banco Nacional de Rumania los artículos referentes a las comisiones de descuento, que son los números 47, 71 y 72 disponen la creación de comisiones de descuento en la Casa Central y agencias y sucursales. La Comisión de Descuento de la Casa Central está formada de seis directores que no están incluidos en la comisión ejecutiva, y de otros seis miembros designados por tres años por el directorio, nombrándose un tercio cada año. Estos últimos seis miembros son elegidos entre los accionistas del Banco que se dedican a una actividad comercial o industrial en Bucarest, y son seleccionados de una lista elevada por la Cámara de Comercio de Bucarest. La Comisión de Descuentos de cada sucursal o agencia está presidida por el gerente e incluye de tres a seis miembros designados por el directorio por tres años, eligiéndose un tercio anualmente. Ellos se eligen de los accionistas dedicados a la actividad industrial, agrícola o comercial, del distrito correspondiente, de una lista elevada por la Cámara de Comercio local. Las comisiones de descuento examinan los documentos y recomiendan al directorio la aceptación de aquellos que reúnen los requisitos exigidos por la ley.

El artículo 32 fija las operaciones del Banco Central.

Las operaciones que un Banco central debe estar autorizado a hacer han sido estudiadas por los tratadistas. En su libro sobre bancos centrales sir Ernest Harvey dice:

«1º Un Banco central deberá poseer el derecho exclusivo de emisión;

Es lo que hemos establecido en el primer inciso.

«2º En la ejecución de sus operaciones un Banco central deberá estar libre del control gubernamental y de la influencia política;

«3º Un Banco central deberá vigilar todos los negocios bancarios;

«4º Un Banco central deberá ser el banquero de todos los bancos comerciales y deberá actuar como Cámara compensadora de todos los bancos;

«5º Un Banco central no deberá competir ordinariamente con los bancos comerciales para la realización de los negocios bancarios;

«6º Un Banco central deberá asegurar al público la obtención de facilidades bancarias adecuadas dentro de términos razonables;

«7º Un Banco central no deberá pagar intereses por sus depósitos;

«8º Un Banco central deberá dar a conocer públicamente la tasa en que se encuentra dispuesto a descontar los documentos y deberá publicar a intervalos regulares un estado claro de su situación;

«9º El activo de un Banco central deberá ser de la mayor liquidez posible;

«10. Un Banco central no deberá dedicarse a negocios de cambio exterior con el fin de obtener ganancias;

«11. El Banco Central no deberá dedicarse ni tener ningún interés en cualquier actividad industrial o comercial.»

Todas estas recomendaciones se siguen escrupulosamente en el proyecto de Banco Central para la República Argentina.

En efecto: en el proyecto del Banco Central argentino, los artículos pertinentes que se refieren a las operaciones del Banco, tienen los números 32, 33 y 34, como acabo de decir.

El artículo 32, inciso a), establece que el Banco podrá emitir billetes de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Y el artículo 35 dispone que «durante todo el período para el cual ha sido constituido, el Banco tendrá el privilegio exclusivo de la emisión de billetes en la República Argentina, excepto la moneda subsidiaria a que se refiere el artículo 4º de la ley de organización; y ni el gobierno nacional ni los gobiernos de las provincias, ni las municipalidades, bancos u otras instituciones cualesquiera, podrán emitir billetes u otros documentos que en la opinión del Banco fuesen susceptibles de circular como papel moneda.»

Como se observa, la emisión de billetes de Banco está a cargo del Banco Central, de acuerdo con los principios consagrados en la materia.

La controversia que al respecto pueda haberse suscitado en otros países, acerca de la unidad o pluralidad de la emisión, no se ha producido en la Argentina porque desde hace varias décadas, como dije, el monopolio de emisión estaba concentrado en la Caja de Conversión.

Los últimos bancos centrales establecidos en el mundo responden justamente a este principio de unidad circulatoria, según se verifica en las cartas orgánicas de los bancos centrales de Nueva Zelandia y Canadá, que otorgan a dichos organismos el monopolio de la emisión, que antiguamente estaba a cargo de los bancos comerciales.

La segunda operación es la de comprar y vender oro, que figura en el inciso b) del artículo 32, el cual se complementa con el inciso h), que establece que el Banco podrá comprar y vender divisas o cambio extranjero, y con el artículo 41 según el cual el Banco estará obligado a cambiar a la vista sus billetes en cantidades no menores al valor en moneda nacional de una barra típica de oro de kilogramos 12,441 (400 on-

zas «troy»), por oro o, a opción del Banco, por divisas o cambio extranjero.

La tasa que regirá para el canje de billetes por cambio extranjero, o viceversa, no podrá variar en más del 2 % arriba o abajo de la par. Las operaciones que se acaban de mencionar son necesarias para que el Banco Central pueda mantener la estabilidad de la moneda que, como se recordará, es uno de los objetivos fundamentales.

En punto a la convertibilidad, el proyecto argentino adopta el sistema del patrón de cambio de oro en lingotes (gold exchange bullion standard), que consiste en el canje de billetes por oro en cantidad no menor al valor en moneda nacional de una barra típica de oro de 12.441 gramos o el canje de billetes por cambio o divisas extranjeras. Las posibilidades de negociar en oro y cambio extranjero han sido reconocidas en las cartas orgánicas de los principales bancos centrales del mundo. Mientras el oro sea la medida de valores, es necesario que se exija a alguna autoridad comprar oro en cambio extranjero a un precio fijo de acuerdo a la paridad ya establecida y de vender a un precio también determinado. Únicamente si existen estas disposiciones se tiene la seguridad de que la moneda nacional no oscilará sino en un por ciento pequeño de la paridad, que representará el costo de mover el oro del o al país. De allí que las leyes que rigen los bancos centrales dispongan que el Banco pueda negociar el oro.

Antes de decretarse la inconvertibilidad en Gran Bretaña en Septiembre de 1931, el Banco de Inglaterra estaba en la obligación de comprar oro al precio de £ 3.17/9 por onza standard y de vender a £ 3.17/10 ½ por onza standard en cantidades no inferiores a 400 onzas «troy». El objeto de poner un límite cuantitativo a la conversión es asegurar que las demandas de oro hechas al Banco de Inglaterra surjan de necesidades bancarias provenientes de remesas hechas al exterior, y que las demandas de oro de un carácter detallista para el consumo local sean suministradas por vía de otros canales. Según la ley de patrón oro de 1925, hoy

suspendida, el Banco no tenía obligación de acuñar monedas de oro, reconociéndose con eso la gran importancia de economizar la circulación del metal amarillo.

Según Kisch y Elkin, el método común para expresar la obligación del Banco Central respecto a la venta de oro, es el requerir al Banco a convertir sus billetes en una cantidad específica de oro fino, como se observa en la carta orgánica de varios bancos centrales, como Austria, Hungría y Polonia, que en 1930 funcionaban sobre la base del patrón cambio oro (gold exchange standard).

Respecto a la compra compulsiva de oro a un precio fijo en moneda local, que está libre de los peligros y responsabilidades que se encuentran en la venta obligatoria, tenemos que ha sido adoptada por ciertos países que en el año 1930 funcionaban sobre la base del patrón cambio oro (gold exchange basis) y que deseaban adoptar más tarde los pagos en metálico.

En los casos en que el Estado se prepara a emitir certificados de oro, o moneda de oro en cambio del oro en lingotes, la obligación de comprar oro a un precio fijo se transmite naturalmente al Estado. Este ha sido el caso de Estados Unidos antes de la adopción de las medidas recientes del presidente Roosevelt.

Análogamente, en la Gran Bretaña, la Casa de Acuñación Real estaba anteriormente bajo la obligación de comprar del público al precio de 3.17/10 1/2 libras esterlinas por onza standard, y la pequeña diferencia entre esta cifra y el precio del Banco de Inglaterra representaba un cargo de interés, desde que el vendedor de oro al Banco obtenía pago inmediato, mientras que el vendedor que lo hacía a la Casa de Moneda, no lo obtenía inmediatamente al producirse cierto retardo entre la entrega del oro y la recepción de los soberanos acuñados. Dicen Kisch y Elkin, de los que tomamos estas informaciones, que según la ley de patrón oro inglés, de 1925, dióse fin al derecho del público de llevar oro a la Casa de Moneda para ser analizada y entregada

más tarde en la forma de monedas de oro. Esta ley únicamente se aplicó desde ese momento hasta la suspensión de la convertibilidad, para el oro llevado a la Casa de Moneda por el Banco de Inglaterra.

En el caso de Francia, la obligación del Banco de Francia de comprar oro a un precio fijo se encuentra establecida por la ley monetaria de 1928.

Intimamente ligada con la función de negociar en oro, está la de operar en cambios extranjeros por parte de los bancos centrales. Dicen Kisch y Elkin, que esta última facultad tiene un significado especial en el caso de aquellos países que han tratado de unir sus monedas al oro mediante una o más monedas extranjeras libremente convertibles en oro y exportables en esa forma. Este sistema fué utilizado en la postguerra, debido al costo de mantener grandes cantidades de oro sin utilizar, y al deseo de restringir la demanda mundial de oro. Esta es la situación de aquellos países, como Bélgica o Chile, en que la conversión de los billetes puede efectuarse a la opción del Banco en oro o cambio exterior que represente el precio de una suma equivalente de oro en la nación extranjera respectiva, sujeta a una deducción correspondiente al costo de embarcar al oro del país. En Alemania el Reichsbank está obligado a comprar oro en barras a la tasa fija de 1.392 reichsmarks por una libra fina, pero no se encuentra en una obligación similar respecto a la venta de oro, si bien se ha manifestado por parte del Banco que se encuentra preparado a entregar oro cuando fuera requerido, y así lo ha hecho. Siguen manifestando Kisch y Elkin, que la ley que rige al Reichsbank dispone que el Banco estará obligado a pagar sus billetes, a su opción, en:

1º Monedas de oro alemanas del peso y fino autorizado a su valor par;

2º Oro en barras de no menos de 1.000 reichsmarks y no más de 35.000 reichsmarks, a su valor en oro puro respecto a las monedas de oro alemanas del peso y fino autorizado;

3º En cheques u órdenes de pago en moneda extranjera equivalente en

valor al valor de mercado de la moneda respectiva expresada en oro... El Reichsbank puede en tales casos cargar una comisión que no exceda el costo proporcional de transmisión de grandes sumas de oro al lugar de actividad del Banco extranjero respectivo, junto con sus intereses.

Dicen más adelante Kisch y Elkin, que si se preguntara que si es necesario o deseable que aquellos bancos centrales que se encuentren bajo la obligación de entregar oro al producirse la demanda, tuvieran el derecho de operar bajo condiciones apropiadas en cambios extranjeros, podría sugerirse a ese respecto una respuesta de aplicación general.

Es deseable circunscribir dentro de lo posible los movimientos de oro, que son costosos, a las necesidades marginales, esto es, al ajuste de los balances de pago, que no pueden realizarse en otra forma. Una cartera de letras pagaderas en Londres o Nueva York, provee de un método tan conveniente y efectivo como una remisión de oro en lingotes para cancelar un débito internacional, y es capaz de emplearse antes que los cambios se muevan a los puntos que envuelvan una exportación de metálico.

En esta forma, el poder de intervenir en el mercado de cambios, permite a un Banco Central reducir las fluctuaciones en las tasas cambiarias y promover la estabilidad de los cambios y de los negocios, que es uno de sus propósitos fundamentales. Además, la economía áurea, producida por la utilización parcial del patrón-cambio oro (gold exchange standard) por parte de los bancos centrales es en sí una ventaja definida. Siguen manifestando Kisch y Elkin, que estas ventajas son especialmente aparentes en el caso de aquellos bancos centrales que consideran ciertos créditos específicos mantenidos en el exterior, como equivalentes del oro a los efectos de servir de garantía a los billetes emitidos. Desde luego, es necesario una cierta discreción al elegir estos activos localizados en el exterior, ya que se concibe un riesgo, si bien no apreciable en tiem-

pos ordinarios, en que aún las naciones más poderosas en que se mantienen dichos activos, pueden abandonar el patrón oro debido a causas de fuerza mayor.

Como el mantenimiento por parte del Banco Central, de disponibilidades externas, envuelve un cierto grado de dependencia en la estabilidad y permanencia de la política financiera de ese país, cuyo gobierno está fuera de la esfera de influencia del Banco Central, es una cuestión para el Banco la de determinar a la luz de los hechos, como deberá dividir su activo entre las disponibilidades mantenidas en el mercado nacional y las mantenidas en el exterior. Al dilucidar esta cuestión, el Banco no deberá recalcar demasiado las ganancias de intereses obtenidas de los activos mantenidos en el exterior, comparados con el oro improductivo mantenido en el mercado nacional. Si bien no puede establecerse ninguna regla — dicen Kisch y Elkin, — ya que cada Banco Central debe decidir su política con referencia a su propia situación, no está demás decir que es justificable una mayor independencia, a costa de un cierto sacrificio de ganancias.

Por el inciso d) se establece la facultad del Banco Central de redescantar a los bancos accionistas y a los bancos que no lo fueran, documentos provenientes de operaciones comerciales relacionadas con la negociación de mercaderías, que lleven por lo menos dos firmas solventes, de las cuales una sea bancaria, vengzan a más tardar dentro de los 90 días a contar desde la fecha de su redescuento y reúnan los requisitos exigidos por el Código de Comercio; o adquirir dichos documentos. Cuando se trate de documentos que reúnan las condiciones anteriores pero tengan tres o más firmas solventes, de las cuales por lo menos una sea bancaria, el tipo de redescuento será inferior al aplicado en el caso precedente de este inciso. Como se ve, la comisión ha modificado el despacho del Senado, que a su vez modifi-

caba el proyecto del Poder Ejecutivo. El Senado estableció el redescuento de documentos de los cuales una sola firma era comercial y la otra era bancaria, dado que en nuestro clima comercial no existe, como en el europeo, el papel de dos firmas, de tal modo que, si se establecía en la ley, prácticamente se reducía a cantidades insignificantes el papel que podía ser llevado al redescuento, lo que equivaldría tanto como la supresión de este importante instrumento de expansión circulatorio, lo que sería un error, pues se haría perder elasticidad al sistema que es justamente una de las consecuencias del Banco Central. En la comisión se estudió este punto con mucho detenimiento, porque el Senado, si bien había establecido que bastaba una firma comercial siempre que hubiera otra bancaria, dejó la disposición de que los documentos debían provenir de operaciones «que representen un movimiento real de mercaderías». Esta modalidad no es la que abunda más en nuestros hábitos comerciales y un Banco de la autoridad del Banco de Londres hizo llegar su observación al respecto, haciendo presente la escasez que habría de este papel. Igual observación hizo el señor diputado Escobar en una nota que debe circular en las bancas de los señores diputados, dirigida a los miembros de la subcomisión.

Entonces la comisión suprimió lo de «movimiento real de mercaderías»; pero para evitar que se interpretase equivocadamente esa supresión y se pensara que la eliminación de esas palabras significaba que podía existir el papel redescorable de personas no comerciantes, es decir, los documentos de favor y el papel financiero, la comisión adoptó una redacción que al par que salva las observaciones apuntadas especifica claramente la figura de estos papeles elegibles, estableciendo que los documentos deben prevenir de «operaciones relacionadas con la negociación de mercaderías». Vale decir, que estaría comprendido en esta clase de papel elegible un documento de un comerciante que responda a un ade-

lanto para una operación de compra, porque se trata de una operación comercial vinculada directamente con la negociación de mercaderías. De este modo queda especialmente proscripto el documento de favor o el papel financiero; y en cambio no se alteran las costumbres comerciales actuales, que sin embargo sería conveniente encauzar para el futuro en las sendas clásicas del papel comercial de dos firmas.

En el inciso e) se establece la misma disposición, agregándole los papeles industriales mediante la substitución de «documentos emergentes de transacciones en productos agrícolas o ganaderos» por «documentos provenientes de operaciones relacionadas con la producción, elaboración o negociación de productos agropecuarios o industriales.» Vale decir, que estarían comprendidos entre los papeles redescontables los que responden a adelantos para cultivos, zafra o elaboración de productos, porque se trate de operaciones directamente vinculadas en la producción de mercaderías o productos.

Sabido es, señor presidente, que uno de los requisitos fundamentales que debe reunir un Banco Central, es el de mantener la liquidez de su cartera, y justamente a ese propósito responden los incisos d) y e) a que me he referido. Para que el Banco Central pueda realizar sin dificultades las operaciones de redescuento, dentro de las principios enunciados por este inciso es menester que los bancos asociados posean el papel exigido por la ley. Es justamente lo que dice Harvey cuando establece que «para el funcionamiento eficiente del sistema, es necesario que los bancos comerciales mantengan una cartera líquida que pueda ser utilizada en caso de necesidad para obtener fondos mediante su redescuento en el Banco Central. Se considera como los mejores documentos las letras de cambio que lleven por lo menos dos buenas firmas y que representen transacciones comerciales realizadas de buena fe y susceptibles de ser descontadas en el Banco Central». Ya he dado las razones de nuestra modalidad de ambiente que im-

piden la aclimatación del papel de dos firmas. Continúo con la cita de Harvey.

«Las letras deberán ser líquidas y no renovables y no deben tener una duración mayor de tres meses, si bien un período mayor puede justificarse en el caso de letras que representen operaciones agrícolas que no pueden completarse ordinariamente en ese plazo corto». Es el procedimiento que ha propuesto el Poder Ejecutivo, que sancionó el Senado y que acepta la comisión.

Las letras de este carácter cuando son descontadas deben obtener un tipo de interés más favorable que el establecido para los adelantos o créditos en descubierto. Cuando no se esté acostumbrado a financiar con estas letras las operaciones comerciales, deberá realizarse un esfuerzo para introducirlas gradualmente en las prácticas de los negocios al suministrar la forma más legítima de papel negociable y proveer la base más sana para la conducción de las operaciones comerciales del país.

Respecto a las condiciones de *elegibilidad* del papel ofrecido al redescuento, es menester que reuna ciertos requisitos como ser el propósito u objeto del papel, el período del vencimiento y la calidad de dicho papel. Es esto lo que dicen justamente los economistas Kisch y Elkin, quienes manifiestan, que los papeles que emitan deben serlo con el propósito de proveer las necesidades comerciales de buena fe, tales como cubrir los gastos incidentales de la producción, transporte y negociación de los productos agrícolas e industriales. Estos papeles son líquidos por su propia naturaleza; desde que la venta de mercaderías suministra los fondos necesarios para el pago del documento correspondiente. Estas exigencias no se satisfacen, según los autores citados, con el papel emitido para financiar la conservación de títulos y acciones, y si el Banco Central admite cualquiera de estos papeles como parte de su activo, es necesario que se defina perfectamente esa admisión en los estatutos.

Al referirse más adelante Kisch y Elkin, al vencimiento de los documentos elegibles para el redescuento por

parte del Banco Central, dicen que el desiderátum de la liquidez exige la inadmisibilidad al redescuento de los papeles que carecen de un vencimiento corto en el momento de realizarse esa operación. En términos generales, las leyes bancarias establecen un período de tres meses, como ser las de Austria, Alemania, Francia, etcétera, o de 90 días, como en Estados Unidos de América o de 92 días, como en Checoslovaquia, o de 100 días como en el caso del Banco Nacional de Bélgica y del Banco del Japón. Todos estos plazos se computan desde el momento de adquirirse esos papeles por el Banco Central. En Latvia y Lituania existe la facultad de extender el período en casos especiales. En Italia, el vencimiento máximo de las letras elegibles al redescuento por el Banco de Italia, es de cuatro meses. En Holanda el período de duración de la letra se describe como «un plazo no mayor que el requerido por las costumbres comerciales», mientras que en Suecia, el período máximo es de seis meses. Este plazo mayor se concede en el caso de letras agropecuarias como ocurre en ciertos países como Hungría, Sud Africa y Chile, así como en Estados Unidos en donde el límite usual es de nueve meses.

Al referirse más adelante a las *garantías del papel elegible* para el redescuento, dicen Kisch y Elkin, que el Banco Central debe vigorizar el papel que admite en su cartera, exigiendo algo más que la promesa de pagar a sola firma, no obstante el crédito excelente que pueda gozar esta última. De ahí que habitualmente los bancos centrales, requieran un mínimo de dos firmas, y en algunos casos como en Austria, Alemania, Hungría, Bélgica y Francia, de 3 firmas que se establecen en los estatutos como el mínimo normalmente exigido, esto es, dos nombres como endosantes además del aceptante original. En Alemania se dispone que la tercera firma puede eludirse si se otorga una garantía especial, pero en cualquier forma, el número total de documentos de esta clase no puede exceder del 33 % de la cartera de letras descontadas por el Banco. En la mayoría

de los casos queda a cargo de la gerencia la exigencia o no de tercera firma, que depende de la calidad de las dos primeras firmas. En el Japón, se acepta mercadería o warrants de un valor equivalente a la letra, como reemplazante de una firma exigida en el documento. En cualquier forma, según Kisch y Elkin, la exigencia de nombres adicionales de reconocida solvencia otorga al Banco Central la seguridad práctica de obtener su dinero al vencimiento de los documentos, librándole de los peligros e inconvenientes de tener que disponer de las mercaderías ante la falta de pago de la letra.

Al seguir el análisis de los requisitos establecidos para el redescuento de los documentos elevados por los bancos comerciales, sostienen Kisch y Elkin, que algunas cartas orgánicas entre las que se encuentran las de los bancos nacionales de Bélgica y Bulgaria, las del Banco de Lituania y del Banco del Japón, disponen un mecanismo especial para el examen de las letras ofrecidas al Banco Central. En general, el objeto es el de asegurar la utilización del conocimiento local en la aplicación del crédito. En el caso de Bélgica y Japón, las comisiones de descuento son designadas por el consejo general del Banco. Esta clase de trabajo exige el conocimiento de expertos, y los estatutos del Banco Nacional de Checoslovaquia, establecen que el Banco deberá consultar a las cámaras de comercio, consejos agrícolas y otras organizaciones, a los efectos de elegir esas personas cuyos cargos son honorarios.

Sostienen Kisch y Elkin que los bancos centrales no deberán dar las razones del rechazo de los documentos cuando ello ocurra, lo que se encuentra a veces establecido en ciertas cartas orgánicas como la del Banco Nacional de Austria.

En punto a los *adelantos*, manifiestan Kisch y Elkin, que ellos deberán ser únicamente por períodos cortos, y que la mayoría de los bancos centrales, establecen el límite de tres meses. Al decidir el Banco Central la clase de garantía admisible en los adelantos, deberá

circunscribirse a aquellos de fácil realización en el mercado.

Kisch y Elkin, sugieren cuatro clases de garantías para los adelantos otorgados por los bancos centrales; a saber: a) la de metales preciosos; b) la de títulos bursátiles; c) la de letras comerciales pagaderas en el mercado nacional y d) la de letras y monedas extranjeras pagaderas en el exterior.

En punto a la primer garantía, que es la de los *metales preciosos*, la mayoría de las cartas orgánicas de los bancos centrales modernos admiten los adelantos contra la entrega del oro.

Kisch y Elkin sostienen que la segunda garantía, que es la de los títulos, debería ser aceptada por el Banco Central, únicamente cuando se tratara de los mejores papeles que llevarán una tasa fija de interés, debiendo ser excluidas las acciones cuyo valor está sujeto a fluctuaciones debido a los cambios de dividendos, así como el estado de ánimo del mercado en que se operan esos papeles. Debido a la diferencia de condiciones de los distintos mercados, es tal vez imposible delinear una regla única que rijan para todos los países, debiendo dejarse la elección al juicio del propio Banco que realice la operación. Debe decirse aquí que las cartas orgánicas de los bancos de Austria, Hungría y Polonia, aceptan los títulos cotizados en la Bolsa de Comercio. Es deseable que los títulos sean de fácil negociación, y de vencimiento corto, de suerte tal que si el vencimiento se extiende por varios meses, se limite el adelanto a una suma que deje un margen adecuado respecto al valor del mercado del título, como sucede en Bélgica, en donde aún los títulos públicos se toman a las 4/5 partes de su valor.

Asimismo se establece un límite en el monto de los títulos públicos, otorgados como garantía de los adelantos, que en la práctica son los papeles que predominan en esa clase de préstamos, siendo importante que ello se establezca para evitar la subordinación de la política de crédito del Banco a las exigencias del gobierno. En Chile, el Banco Central, está únicamente autorizado

a efectuar adelantos con garantía de papeles gubernamentales, municipales, ferroviarios, hasta un monto que no exceda del 20 % del capital pagado y reservas del Banco, si bien la proporción puede en circunstancias especiales elevarse por un período que no exceda de seis meses hasta el 30 %. En Alemania, los adelantos contra títulos gubernamentales o municipales, que vengzan dentro del año, pueden hacerse únicamente a los bancos de solvencia reconocida, y hasta las tres cuartas partes del valor de mercado de los títulos. El Reichsbank no podrá tener una cartera de letras de tesorería de vencimiento a noventa días, que exceda de 400.000.000 de reichsmarks.

La tercera garantía mencionada por Kisch y Elkin, se refiere a las letras comerciales, que deberán ser del mismo tipo que las elegibles para el redescuento. Dicen a este respecto los autores mencionados que la mayoría de los bancos centrales europeos, permiten la concesión de adelantos, sobre letras que tienen un vencimiento hasta de seis meses. En Lituania, en donde los adelantos sobre metales preciosos se realizan únicamente hasta el 90 % del valor de la garantía, el por ciento se reduce al 70 % del valor de los papeles ofrecidos, siempre que el vencimiento de éstos no exceda de tres meses. El objeto es mantener la mayor fluidez en el activo del Banco Central, de tal modo que ese activo pueda convertirse en dinero efectivo en el plazo de tres meses.

Al referirse a los negocios de redescuentos y adelantos emprendidos por el Banco Central, dicen Kisch y Elkin que los bancos deben tratar de estimular la creación de los papeles que son elegibles para el redescuento, cuyas condiciones de seguridad, liquidez y negociabilidad habían sido ya mencionadas en párrafos anteriores. Es significativo a este respecto que varias leyes dispongan la promoción del uso de esos papeles, y el estímulo de recurrir al redescuento en lugar de obtener adelantos mediante la entrega de la correspondiente garantía. Es así como la tasa cobrada en los adelantos será ordinaria-

mente menos favorable que la de descuentos, dándose el caso de los estatutos de los bancos centrales de Austria, Hungría y Checoslovaquia, que prescriben por ejemplo, que si el total de los préstamos bancarios excede el de las letras descontadas, la tasa cobrada en los adelantos, sea elevada una vez y media respecto a la tasa de descuento.

Las otras disposiciones que se refieren a las operaciones permitidas al Banco, no presentan mayor dificultad. Entre ellas figuran el acordar adelantos a los bancos accionistas por un plazo fijo que no podrá exceder de noventa días, cobrándoles una tasa de interés superior en un punto por lo menos a la tasa oficial mínima del Banco Central para el redescuento de documentos a noventa días vista, sobre los siguientes valores:

1º — Letras de cambio y pagarés que reúnan las condiciones establecidas en los incisos d) o e) de este artículo, y hasta la concurrencia del 80 % de su valor nominal;

2º — Valores del gobierno nacional cotizados en el mercado, siempre que el importe del adelanto no exceda del 80 % de la cotización en la bolsa de dichos valores y que el total de tales adelantos conjuntamente con los valores nacionales de propiedad del Banco — excluidos los bonos consolidados del tesoro nacional — no supere el límite a que se refiere el artículo 34, inciso b).

- g) Acordar adelantos sobre oro anonedado o en barras, hasta el 95 % de su valor;
- h) Comprar y vender divisas o cambio extranjero;
- i) Actuar como corresponsal o agente de otros bancos centrales o del Banco Internacional de Ajustes, o de otra entidad que pueda formarse con propósitos análogos de cooperación internacional;
- j) Encargarse de la emisión, compra y venta de valores del gobierno nacional, por cuenta exclusiva de éste; y sin que el

Banco pueda subscribir tales valores ni garantizar su colocación:

- k) Administrar la Cámara Compensadora en Buenos Aires y otras plazas;
- l) Vender a los otros bancos o volver a comprar de los mismos los bonos consolidados del tesoro nacional recibidos o adquiridos por el Banco en virtud del artículo 7° de la ley de organización y los valores nacionales adquiridos, de acuerdo con el artículo 34, inciso b), última parte.

El artículo 44 establece que: «El Banco podrá hacer adelantos por tiempo limitado al gobierno nacional, para cubrir deficiencias estacionales o transitorias en la recaudación, hasta una cantidad que no exceda del 10 % del promedio de los recursos en efectivo que éste haya obtenido en los tres últimos años».

Como se sabe, el término medio de las rentas nacionales es de 700.000.000 de pesos, de manera que el 10 % representa 70.000.000. Este adelanto y el otro a que me he referido, de adelanto a los bancos accionistas sobre caución de títulos del gobierno, siempre que el monto de los títulos que adquiera el Banco Central no superase el monto de su capital, sus reservas y el importe amortizado de los bonos consolidados del tesoro nacional adquiridos por el Banco en virtud del artículo 7° de la ley de organización, son las únicas operaciones que se permiten al Banco Central hacer con el gobierno.

En cuanto a las prohibiciones, el artículo 34 menciona lo siguiente: c) Conceder, en circunstancia alguna, a las provincias, municipalidades o reparticiones autónomas dependientes de las mismas, préstamos directos o indirectos en la forma de redescuentos, descuentos, adelantos, créditos en descubierto, o compra de letras, valores o títulos o en cualquiera otra forma, sin perjuicio del redescuento de documentos de empresas bancarias, comerciales, industriales y de servicios públicos, que pertenezcan total

o parcialmente a las provincias o municipalidades, siempre que los documentos reúnan las condiciones establecidas en el artículo 32, incisos d) o e) y que las empresas referidas tengan un patrimonio independiente del de las provincias o municipalidades.

Esta fué una modificación pedida por el señor diputado por Santa Fe, ingeniero Noble. La prohibición que venía en el proyecto del Poder Ejecutivo y que había sancionado el Senado era en absoluto: el Banco Central no podía conceder préstamos en ninguna forma, no sólo a las provincias, a las municipalidades, sino también a las empresas de servicios públicos o de otra naturaleza pertenecientes a las municipalidades o provincias, o en que ellas fueran accionistas. Mientras ahora subsiste la prohibición respecto a las provincias y municipalidades, pero se permite que si en ellas tienen participación en empresas bancarias, comerciales, industriales o de servicios públicos, siempre que estas empresas posean un patrimonio independiente del de las municipalidades o provincias, pueden ser redescontados sus papeles si éstos, a su vez, reúnen las condiciones exigidas a todo papel de redescuento por la presente ley.

También se prohíbe al Banco Central el garantizar o endosar letras u otras obligaciones del gobierno nacional, provincias, municipalidades, reparticiones autónomas o instituciones similares, participar directa o indirectamente en cualquiera empresa comercial, agrícola, industrial o de otra clase; comprar acciones, salvo las del Banco Internacional de Ajustes; conceder adelantos sin garantía u otorgar créditos en descubierto, salvo el caso de convenios de créditos recíprocos concertados con otros bancos centrales, comprar bienes raíces, salvo los que fueren necesarios para que el Banco pueda desenvolver sus actividades; comprar mercaderías y conceder adelantos que tuviesen por garantía bienes raíces o hipotecas. Si en la opinión del directorio corriera peligro algún crédito concedido por el Banco éste podrá tomar las medidas necesarias para asegurar

sus derechos sobre los bienes raíces o mercaderías del deudor y podrá adquirir tales bienes raíces o mercaderías, pero estará obligado a revenderlos tan pronto como le sea posible; conceder la renovación o substitución de letras de cambio o pagarés vencidos, redescontados o recibidos en garantía por el Banco, salvo en casos excepcionales, en los cuales el directorio podrá autorizar por una sola vez su renovación o substitución y por un período que no exceda de noventa días.

El artículo 39 es de alguna importancia, porque se refiere a que el Banco mantendrá en todo momento una reserva suficiente para asegurar el valor del peso ya sea en oro, divisas o cambio extranjero, equivalente al 25 % como mínimo de sus billetes en circulación y obligaciones a la vista. El oro y las divisas o cambio extranjero deberán hallarse libres de todo gravamen y pertenecer en propiedad al Banco sin restricción alguna; y de las divisas o cambio extranjero sólo se incluirá en la reserva el saldo neto o sea el remanente libre después de deducidas todas las obligaciones en oro y divisas o cambio extranjero.

Si en un ejercicio determinado la reserva en relación a los billetes u obligaciones a la vista hubiera sido inferior al 33 % durante sesenta días seguidos o noventa días en el total del ejercicio, no se abonará dividendos a los bancos accionistas y los beneficios correspondientes serán destinados al fondo de reserva general.

Estas disposiciones sobre la garantía metálica, que han suscitado alguna crítica en el Senado, fueron explicadas por el señor ministro de Hacienda. Existe una controversia sobre si es necesario o no establecer en realidad el monto de esta garantía, pero no se puede negar que, aunque teóricamente no sea necesario establecerla, es imposible luchar con cierto prejuicio al respecto, que obliga a tomar determinadas soluciones.

La Delegación del Oro, de la Liga de las Naciones, consideró especialmente en su informe de Junio de 1932 este problema y sostuvo la conveniencia de

reducir los encajes mantenidos por los bancos centrales. Consideró que los encajes que hasta entonces tenían eran exagerados con relación a las necesidades y significaban en realidad un empleo indebido del oro. Si eso se hiciera, dice la delegación de la Liga, el efecto inmediato será facilitar la acción de los bancos centrales al ampliarles el margen del oro libre de sus garantías áureas, que pueden usar para sus pagos internacionales, sin hacer peligrar la reserva legal mínima.

Al referirse al sistema de los encajes imperantes en los principales bancos centrales, sostiene la Delegación del Oro de la Liga de las Naciones, que la mayoría de estos estaban obligados, ya sea en forma absoluta o sujetos a ciertas penalidades, a mantener una relación mínima entre sus reservas áureas y las obligaciones en el exterior. En la práctica esos bancos deben mantener siempre, aun en épocas anormales, oro por encima del encaje mínimo exigido, porque se encuentran en la obligación de vender oro a cualquier persona que ofrezca el canje en billetes.

Si no mantienen un margen por encima de ese encaje mínimo, sufrirán inconvenientes en la primera ocasión en que se produzca un hecho de esa naturaleza.

Más adelante dice que la introducción de una cláusula elástica en la ley, hace posible que el Banco Central permita la disminución de la reserva por debajo del límite mínimo, a condición de que se pague una tasa al gobierno y en muchos casos que se eleve la tasa oficial del descuento. Sigue diciendo, que en su opinión, el sistema de encajes definitivos se ha demostrado que es demasiado rígido e inadaptable en el período postbélico y en la actualidad, en que únicamente existe moneda de oro en circulación en muy pocos países, y no puede tener lugar el drenaje interno, las reservas de oro se mantienen para satisfacer los posibles déficit en la balanza de pagos.

La principal razón apuntada por la Delegación del Oro al rechazar la propuesta de abolir el sistema de garan-

tías legales mínimas, es la de que tendría un efecto inconveniente sobre la confianza pública en muchos países y quitaría al Banco Central y al público una guía segura en cuanto a la emisión.

—Ocupa la Presidencia de la Honorable Cámara, el señor vicepresidente 1º, don Antenor R. Ferreira.

Paso, señor presidente, a analizar las disposiciones referentes a la garantía metálica de la circulación, que rigen en los principales bancos centrales.

Comencemos por los más recientes: el de Canadá y el de Nueva Zelandia.

El artículo 26 del Banco de Canadá, establece que el Banco mantendrá siempre una reserva en garantía de los billetes en circulación y depósitos en su poder.

Esta reserva consistirá en oro amonedado y en lingotes de propiedad exclusiva del Banco, que no sea inferior al 25 % de los billetes y depósitos ya mencionados; y puede además incluir:

- a) Plata en lingotes;
- b) Cambio exterior, que significará:

- I. Saldos mantenidos con el Banco de Inglaterra, el Banco de Ajustes Internacionales, el Banco de Reserva Federal de Nueva York, y un Banco Central de cualquier país, cuya moneda de hecho y legalmente, sea convertible a la demanda en oro exportable a un precio fijo;
- II. Letras de tesorería u otras obligaciones del Reino Unido o de Estados Unidos de América, que tengan un vencimiento no mayor de tres meses desde la fecha de adquisición por el Banco;
- III. Letras de cambio que tengan un vencimiento no mayor de noventa días, excluyendo los días de

gracia, desde la fecha de adquisición por el Banco, pagaderas en Londres o en Nueva York, o en un país cuya moneda de hecho y legalmente sea convertible a la demanda en oro exportable a un precio fijo, menos cualquier pasivo que el Banco deba pagar en la moneda del Reino Unido, de Estados Unidos de América o de cualquier país cuya moneda de hecho y legalmente, sea convertible a la demanda en oro exportable a un precio fijo.

A pedido del directorio del Banco, el gobernador en consejo puede suspender las disposiciones de esta sección, que exigen al Banco mantener una reserva áurea no menor del 25 % de sus depósitos y billetes en circulación. Esta suspensión será por un período que no exceda de sesenta días según lo establezca el gobernador en consejo, pero si existen nuevos pedidos del directorio, esa suspensión podrá extenderse de tiempo en tiempo por nuevos períodos que no podrán pasar cada uno de sesenta días, siempre que esa suspensión no continúe por un período mayor de un año sin la correspondiente sanción parlamentaria.

El Banco comprará y retendrá durante los años 1935, 1936 y 1937 la plata nueva extraída de las minas canadienses, cuando le fuera requerido por el ministro, no pudiendo nunca el Banco comprar más de 1.671.802 onzas finas por año.

El artículo 25 establece la conversión de los billetes de banco canadienses en oro, en lingotes en cantidades mínimas de aproximadamente 400 onzas de oro fino.

El Banco de Reserva de Nueva Zelandia, cuya ley data del 27 de Noviembre de 1933, contiene varios artículos referentes al circulante y garantía metálica.

He aquí sus disposiciones más importantes según el boletín del Midland

Bank de Londres, el que sostiene que las disposiciones referentes a las reservas, siguen estrechamente las prácticas de la postguerra. La reserva mínima prescrita es del 25 % del conjunto de los billetes en circulación y de las otras exigibilidades a la vista. Sin embargo, se permite cierta elasticidad, ya que a pedido del directorio del Banco el ministro puede suspender las exigencias mínimas por un período que no exceda de 30 días, y por períodos ulteriores que no excedan de 15 días cada uno. Una tasa graduada se establecerá sobre el monto en que la reserva cae por debajo de las exigencias mínimas. Además, si la reserva cae por debajo del mínimo prescripto, el Banco estará obligado a agregar inmediatamente a su tasa de descuento mínima, un por ciento no menor que la tasa graduada, probablemente con el objeto de disminuir la oferta de dinero. Cabe decir, sin embargo, que las exigencias de aumentos de la tasa de descuento pueden suspenderse total o parcialmente en cualquier momento por la propia voluntad del ministro de Finanzas. La reserva prescrita consistirá primero, de oro amonedado y en barras de propiedad exclusiva del Banco; segundo, de cambio en libras esterlinas en la forma de depósitos en el Banco de Inglaterra; así como de letras de tesorería británicas, de un plazo no mayor de tres meses, y letras de cambio pagaderas en Londres, que lleven por lo menos dos firmas buenas, con un plazo no mayor de tres meses; y tercero, disponibilidades de cambio en oro neto (net golden exchange) de la propiedad exclusiva del Banco, que se encuentren en forma de saldos en los bancos centrales, y letras de cambio que venzan dentro de tres meses, y lleven por lo menos dos buenas firmas. El cambio oro (gold exchange) se define como el cambio «sobre un país cuya moneda de hecho y legalmente sea convertible a la vista en oro exportable a un precio fijo». No existe reglamentación alguna respecto a la proporción en que deberán mantenerse éstos distintos elementos para formar la reserva mínima exigida por la ley.

Veamos ahora las disposiciones estatutarias que rigen las reservas de los principales bancos centrales del mundo. Debe reconocerse por de pronto, que ante el abandono casi general del patrón oro, estas disposiciones, en la gran mayoría de los casos, están suspendidas. Pero ello no quita que tengan un gran valor ilustrativo. Es por eso que las damos a conocer tomando la síntesis correspondiente de un estudio de C. H. Kisch, presentado al Instituto Real de Relaciones Internacionales de Inglaterra.

He aquí las principales disposiciones que regían antes de la suspensión del patrón oro por parte de Inglaterra, en los principales bancos centrales del mundo.

1. — Bancos que funcionaban bajo el sistema del patrón oro simple (gold specie) o patrón oro en lingotes (gold bullion) standard).

Banco de Inglaterra

El Banco se encuentra en la obligación de comprar oro en canje de los billetes al tipo de £ 3.17.9 peniques por onza standard, y de vender oro en lingotes al tipo de £ 3.17.10 ½ por onza standard, sujeta esa venta a la cantidad mínima de aproximadamente 400 onzas troy de oro fino. Se establece la emisión fiduciaria en 260.000.000 de libras esterlinas. Se faculta a la Tesorería y al Banco de Inglaterra para que actuando conjuntamente aumenten o disminuyan la emisión fiduciaria, teniendo en cuenta que si el aumento de la emisión fiduciaria dura más de dos años, requerirá la sanción parlamentaria.

Banco de Francia

El Banco tiene la opción de canjear los billetes ya sea en oro amonedado de curso legal, o en oro en lingotes, sujetándose ese canje a la cantidad mínima de 215.000 francos.

Los billetes se emiten contra efectivo, descuentos o préstamos. El Banco está obligado a mantener una reserva mínima en oro amonedado o en lingotes del 35 % del total de sus billetes y depósitos corrientes.

Banco Nacional de Bélgica

Desde el 1° de Agosto de 1930, el Banco ha iniciado la compra y venta de oro en lingotes a un precio basado en la paridad legal del belga.

El Banco debe mantener oro o créditos extranjeros pagaderos en oro en el exterior, en una cantidad igual al 40 % del monto de sus billetes y otras exigibilidades a la vista. Pero las reservas de oro no podrán ser inferiores al 30 % de los billetes y exigibilidades a la vista.

Banco Nacional de Dinamarca

Los billetes son convertibles a la vista en oro en lingotes en una cantidad no inferior de 28.000 coronas. Según la ley actual, la disposición mencionada rige hasta fines de 1930, en que si no es extendida por un nuevo plazo, el Banco estará obligado a canjear sus billetes en la Casa Central por monedas de oro de curso legal.

La reserva metálica será igual al 50 % del valor nominal de los billetes en circulación, estando constituido el remanente de títulos especificados, en que se incluyen las letras de cambio y los saldos acreedores pagaderos a la vista en el exterior.

La reserva metálica consistirá:

- a) Monedas de oro de curso legal;
- b) Oro en barras o monedas de oro extranjeras;
- c) Saldos bancarios a la vista, que no producen ningún interés, situados en el Banco de Noruega, en el Banco Sueco (Swedish Riksbank) y en el Reichsbank.

La existencia de moneda de curso legal, no será inferior a la cuarta parte de la reserva metálica compulsiva. La reserva de monedas de oro de curso legal y de oro en barras o monedas de oro extranjeras, no serán inferiores a las tres quintas partes de la reserva total establecida por la ley.

Banco del Japón

Los billetes del Banco son convertibles en metálico.

El Banco puede emitir billetes bancarios convertibles hasta una suma de 120.000.000 de yens, contra garantía de títulos públicos, o letras comerciales aprobadas. Un aumento de la emisión que exceda la cifra mencionada requiere la aprobación gubernamental.

El saldo de la emisión tendrá garantía de oro o plata. La plata no podrá exceder de la cuarta parte de la reserva metálica. (En la actualidad no existe reserva de plata).

Banco de Holanda

Los billetes son convertibles en oro.

El 40 % de los billetes en circulación, y los saldos en cuentas corrientes, deben ser garantizados por oro amonedado o en barras.

Banco de Noruega (Norges Bank)

Los billetes son convertibles en oro. Puede emitirse hasta 250.000.000 de coronas en billetes que excedan la reserva áurea.

Banco de Reserva de Sud Africa

Los billetes son convertibles en oro.

Los billetes tienen una garantía mínima de 40 % en oro, estando constituido el saldo restante por papel comercial y letras comerciales.

El Banco debe mantener asimismo una reserva de oro o metálico no menor del 40 % de los depósitos, además de la reserva exigida contra los billetes, estableciéndose que la existencia de plata no exceda del 20 % de las reservas exigidas contra los depósitos.

Banco de Suecia (Sveriges Riksbank)

Los billetes son convertibles en metálico.

Pueden emitirse billetes hasta coronas 250.000.000, más una suma igual al doble de la reserva metálica mante-

nida en Suecia, que no debe bajar de 150.000.000 de coronas.

Parte de la emisión de billetes que exceda de la reserva metálica debe ser cubierta por oro depositado en el exterior, títulos estipulados, letras de cambio y adelantos contra títulos públicos.

Bancos de la Reserva Federal

Los billetes de la Reserva Federal son convertibles en metálico en la Tesorería o en metálico o moneda legal en cualquier Banco de Reserva Federal.

Los bancos de Reserva Federal deberán mantener:

- a) Una reserva metálica y de moneda legal no menor de 35 % contra los depósitos;
- b) Una reserva metálica no menor de 40 % contra los billetes en circulación.

El saldo de la emisión deberá ser cubierto con documentos comerciales de carácter especial.

La ley Glass-Steagall del año 1932 autorizó que ese saldo fuera cubierto no sólo con papel comercial, sino también con títulos públicos americanos.

Por su parte la ley de reservas áureas de 1934 (gold Reserve Act of 1934) hizo pasar a Estados Unidos de un país regido por el patrón oro simple a uno de patrón oro en lingotes (gold bullions standard) al ordenar el retiro de las monedas en circulación y su transformación en barras, cuyo peso y fino sería fijado por el secretario del Tesoro americano.

2. — Bancos que funcionaban bajo el sistema del patrón cambio oro

Banco Nacional de Austria

Los billetes son de curso legal forzoso, hasta tanto se adopten los pagos en efectivo. Mientras tanto el Banco no está obligado a convertir sus billetes en metálico.

Banco Central de Chile

Los billetes son pagaderos a la vista al portador, en la Casa Central, a opción del Banco en:

- a) Monedas de oro chilenas;
- b) Oro en barras;
- c) Letras a la vista o a tres días vista sobre Londres o Nueva York.

La reserva de oro será de 50 % de los depósitos y billetes en circulación, y consistirá de:

- a) Oro amonedado y en barras en las arcas del Banco;
- b) Oro amonedado y en barras en custodia en bancos de gran prestigio situados en el extranjero;
- c) Depósitos pagaderos a la vista en oro, en bancos prestigiosos situados en Londres y Nueva York.

Banco Nacional de Checoslovaquia

Se contempla que el Banco pueda estar obligado en una fecha futura a comprar y vender oro a la vista en sumas no menores de 12 kilogramos fino. Mientras tanto se mantiene la estabilidad monetaria de facto en términos del cambio exterior.

La reserva metálica original del 20 % de las obligaciones a la vista excluyendo los billetes estaduales y billetes en circulación, será aumentada al 25 % a fines de 1929, al 30 % a fines de 1930 y al 35 % a fines de 1935.

De dicha reserva, por lo menos la mitad será en oro a computarse sobre el total de las exigibilidades a la vista, incluyendo la deuda de billetes estaduales, que está a cargo del Banco. La reserva incluye los metales preciosos, y excluye la plata, los valores extranjeros, letras sobre los principales centros internacionales de Europa y América, así como las disponibilidades a corto plazo, en bancos de indiscutible prestigio establecidos en Europa y América.

El saldo de la reserva estará formado de valores fácilmente convertibles en efectivo por medio de las operaciones que pueda realizar el Banco de acuerdo a sus estatutos.

El Reichsbank

Al ponerse en vigor el plan Young, los billetes serán convertibles a opción del Banco, en monedas de oro alemanas, oro en barras o cambio oro (gold exchange).

La cobertura de los billetes será del 40 % en oro o disponibilidades extranjeras a corto plazo, no pudiendo ser la reserva áurea menor de tres cuartas partes del total. El saldo de la cobertura consistirá en descuentos y letras autorizadas por la ley. Se establece además que por lo menos el 40 % de los depósitos del Banco estén representados por depósitos a la vista en Alemania o en el extranjero; cheques sobre otros bancos, letras que no excedan de un vencimiento de treinta días, o préstamos diarios.

Banco de Grecia

El Banco debe vender o comprar para entrega inmediata, en canje del circulante local, el circulante de curso legal de aquellas naciones de patrón oro notificadas oficialmente. (En la práctica esta obligación se realiza en términos de libras esterlinas).

El Banco deberá mantener una reserva no menor del 40 % del valor de los billetes en circulación y otras exigibilidades a la vista.

La reserva debe incluir solamente:

- a) Oro amonedado o en barras;
- b) Cambio extranjero en oro neto (net foreign gold exchange), esto es, saldos acreedores del Banco en los bancos extranjeros, letras de cambio a corto plazo pagaderas en moneda extranjera; letras de tesorería u obligaciones gubernamentales de carácter similar, que venzan dentro de tres meses, menos cualquier pasivo en moneda extranjera.

Banco Nacional de Hungría

Actualmente los billetes tienen curso legal y son inconvertibles.

Banco de Italia

Los billetes son convertibles en oro o a opción del Banco en monedas de naciones extranjeras legalmente convertibles en oro.

Deberá mantenerse una reserva no menor del 40 % sobre los billetes y otras exigibilidades a la vista, que consistirá en oro o monedas extranjeras convertibles en oro.

Banco de Polonia

Los billetes son convertibles a opción del Banco en oro amonedado, oro en lingotes, o letras extranjeras.

Los billetes y obligaciones a la vista tendrán que tener una cobertura mínima del 40 % formada por:

- a) Oro;
- b) Plata que no exceda del 5 % de las existencias áureas;
- c) Cambio extranjero.

Las existencias de oro deben representar por lo menos las tres cuartas partes de la cobertura mínima.

Banco Nacional de Rumania

Los billetes son convertibles a opción del Banco, en oro amonedado, o en barras, o en cambio oro (gold exchange).

Deberá mantenerse una reserva mínima en oro o cambio oro (gold exchange) equivalente al 35 % de los billetes y otras obligaciones a la vista. De esta cobertura, deberá mantenerse un 25 % en oro depositado en las arcas del Banco o en el extranjero.

Banco Nacional de Suiza

Los billetes serán convertibles ya sea en monedas de oro suizas, oro en lingotes, o cambio oro.

El 40 % de los billetes serán garantizados con oro en poder de Suiza, y el saldo será cubierto con oro existente en el exterior, disponibilidades externas y ciertas clases de adelantos.

3. — Banco que funciona en un país en el que el patrón oro está en suspenso

España

El billete es inconvertible.

La emisión no podrá exceder de 5.000.000.000 de pesetas, pero el gobierno podrá autorizar su aumento hasta 6.000.000.000 de pesetas.

Sobre la emisión que llega hasta 4.000.000.000 de pesetas deberá mantenerse una reserva metálica de 45 % con un mínimo de metal amarillo de 40 por ciento.

Sobre la emisión que exceda de los 4.000.000.000 de pesetas deberá mantenerse una reserva metálica del 60 % con un mínimo de oro del 50 %. Para completar el análisis de las garantías metálicas, es sumamente interesante conocer el juicio del profesor R. G. Hawtrey, que en su libro sobre el arte de los bancos centrales, hace diversas consideraciones sobre el problema del encaje áureo.

Dice Hawtrey que según la doctrina del siglo XIX, las reservas áureas eran las que gobernaban la política del crédito. El deber del Banco Central era el de preservar el patrón oro manteniendo la convertibilidad del circulante en oro. La quiebra del mismo se exteriorizaba siempre en reservas metálicas exhaustas. La tarea podía describirse entonces, como la de mantener reservas metálicas adecuadas.

La ley de 1844 implantó la moda de prescribir por ley las reservas áureas. Esto no facilitó en sí mismo la tarea, pero tuvo la ventaja de ahorrarse una parte de las reservas de oro, de modo que pudiera usarse únicamente en casos extremos y a expensas de una violación de la ley. La política de crédito estaba basada en el exceso disponible de oro (disposable surplus of gold), y la quiebra significaba no sólo la desaparición de la totalidad de las existencias áureas, sino también del sobrante. El principio era el mismo, ya fuere que la ley limitara la emisión fiduciaria, o prescribiera una proporción mínima de oro respecto a los billetes en circulación,

o al pasivo. La ley de 1844 adoptó el principio de la emisión fiduciaria fija. Pero las controversias respecto al funcionamiento de la ley, estaban realmente circunscriptas a la conveniencia de cualquier sistema en que se exigiera reservas estatutarias. La objeción hecha a la ley, era que obligaba al Banco de Inglaterra a limitar sus préstamos, a los efectos de cumplir la ley en momentos en que todavía poseía mucho oro. Y la defensa era que cuando la escasez del sobrante disponible de oro, representado por los billetes del Departamento Bancario (Banking Department) precipitaba una crisis, podrá hacerse disponible la segunda reserva, mediante una suspensión de la ley con carácter de emergencia, en la misma forma que una campanilla de incendio se hace accesible con la rotura del vidrio que la resguarda. Tanto la objeción como la defensa podría asimismo aplicarse al sistema proporcional mínimo.

Hawtrey manifiesta en seguida que a mediados del siglo XIX, era natural buscar una cierta forma de asegurarse contra la quiebra de un sistema que no había sido aun suficientemente practicado, ni completamente comprendido. Pero en la actualidad un Banco Central que tiene a su cargo la tarea de mantenerse al patrón oro, puede corregir una situación desfavorable del cambio, por medio de la regulación del crédito en un tiempo moderado y a expensas de una pérdida también moderada de oro. Si la situación se complica, ya por un factor extremadamente adverso del balance de pagos, como sería una deuda externa demasiado onerosa, o por una apreciación desproporcionada en el valor del oro, ocurriría entonces que el plazo se prolongaría, y la pérdida del oro aumentaría. Pero esto sería porque estaría involucrado un esfuerzo más severo, y una comprensión mayor del rédito de los consumidores.

Sostiene en seguida Hawtrey, que al fijar el monto de la reserva áurea, deberá dilucidarse sobre la importancia de la compresión del rédito de los consumidores, que pueda sobrellevar el país.

No tiene ningún objeto el de proveer una reserva de oro que apoye una compresión mayor que la que pueda resistir el país. No es fácil estimar con precisión, el monto de la reserva metálica exigida de acuerdo a este principio. Pero ciertamente muchos países van muy por encima del mismo.

Puede oírse la voz de la prudencia que diga que la reserva debe ser suficientemente grande para proveer contra un retiro apreciable de disponibilidades, esto es, una «fuga» (flight) de la moneda. Pero esto es inasequible. No es simplemente una cuestión del retiro de disponibilidades de propiedad de extranjeros. Tan pronto como la desconfianza en la moneda se generaliza, se retiran asimismo las disponibilidades de propiedad de los nativos. Existe, pues, el mismo riesgo de pérdida.

Aun si el Banco Central, cubriera la totalidad de sus obligaciones con oro, esto no sería aún suficiente. Los depositantes de los bancos comerciales, retirarían oro, y cuando los bancos comerciales hubieran agotado sus reservas depositadas en el Banco Central, y la demanda de sus depositantes aún persistiera, ellos tendrían que suspender ya sea sus pagos u obtener fondos prestados del Banco Central. Para salvar a la totalidad del sistema bancario, el Banco Central estaría, entonces, obligado a cumplir su función esencial como el último prestatario a quien se pudiera recurrir, y crearía, en consecuencia, nuevas obligaciones sin cobertura metálica, con el propósito expreso de permitir a los depositantes atemorizados retirar el oro.

Es en consecuencia impracticable el proveer contra una fuga de la moneda. Todo lo que es deseable, es tratar de conseguir una reserva áurea suficientemente grande (con un cierto margen), para satisfacer las demandas que surjan en el intervalo que existe entre la iniciación de una restricción del crédito y su efectividad ulterior.

Dice más adelante el profesor Hawtrey que si fuera la práctica general, la de limitar las reservas áureas a lo realmente necesario, una proporción

enorme de la oferta mundial de oro se tornaría redundante. El problema de estabilización sería por muchos años, no ya el de economizar el oro, sino el de absorber el metálico áureo redundante.

Pero desgraciadamente — sigue diciendo Hawtrey — no podemos esperar en esa moderación. Aun cuando pasaran las actuales condiciones anormales por que atraviesa el mundo, es probable que continúe por diversas naciones la absorción de grandes cantidades de oro. El mundo no estará seguro contra una escasez de oro. Y el peligro será tanto mayor, si la fuerte declinación que se anticipa en la oferta áurea proveniente de las minas se realiza a partir del año 1940.

Termina sus consideraciones el profesor Hawtrey, diciendo que *eventualmente puede hacerse indispensable el patrón cambio oro (gold exchange standard), para cualquier plan de estabilización del poder adquisitivo del oro. Las reservas de cambio extranjero que se mantengan, no deberán ser necesariamente grandes. Ni deben formar parte de las reservas estatutarias, como sucede con el oro. Cada Banco Central debe tener una reserva suplementaria que exceda de la reserva estatutaria (como la reserva del Departamento Bancario del Banco de Inglaterra), debiendo consistir especialmente este sobrante de cambio extranjero en lugar de oro.*

No es conveniente que las existencias de cambio extranjero de cualquier Banco Central lleguen a las cifras del Banco de Francia después de 1928. Esas cifras que pasaban de 200.000.000 de libras esterlinas, eran mucho mayores que las requeridas para una contracción del circulante, y llevaron al Banco de Francia a una extensión inconveniente de sus operaciones en las plazas monetarias de Londres y Nueva York. Las reservas de cambio extranjero en cuanto estén formadas de letras, exigen un control sistemático, desde que las letras vencen y deben ser repuestas por otras nuevas.

Todo lo que es necesario, según Hawtrey, es una reserva de cambio extranjero que bastare para cubrir cualquier

saldo internacional adverso. Una vez que el sistema se acepte, los bancos centrales podrán negociar con un cambio favorable, comprando disponibilidades extranjeras a un precio que esté dentro de los puntos de oro, evitando así un aflujo de oro. Únicamente si un país se encontrara envuelto en una situación de cambios adversa, al consentir la inflación, llevaría a sus vecinos a retirar el oro de dicho país. Salvo esa excepción saludable, ningún país que se rija por este sistema, debe sentir ansiedad por el oro.

Con estas consideraciones, extraídas del libro de Hawtrey, hemos dado a conocer algunas explicaciones interesantes de este eminente economista inglés.

A título final, nos parece oportuno transcribir la opinión del profesor Kemmerer, sobre las funciones e importancia de la garantía metálica que mantienen los bancos centrales.

Dice textualmente el profesor Kemmerer que «no debe considerarse el encaje de un Banco Central principalmente como el respaldo de los billetes del banco en circulación y sus depósitos y, fundamentalmente, como la garantía de que el Banco puede hacer frente a sus obligaciones. Esta función la desempeña todo el activo del Banco. A un Banco Central le importa menos la cuestión de la solvencia definitiva del Banco que el mecanismo que se requiere a fin de mantener el valor en oro de los billetes y depósitos mediante el ajuste de la cantidad del medio circulante — billetes y depósitos pagaderos contra cheques — a las necesidades variables del comercio, aumentando su circulación cuando aumentan dichas necesidades y reduciéndola cuando éstas disminuyan. En esta forma se evita la depreciación de los billetes en ciertos momentos, debido a su redundancia, y su alza en otros por haber escaseado. El encaje del Banco Central es, pues, fundamentalmente el «fondo regulador» y no un mero «respaldo» de los billetes y depósitos del Banco y funciona con éxito únicamente cuando se le emplea efec-

tivamente para aumentar o reducir el medio circulante del país. Un encaje de oro muerto, es decir, que no se emplea activamente para los fines de la redención, virtualmente de nada sirve y ninguna función importante desempeña en la conservación del patrón oro.

De lo expuesto más arriba se deduce que el porcentaje de encaje de oro que ha de mantener el Banco Central normalmente debería variar mucho en distintos países, de acuerdo con sus condiciones económicas y actividades políticas. Situaciones como las que siguen favorecerían, evidentemente, un porcentaje de encaje reducido:

- «1» Gran variedad de industrias importantes que cuentan con un mercado amplio y bastante firme y cuyos productos alcanzan precios bastantes estables de estación en estación y de año en año;
- «2» Existencia larga y constante de moneda y bancas sanas y seguras;
- «3» Un pueblo tranquilo, es decir, que no se exalte y sea reactivo a los sustos y pánicos ocasionados por cuestiones monetarias que ocasionan las «corridas» a los bancos y le hacen esconder su dinero;
- «4» Un nivel alto de instrucción en el pueblo;
- «5» Crédito público saneado en los mercados extranjeros, que haga posible obtener sin demora préstamos de emergencia en cualquier momento;
- «6» Confianza plena, tanto en el país como en el extranjero, en la estabilidad política del gobierno;
- «7» La existencia de bancos comerciales fuertes, cuyos préstamos estén representados en su mayor parte, por obligaciones a corto plazo, de fácil realización y que se cancelan a su vencimiento;
- «8» Un mercado activo para documentos comerciales;
- «9» Cantidades fuertes de oro en circulación.

«El revés de estas condiciones favorecería la necesidad de un encaje grande.»

Paso por alto, señor presidente, las otras disposiciones del proyecto, sobre asamblea, duración, fondos nacionales que deben pasar a poder del Banco Central con exclusión de los fondos judiciales, etcétera; porque no ofrecen, me parece, mayor dificultad al respecto y basta leer el articulado de los mismos para apreciar su significado.

La ley de bancos, como ya he dicho, es una consecuencia indispensable de la ley del Banco Central. El ahorro necesita ser protegido por la autoridad pública, pues las consecuencias del mal manejo de los ahorros públicos pueden ser sumamente perjudiciales y desalentar a la colectividad.

Aun aquellos individualistas más recalcitrantes reconocen en ese sentido, la necesidad de que haya una ley que sirva para regular los bancos, establezca los encajes mínimos que deben tener, sus fondos de reserva, las operaciones que les son prohibidas, el régimen de sus depósitos, etcétera; con más razón aquellos que sin preconizar con entusiasmo exagerado, entendemos que la complejidad creciente de todas las actividades obliga a una mayor intervención y fiscalización del poder público.

Entre nosotros, felizmente, esta ley no viene a reparar ningún hecho grave. En cambio, en Europa, la multiplicación de las quiebras bancarias en el curso de los últimos años planteó con urgencia el problema de la intervención del Estado en la política bancaria y la fiscalización de sus operaciones. Es que cuando un Banco cierra sus ventanillas, el Estado no puede permanecer impasible y menos aún, cuando en realidad el Estado tenga su parte de responsabilidad: abuso de crédito público, mala administración, pánico, etcétera.

He dicho que aun los individualistas más exagerados no son refractarios a la intervención del Estado en el control de los bancos y menos en estos tiempos de una tendencia bien marcada hacia la economía dirigida. Pero que

haya intervención en los bancos y que haya una ley reglamentaria para asegurar su fiscalización, no significa, por otra parte, que la función bancaria deba ser absorbida por el Estado.

La banca es un arte y no solamente una ciencia; comporta operaciones cualitativas que no pueden ser tomadas de fórmulas legales. Se concibe que el legislador exija una contabilidad clara, un balance exacto, método para la apreciación de los activos, fondos de reserva, castigos de rubros, prohibición de inmovilizaciones deliberadas, liquidación de inmuebles excesivos, etcétera; pero no que pretenda substituir al directorio disponiendo de los bienes o acordando los créditos.

Es difícil que un texto legal pueda fijar con precisión los límites precisos de la liquidez o la forma de banqueo. La legislación europea es abundante en esta materia de fiscalización bancaria por el Estado. Entre otras leyes, sólo citaré la danesa y el proyecto yugoeslavo.

No necesito extenderme y menos por la hora, en el análisis de la ley reglamentaria de los bancos, porque sus disposiciones de alta policía bancaria son claras y conocidas y además porque, por otra parte, este proyecto es el mismo que ha merecido el apoyo de la diputación socialista que, como recordé, fueron también de los iniciadores de la legislación en esta materia, de modo que todos los sectores de la Cámara tienen emitida opinión favorable al respecto.

Llegamos ahora a uno de los puntos más interesantes del plan trazado por el Poder Ejecutivo. Me refiero al Instituto Movilizador.

He dicho que sin una descongelación de los bancos sería imposible aplicar la ley de bancos y sin la aplicación de la ley de bancos sería inoperante todo el sistema del Banco Central.

La crisis mundial ha planteado un problema complejo de reajuste en todos los países, por la necesidad de adaptar los valores a la baja de precios. Indudablemente la Argentina es uno de los países en que el reajuste se ha rea-

lizado con mayor intensidad y eficacia, sobre todo en los costos de la producción rural. Asimismo en nuestro país como en otros que abandonaron el patrón oro, el reajuste interno de los valores tropezó con menores dificultades que en los países que se mantuvieron con el patrón oro. El conocido economista británico sir Henry Strakosch acaba de publicar en «The Economist» un interesante artículo sobre el problema del oro, en el que preconiza la revaluación de todas las monedas incluso la libra y el franco, para despejar el horizonte monetario internacional.

Pero existe un factor de considerable importancia dentro del ordenamiento económico que es sumamente difícil de reajustar, pues no puede adaptarse, sin medidas de carácter extraordinario, al descenso general de los valores. Me refiero a las deudas, tanto de corto como de largo plazo.

Si las deudas se redujeran proporcionalmente a los precios, no existiría el problema de las deudas. Las complejas relaciones entre el deudor y el acreedor plantean este problema en términos en extremos difíciles.

Cuando los bancos prestan dinero, ellos son los acreedores aparentes y también son los acreedores desde el punto de vista jurídico; pero desde el punto de vista económico los acreedores en verdad son la gran cantidad de depositantes que han confiado sus fondos a tales bancos. Lo mismo ocurre en el caso de los préstamos hipotecarios: los tenedores de cédulas son los acreedores de los que recibieron dinero en hipoteca. Por eso se ha buscado el consentimiento de los tenedores de cédulas para aliviar la situación de los deudores del Banco Hipotecario Nacional, por medio de la conversión. ¿En qué ha consistido ese alivio? ¿Acaso fué menester emitir billetes como algunos preconizaban y otros temían? De ningún modo. Simplemente se redujo el interés y se extendió a 36 años el plazo de la deuda transformándola en un nuevo préstamo, incluyendo, es claro, en esa extensión, los servicios en mora. En esta forma se restableció el funcio-

namiento regular del Banco Hipotecario con un alivio considerable para los deudores.

¿Es posible realizar un arreglo semejante en el caso de los deudores bancarios comunes? La situación es muy distinta. Los depósitos bancarios pueden ser retirados en cualquier momento o mediante un aviso previo prácticamente, en este caso, insignificante. Por eso los préstamos bancarios deben ser líquidos, pero una parte apreciable de los préstamos han perdido su liquidez, se han congelado durante esta depresión. Los deudores requieren facilidades de pago, necesitan una extensión de plazo. Si no la obtienen, no cabe otra solución que la de ejecutarlos, con lo que el banquero perdería seguramente fuertes cantidades. Tanto la extensión de los plazos como la ejecución, perjudicarían seriamente a los depositantes: los primeros porque se inmovilizaría su dinero por un tiempo largo trayendo situaciones muy embarazosas, y la ejecución de los deudores porque las pérdidas elevadas de una liquidación en masa tendrían que ser soportadas también por los depositantes, pues sobrepasarían sin duda el capital y las reservas de los establecimientos de crédito, que, como se sabe, son en volumen muy reducidos en proporción a la masa de los depósitos.

Las soluciones que crean nuevos problemas más serios que los que se pretendían afrontar, no son soluciones sino arbitrios contraproducentes. Sin embargo, no faltan quienes opinen sobre las medidas propuestas por el Poder Ejecutivo sin analizar los factores reales de la situación bancaria y económica. Hablan de liquidar a los deudores que no pagan, pero que pueden pagar si se les otorga plazos adecuados, olvidando la situación de los verdaderos acreedores. ¿Qué hacer con los depositantes de los bancos? Estoy seguro que ninguno de estos críticos cargaría con la enorme responsabilidad pública de preconizar como solución del problema de los créditos congelados la inmovilización de los depósitos o de la pérdida de parte de sus haberes por los depositantes.

Afortunadamente si esos arbitrios llevarían a resultados calamitosos, existen otras soluciones adecuadas con bases lógicas y consistentes y abonadas por la experiencia de países extranjeros. En efecto, el problema de los créditos congelados no es un problema puramente argentino: puede decirse, al contrario, que en relación al volumen de las actividades comerciales e industriales del país y a la gravitación más intensa de la crisis en esta República por razón de su economía, por ser un país de exportación al que se le han cerrado grandes mercados que inundaba antes con sus productos, la congelación bancaria es muy inferior a la que han tenido otros países de un progreso industrial y comercial mayor.

Voy a fundamentar mis aseveraciones con una publicación cuya autoridad nadie puede discutir. Me refiero a la publicación de la Sociedad de las Naciones que se titula «Situación económica mundial, año 1932-33».

«Es de notar — dice esta publicación — que los peligros provocados por esta situación fueron tales que la necesidad ya señalada de reforzar el encaje y los haberes líquidos de los bancos a fin de salvaguardar los intereses de los depositantes en caso de pánico, al mismo tiempo que la necesidad de reforzar el capital de la industria, han sido obstáculos a los primeros esfuerzos intentados por los bancos centrales y los Estados para combatir la crisis, procurando tener un crédito más barato y más abundante.» Y más adelante: «Ha llegado el momento de afrontar los grandes problemas de la reconstrucción bancaria y en particular de esforzarse en liberar a los bancos y a la industria del pago de los créditos congelados irrealizables, uno de los grandes factores que impiden a un crédito barato y abundante, penetrar en la estructura industrial y favorecer la vuelta a los negocios; acelerada un poco la liquidación, se llega a que los bancos comerciales que eran detentadores del crédito a largo plazo, considerables y poco productivos, y que por otra parte no obtenían beneficios,

fueron disminuyendo sus operaciones a corto término, sintiendo grandes dificultades, al extender al mercado los capitales a largo plazo y las reducciones de la tasa del interés que había ya comenzado a prevalecer sobre el mercado monetario.»

Y viene aquí el estudio de las medidas tomadas en los países europeos para obtener esta descongelación de créditos, y dice esta publicación: «El relevamiento del sistema bancario de Alemania, particularmente tocado, comenzó en Febrero. En aquella época el Estado con la ayuda del Reichbank puso en ejecución un plan de reorganización completa de los grandes bancos comerciales, que preveía notablemente reducciones considerables de los activos y el aporte de capitales frescos, con el concurso del tesoro e indirectamente del Reichbank. Hacia el fin de 1932, nuevas medidas fueron tomadas, que consistieron en la creación de dos organizaciones, el Instituto Alemán de Financiación (Deutsches Finanzierungsinstitut) y la Caja de amortización para el crédito industrial (Tilgungskasse für gewerbliche Kredite). La primera, que fué creada por medio de la subscripción de acciones privilegiadas por un grupo de bancos semioficiales y de acciones ordinarias por los bancos comerciales, tomó a estos últimos las acciones industriales de las empresas solventes hasta la concurrencia de un monto igual a diez veces el capital en acciones subscrito por el Banco Comercial interesado; esos bancos se desembarazaron de esos créditos no líquidos y recibieron en cambio billetes que el Reichbank podía redescantar por un monto igual al 75 % de su valor». Esto destaca la diferencia substancial entre el sistema argentino y el alemán; aquí la descongelación se va a hacer sin que entre a la circulación un solo billete. Eso está claramente establecido en nuestro proyecto de ley que los bonos amortizables que se entregan a los bancos en pago de los congelados no son redescantables, vale decir que no se pueden transformar en ninguna forma en bi-

lletes. Y la segunda de las instituciones mencionadas ha sido creada para facilitar la reducción del capital y la reorganización de las sociedades industriales imposibilitadas de presentar un balance con saldo activo.

No solamente Alemania ha tenido que recurrir a un procedimiento semejante para descongelar los créditos, sino que eso lo han hecho en diversas formas todos los países, porque la congelación es un fenómeno universal y una resultante de la crisis, y no es característica de nuestro medio ni nos es peculiar en ninguna forma, como se ha pretendido. En Italia, la liquidación de los activos bancarios congelados se ha efectuado de una manera más o menos semejante, pero sin recurrir tanto al crédito público. El Instituto Movilizador italiano, creado en Marzo de 1932, por la emisión de obligaciones sobre el mercado libre, acuerda préstamos a largo plazo a las sociedades industriales a fin de que éstas puedan suprimir sus descubiertos. El Instituto de la Reconstrucción Industrial, creado en Enero de 1933 mediante la emisión de bonos garantidos por el Estado, tomó igualmente los haberes congelados y liberó así a los bancos de la presión que ejercen sobre ellos las disponibilidades.

Las mismas medidas o muy semejantes han sido tomadas en otros países. En Dinamarca ha sido creada una institución bastante parecida a la Corporación de Reconstrucción Financiera de Estados Unidos, el Krisefond; Austria siguió en Marzo de 1933 el ejemplo de Alemania y de Italia, creando una institución especial encargada también de tomar los activos congelados de los bancos comerciales, la Gesellschaft für Revisión und Treuhandige Verwaltung.

Con razón podía decir en su informe el Banco de Ajustes Internacionales «que en su conjunto podía considerarse para Europa el año 1932 como un año de adaptación a las condiciones nuevas que han prevalecido en materia económica y monetaria, como un año caracterizado por un esfuerzo netamente constructivo.»

Tres años después de que estas instituciones funcionan en Europa, el Poder Ejecutivo proyecta un instituto que evita todos los inconvenientes que aquéllos pudieran tener y proporciona en cambio los medios para obtener la descongelación bancaria; y ese proyecto merece las críticas más apasionadas, cuando en cambio aquello mereciera los elogios más fervorosos.

Estados Unidos nos ofrece también un ejemplo claro en esta materia. Todos conocen la profunda crisis bancaria que ha sufrido ese país; cómo la presidencia de Roosevelt se inició justamente con un cierre de todos los bancos y con la necesidad de declarar un largo feriado; cómo antes de hacerse cargo de la presidencia Roosevelt, durante el gobierno de Hoover, se había creado ya la Corporación de Crédito Nacional para que los bancos uniesen sus esfuerzos a fin de acordar créditos a otros bancos que se encontraban temporalmente con dificultades; cómo después, en 1932, también durante la presidencia de Hoover, se estableció la Corporación de Reconstrucción Financiera y después la Corporación de Crédito Nacional, aquélla con un capital de 500.000.000 de dólares y con un poder de expansión de 1.500.000.000; cómo fueron inoperantes todas estas instituciones, incluso la reforma de la ley de reserva federal para ampliar con fondos del Estado la emisión de circulante; y son conocidos también los esfuerzos que han sido realizados por el presidente Roosevelt para realizar la reconstrucción financiera de Estados Unidos, evitando el pánico que se había producido en aquel país al hacerse cargo del gobierno, con motivo del «crak» bancario anterior.

En efecto, la posición intrínsecamente endeble de los bancos norteamericanos, no pudo modificarse con la adopción de aquellas medidas, que no hicieron más que postergar los acontecimientos producidos en forma vertiginosa en los comienzos del año 1933.

Son estos los momentos dramáticos de la crisis bancaria americana, que

ocurre justamente cuando asume el mando el nuevo presidente Roosevelt.

El cierre de los bancos, la declaración de un feriado nacional y la reapertura ulterior de aquellas instituciones que a juicio del gobierno se encontraban en situación solvente, fueron algunos de los hechos más trascendentales que ocurrieron en aquellas semanas inolvidables.

Las medidas decretadas por el presidente Roosevelt no afectaron únicamente a los bancos, sino también al oro que hasta ese entonces entraba y salía del país sin sufrir traba alguna en su movimiento.

El hecho que el atesoramiento no se redujera, obligó al gobierno a tomar enérgicas medidas contra los poseedores de oro. Estas se redujeron a prohibir su libre circulación, a decretar el embargo definitivo del metal amarillo y a obtener que el Congreso americano abrogara la cláusula oro, cuya dilucidación judicial acaba de ser resuelta en favor del gobierno por la Corte Suprema de Estados Unidos.

Las diferentes disposiciones tomadas por el presidente Roosevelt respecto al oro que habían sido confirmadas por la ley de Emergencia Bancaria del 9 de Marzo de 1933, exigían la entrega a los bancos de reserva federal de todo el oro en barras y amonedado así como de los certificados de oro que circulaban en el mercado interno.

Por decreto del 29 de Agosto de 1933 se autorizó al secretario del tesoro a recibir en consignación el oro proveniente de las minas americanas para su venta a las personas autorizadas a adquirirlo para sus actividades industriales, comerciales o artísticas, así como el de exportarlo a los compradores extranjeros.

Por un decreto fechado el día 25 de Octubre de 1933, se autorizó a la Corporación de Reconstrucción Financiera a adquirir el oro de las minas americanas para exportarlo y venderlo en el extranjero.

Mientras que el decreto del 29 de Agosto de 1933 tenía por objeto que la tesorería americana pagara por el oro producido en las minas americanas un

precio equivalente al mayor valor obtenido en los mercados libres del mundo, teniendo en cuenta los costos del transporte y del seguro; el del 25 de Octubre tendía a pagar por el oro un precio superior al del mercado internacional, como lo prueba el primer precio fijado por la Corporación de Reconstrucción Financiera que era superior en 27 centavos a la cotización que regía el 25 de Octubre en el mercado mundial. Las operaciones de compra de oro que en un principio se realizaron en el mercado nacional, fueron ampliadas más tarde al mercado internacional con el fin de depreciar más fuertemente el dólar.

Llegamos así al mensaje presidencial del 15 de Enero de 1934 en que Roosevelt solicita una serie de medidas de extraordinaria importancia en el orden monetario. Hasta ese entonces, una buena proporción del oro estaba en poder de los bancos de reserva federal. Nadie era contrario a que si el gobierno revaluara el oro, las ganancias contables que se obtendrían le pertenecieran. No sucedía lo mismo con el traspaso del oro de la reserva al gobierno, que no era considerada necesaria para realizar el justiprecio del dólar.

Con el fin de evitar una discusión interminable sobre este punto, Mr. Roosevelt sostuvo en el mensaje mencionado que si bien bajo las leyes existentes el Poder Ejecutivo podría tomar posesión del oro controlado por la reserva federal, era preferible que una medida de esa importancia fuera sancionada expresamente por el Congreso, de modo tal que el gobierno de Estados Unidos fuera propietario de todas las existencias metálicas del país. Agregaba enseguida el presidente Roosevelt, que esa legislación otorga la propiedad de todas las reservas de oro al gobierno, al que pertenecería asimismo el incremento que resultara de una disminución del contenido metálico del dólar.

Los proyectos gubernamentales que acompañan al mensaje del 15 de Enero de 1934, fueron discutidos por el Congreso americano que sancionó la ley de

reservas áureas (Gold Reserve Act) el día 30 de Enero de 1934.

Esta ley además de fijar el límite máximo de la revaluación del dólar y su destino — a lo que nos referiremos más tarde — disponía el traslado de todo el oro en poder de la reserva federal al gobierno norteamericano, acreditándose a la tesorería su importe equivalente en dólares.

Disponía además esta ley la inconversión metálica del circulante de Estados Unidos estableciéndose que los certificados de oro poseídos por los bancos de reserva federal, podían ser convertidos en la cantidad y oportunidad que el secretario del Tesoro juzgara necesario, para mantener la igualdad del poder adquisitivo de todas las clases de moneda de Estados Unidos.

Esos canjes de oro debían hacerse en forma de lingotes. El secretario del Tesoro estaba además autorizado a fijar las condiciones bajo las cuales podía adquirirse, exportarse o ponerse en custodia el oro americano. Todas las monedas de oro de Estados Unidos serían retiradas de la circulación y transformadas en lingotes, prohibiéndose la acuñación o entrega de nuevas moneda de oro.

Llegamos así al otro aspecto que encara la ley de Reservas Áureas del año 1934, a saber, el de la revaluación del oro.

La reducción del contenido metálico del dólar había ya sido autorizado por la ley del 12 de Mayo de 1933, al otorgar al presidente de la República la facultad de hacerlo hasta el 50 % de su valor legal.

No está demás decir aquí que dicha ley autorizaba también al presidente de la República para ordenar a la Reserva Federal, por intermedio del secretario del Tesoro a que comprara títulos públicos en el mercado abierto hasta 3.000.000.000 de dólares; a que una vez efectuada esta compra realizara si lo juzga oportuno la emisión de papel moneda sin respaldo metálico alguno por valor de 3.000.000.000 de dólares, y a que aceptara la plata de los países extranjeros en pago de las deudas de

guerra hasta una suma de 200.000.000 de dólares, por un plazo de seis meses y al tipo de 50 centavos de dólar la onza que serviría para poner en circulación una cantidad equivalente de moneda de plata.

La ley del 12 de Mayo de 1933 dispone pues el límite mínimo a que pueda reducirse el contenido metálico del dólar.

En su mensaje al Congreso americano del 15 de Enero de 1934, el presidente sostuvo que un estudio cuidadoso del problema lo había llevado a creer que una revaluación superior al 60 % del valor real primitivo no respondería a los intereses públicos, y que era en consecuencia conveniente que el Congreso fijara en dicho 60 %, el límite superior de la revaluación, cuya base mínima ya había sido autorizada por la ley del año 1933.

Estos deseos del presidente Roosevelt fueron aceptados por el Parlamento, y se encuentran perfectamente establecidos en la sección 12 de la ley de Reservas Áureas del 30 de Enero de 1934 (Gold Reserve Act of 1934) que fija el límite superior del 60 %.

En esta forma el presidente de la República tenía fijados los límites legales dentro de los cuales podría revaluar el dólar, esto es, entre el 50 y el 60 % de su valor.

Esta fijación de límites no significaba en forma alguna que el gobierno de Estados Unidos deseaba establecer un valor definitivo para el dólar, según surge de las propias declaraciones oficiales y del texto de la ley sancionada.

Paso por alto otros ejemplos de reajuste económico un tanto drástico, como el que han hecho nuestros vecinos de Brasil, con un decreto-ley estableciendo la reducción de las cargas hipotecarias en un 50 % de su valor y cargando el Estado con la indemnización del perjuicio a los acreedores mediante la emisión de títulos del gobierno federal con un interés anual de 6 % y un monto de emisión hasta 500.000 contos de reis.

He aquí el decreto-ley del Brasil suscripto por el presidente Vargas y su ministro Aranha:

Decreto N° 23.533 de 1° Diciembre de 1933

Reducción del 50 % en el valor de todos los débitos de agricultores, contraídos antes del 30 de Junio del corriente año y de otras providencias.

El jefe del Gobierno Provisorio de la República de Estados Unidos del Brasil, usando de las atribuciones que le confiere el decreto número 19.398 del 11 de Noviembre de 1930,

CONSIDERANDO que para las medidas nacionales de defensa del cambio contribuye la producción agrícola con la casi totalidad del sacrificio exigido al país;

CONSIDERANDO que, en virtud de la situación creada por la generalización de la crisis, la tierra y todos sus productos sufrieron una reducción considerable de valor;

CONSIDERANDO que tal reducción del valor creó una situación de graves dificultades para la casi totalidad de los agricultores o sea para la propia economía nacional que en la agricultura asienta sus bases;

CONSIDERANDO que en tales casos cabe al poder público proveer, tomando las providencias para la defensa de los intereses nacionales, confundidos con los de los particulares;

DECRETA

Artículo 1° — Queda reducido de 50 % el valor, desde la fecha de este decreto, de todos los débitos de agricultores, contraídos antes del 30 de Junio del corriente año, cuando tuvieran garantía real o hipotecaria.

Art. 2° — Queda igualmente reducido de 50 % el valor de los débitos de agricultores cualesquiera que sea su naturaleza, a Bancos o casas bancarias, desde que contraídos antes del 30 de Junio del corriente año, en el caso de insolvencia o estado de deudor.

Inciso 1°: Inclúyense también en las disposiciones de este decreto, los débitos contraídos después del 30 de Junio, siempre que constituyan novación de débitos anteriores.

Inciso 2°: Son considerados agricultores, para los efectos de este decreto, to-

das las personas, físicas o jurídicas, que ejerzan su actividad en la agricultura, cría o invernaje de ganado.

Inciso 3°: La circunstancia de ejercer el agricultor otras actividades no podrá ser invocada para cercenarle el beneficio de esta ley total o parcialmente.

Inciso 4°: Quedan exceptuados los dueños de propiedad rural o agrícola arrendada a terceros que no ejerzan directamente el cultivo de los campos, así como las deudas contraídas en monedas extranjeras.

Art. 3° — Como indemnización del perjuicio sufrido por los acreedores en virtud de lo dispuesto en los artículos 1° y 2°, les serán entregadas por su valor a la par, pólizas del gobierno federal del 6 % de interés anual, de valor nominal de 1:000\$000 cada una, para cuya emisión queda autorizado el ministro de Hacienda hasta el límite de quinientos mil contos de reis.

Inciso 1°: Las pólizas tendrán la misma fecha de este decreto y serán rescatadas dentro del plazo de treinta años, a partir de Junio de 1935.

Inciso 2°: Los cupones serán pagados semestralmente en Junio y Diciembre de cada año.

Inciso 3°: El rescate será hecho por sorteo en Diciembre de cada año.

Inciso 4°: Las pólizas, así como los cupones respectivos quedan exceptuados de cualquier impuesto o tasa.

Art. 4° — Las pólizas referidas en el artículo 3° serán recibidas a la par por la Caja de Movilización Bancaria, en garantía de operaciones de crédito que le serán propuestas en los términos del decreto número 21.499 de 9 de Julio de 1932.

Párrafo único: El gobierno prorroga la duración de la Caja de Movilización Bancaria, a los efectos de atender las solicitudes que le puedan ser hechas en los casos previstas por el citado decreto número 21.499 de Junio 9 de 1932, con la base de la garantía de esas pólizas.

Art. 5° — Los acreedores afectados por este decreto, que a su vez fueran deudores a Bancos o a casas bancarias, quedan con derecho de dar en pago de

su deuda, desde la fecha de este decreto, 50 % de las pólizas referidas, por su valor a la par.

Art. 6° — Para dar ejecución a las disposiciones de este decreto, queda creada la Cámara de Reajuste Económico, cuyo funcionamiento el Ministerio de Hacienda, contratará con el Banco del Brasil.

Art. 7° — A los efectos de lo dispuesto en el artículo 3°, dentro de noventa días de la fecha de este decreto, todos los Bancos y casas bancarias deberán suministrar a la Cámara de Reajuste Económico, una relación detallada de las reducciones hechas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1° y 2°.

Párrafo único: Los acreedores comerciales o de cualquier otra naturaleza, harán su comunicación igualmente a la Cámara de Reajuste Económico dentro del plazo máximo de 6 (seis) meses, adjuntando el traslado de escritura y demás documentos comprobatorios de la existencia de la deuda y consiguiente reducción.

Art. 8° — Los acreedores que dejaran de hacer las debidas comunicaciones en los plazos estipulados, o que obstaculizaren de cualquier modo los exámenes y verificaciones de la Cámara de Reajuste Económico, perderán derecho a la indemnización a que se refiere el artículo 3°.

Art. 9° — A la Cámara de Reajuste Económico quedan asegurados los medios de verificación de la legitimidad y exactitud de las deducciones de crédito comunicadas, inclusive el de examen de la inscripción.

Art. 10. — Las deudas de agricultores sujetas a las disposiciones de este decreto son únicamente aquellas en que el agricultor sea deudor y principal pagador y si el título fuera cambial, sea emitente o aceptante.

Art. 11. — El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación debiendo su texto ser transmitido a los interventores para su publicación inmediata; revocadas las disposiciones en con-

trario, incluídas las de carácter constitucional.

Río de Janeiro, 1° de Diciembre de 1933.

(aa) GETULIO VARGAS.

Oswaldo Aranha.

Pero sin duda alguna el caso más interesante es sin disputa el de Bélgica, donde el Parlamento concedió amplias facultades al gabinete para tomar medidas de emergencia monetarias y financieras. Cito especialmente este caso porque aquí tanto se ha hablado de delegación de facultades y se pone el grito en el cielo por cualquiera medida, por bien inspirada que sea, que adopta el Poder Ejecutivo como una providencia indispensable que sea menester tomar con alguna rapidez por la naturaleza misma de los acontecimientos. Compárese esto con lo que ocurre en países de una tradición, de instituciones y costumbres tan adelantadas como Bélgica y a la vez tan celosos de sus libertades individuales.

En Bélgica se creó un Instituto Movilizador muy semejante al que proyecta el Poder Ejecutivo, pero ese instituto no fué materia de una ley. El Parlamento delegó por un tiempo prudencial, seis o siete meses, facultades al Poder Ejecutivo para que realizase la reconstrucción económica y, entonces, como consecuencia de ello, el gobierno belga proyectó un Instituto Movilizador con funciones análogas a las contempladas en el proyecto argentino. Ese instituto se ha hecho para adquirir los activos congelados de los bancos; pero — y vuelvo a hacer notar la diferencia — en el caso de Alemania se entregaban billetes, en el de Bélgica se entregan bonos. Estos bonos son redescontables, vale decir que se transforman en billetes. En el caso argentino, en cambio, no. Ni un billete se entrega. El bono es sólo en realidad una simple certificación de deuda. Acredita que el Banco es acreedor por ese monto, pero dicho bono está sujeto a una amortización e interés según sea el producido que den los activos congelados que ese Banco mismo ha transferido al Instituto Movilizador. De

manera que, si bien desde el punto de vista jurídico, el traspaso de los créditos congelados al Instituto Movilizador es perfecto, ya sea como cesión o venta, porque se ha entregado un crédito o un bien y por él se ha pagado un precio, parte en dinero y parte en bonos, esos bonos quedan sujetos a un régimen especial y no pueden ser redescontados en ningún caso por expresa prohibición de la ley y sólo se amortizan en la proporción que el crédito, inversión o bien transferido se haya ido realizando.

En Bélgica, no obstante esa facultad de redescantar los bonos, ni los parlamentarios, entre los cuales hay muchos socialistas, ni la prensa, han lanzado las campanas al viento, atribuyendo a dicho redescuento una influencia inflacionista, no obstante que la pudiera tener. Para ellos lo primero era salvar el sistema bancario haciéndolo líquido para proveer al relevamiento económico. En cambio entre nosotros cuánta crítica apasionada e ingrata nos suscita.

En el año 1926 se dicta una ley fechada el 16 de Julio por la que se otorgan al rey poderes extraordinarios, que dice así:

«Artículo 1º — En vista de proseguir el levantamiento financiero del país y la preparación de la estabilización monetaria, el rey puede, por un plazo de seis meses, por decretos acordados en consejo de ministros:

Modificar o completar todas las disposiciones en vigor relativas a la circulación fiduciaria.

Contratar empréstitos, regular sus modalidades, establecer todas las exenciones fiscales y análogas y adoptar las medidas tendientes a detener o reducir la inflación, evitar las consecuencias de ésta y asegurar el retorno al país de los capitales.

Ejercer un control riguroso del comercio de divisas extranjeras.

Aprobar todas las modificaciones, derogaciones o adiciones a los estatutos del Banco Nacional, que fueran requeridas para la realización de los objetivos previstos por el presente artículo.

Aplicar coeficientes de aumento a

los derechos, tasas e impuestos de toda naturaleza; con el objeto, si ello fuera posible, de mantener el nivel de rendimiento.

Reconocer la validez de las estipulaciones sobre la base del oro en todos los actos públicos y privados.

Establecer todas las reglas capaces de restablecer la fijeza de las valuaciones de inventarios y balances.

Proceder a la enajenación de bienes de sus dominios.

Regular la liquidación, la venta y disposiciones de bienes de ex enemigos que se encuentren bajo secuestro.

Tomar todas las medidas necesarias para reprimir las opiniones e informaciones tendientes a hacer titubear el crédito del Estado.

Adoptar las medidas necesarias para el aprovisionamiento de la población y la disminución de los consumos suntuarios.

Las contravenciones a los decretos dictados de acuerdo a las facultades que otorga esta ley, serán castigadas con penas correccionales, a menos que el mismo decreto disponga que la sanción se reduce a penas de policía o que corresponda la aplicación de leyes fiscales.

A la expiración del término de seis meses se hará un informe a las Cámaras, dando cuenta de las medidas adoptadas por el gobierno en virtud de la presente ley.

Art. 2º — La presente ley comienza a ser obligatoria el mismo día de su publicación.

En virtud de esta ley y de otra del 26 de Febrero del mismo año en que se autorizan medidas relativas a la circulación fiduciaria y a la estabilización monetaria, el rey dictó, con fecha 18 de Octubre de 1926, diversos decretos, entre los que se encontraban los siguientes:

1º Aprobación de una Convención entre el Banco Nacional de Bélgica y el Estado.

2º Prórroga de la duración del Banco Nacional de Bélgica y otros asuntos.

3º Relativo a la estabilización monetaria.

Con fecha 31 de Julio de 1934, se dicta otra ley por la que se otorga al Poder Ejecutivo, poderes extraordinarios en materia económico-financiera. Dicha ley declara lo siguiente:

El rey puede, durante el término de 7 meses, por resoluciones deliberadas en Consejo de Ministros, y en vista del reajuste económico y financiero y de la disminución de las cargas públicas, pero con exclusión de toda modificación al estatuto monetario:

Artículo 1º — a) Modificar o completar la legislación fiscal y revisar sobre todo la distribución de los impuestos, el modo de percepción y la tasa de los mismos, modificar el procedimiento administrativo y contencioso y tomar todas las medidas útiles para reprimir los fraudes;

b) Efectuar toda clase de operaciones de tesorería, contratar empréstitos a largo y corto plazo, internos o externos, reglamentar sus modalidades, establecer toda clase de exenciones fiscales y consecuentes, operar con toda clase de reembolsos;

c) Modificar o completar, teniendo en cuenta el costo real de la vida, la legislación relativa a las contribuciones, subvenciones, indemnizaciones y pagos de cualquier naturaleza que están a cargo del Estado, de las administraciones y establecimientos públicos o de utilidad pública, de los organismos delegados o controlados; prohibir o reglamentar toda acumulación; modificar o completar toda regla, estatal o no, de organización, de funcionamiento, de competencia y de procedimiento en esas materias, comprendiendo en ellos los plazos de prescripción y de caducidad;

d) Tomar las medidas necesarias para reorganizar y coordinar el régimen de las pensiones a cargo de las cajas de viudas y huérfanos;

e) Modificar o completar la legislación sobre la contabilidad del Estado, de las provincias, de las comunas y de los establecimientos públicos y de utilidad pública, de los organismos delegados o controlados.

Art. 2º — Tomar las medidas necesarias a fin de reducir las cargas de las provincias y de las comunas y asegurar el equilibrio de sus presupuestos y permitir una mejor repartición de los recursos fiscales y de las obligaciones de esas administraciones;

b) Mejorar las modalidades del control ejercido en virtud de la ley sobre las provincias, las comunas y los establecimientos públicos.

Art. 3º — a) Proteger la economía con medidas propias para fortalecer la confianza de los organismos que recurren a ella, ampliar las posibilidades y facilitar las condiciones del recurso al crédito; reglamentar las bolsas de valores y de comercio, la profesión de agente de cambio y el régimen de excepción del juego en materia de operaciones de Bolsa;

b) A fin de beneficiar nuestra economía nacional con una actividad coordinada, favorecer la formación de agrupaciones profesionales económicas, eventualmente en la medida que el interés general lo exija, hacer extensiva en una rama determinada, a todos los productores o distribuidores, las obligaciones voluntariamente contraídas por una indiscutible mayoría;

c) Armonizar la legislación relativa a las denominaciones originarias y a las indicaciones de procedencia, a las marcas de fábrica y de comercio y a la pro-

riedad industrial en general, con las necesidades actuales;

- d) Proteger a los productores, comerciantes y consumidores contra todo procedimiento tendiente a falsear las condiciones normales de la competencia.
- e) Extender y suavizar la intervención del gobierno en materia de derechos a los comisionistas responsables.

Tomar las medidas necesarias a fin de asegurar una explotación más económica y una mejor coordinación de los transportes de toda naturaleza.

Tomar las medidas necesarias a fin de favorecer, adoptándolo a las condiciones económicas actuales, el precio de los alquileres y de los productos de primera necesidad.

Permitir, en condiciones equitativas la realización de contratos que comportan prestaciones periódicas, sobre todo en materia de arrendamientos y préstamos.

Modificar y completar la legislación relativa a la liquidación de sociedades, al concordato y a la quiebra.

- f) Tomar las medidas necesarias para asegurar trabajo y la reeducación profesional a los desocupados involuntarios.

Aplicar a los trabajos de inspección de calles decretado a fin de resguardarse de la desocupación, los procedimientos de expropiación instaurados por la ley del 3 de Enero de 1934.

Art. 4º — Tomar las medidas necesarias a fin de prevenir y reprimir todos los actos tendientes a hacer vacilar el crédito público.

Art. 5º — Asegurar si hubiere lugar, la aplicación de las disposiciones tomadas en virtud de la presente ley por todas las sanciones civiles, fiscales o penales, no pudiendo estas últimas comprender más que penas correccionales o de policía.

Disposiciones especiales

1º — Al terminar el plazo previsto por el artículo 1º deberá informarse a las cámaras sobre las medidas tomadas por

el gobierno en virtud de la presente ley.

2º — La presente ley entrará en vigor el día de su publicación en el «Moniteur».

En virtud de esta ley, el rey dictó diversos decretos, a saber:

1º — Decreto real de aplicación del crédito, del 22 de Agosto de 1934.

2º — Decreto relativo a la organización de la Sociedad Nacional de Crédito Industrial, de 22 de Agosto de 1934.

3º — Decreto complementario de los anteriores, que lleva fecha de 31 de Octubre de 1934.

Basándose en los poderes especiales que le fueron acordados en Julio último por un período de 6 meses, el gobierno belga acaba de promulgar una serie de decretos publicados en el «Monitor Belga» de 24 de Agosto, llevados a reanimar la vida económica del país facilitando el crédito y aligerando algunas cargas fiscales.

El saneamiento industrial, comercial y agrícola previsto se hará por intermedio de la Sociedad Nacional de Crédito de la Industria (S. N. C. I.) cuya creación se remonta a 1919 y que dispone en la actualidad de un capital de 150.000.000 de francos belgas. La S. N. C. I. está autorizada hasta el 31 de Diciembre de 1935 para aceptar el otorgamiento de préstamos que han sido consentidos por sociedades con miras a operaciones industriales, comerciales o agrícolas. Por el efecto de esta cesión el interés correspondiente a los créditos cedidos queda reducido a 4 $\frac{1}{4}$ % al año, y el vencimiento de los créditos es llevado a veinte años a partir de la cesión, sin embargo, podrán ser reembolsados con anticipación. En cambio del crédito cedido, dicho organismo entregará a la par al cedente, obligaciones del tipo 3 % que le serán restituídas para ser anuladas a la fecha de reembolso del préstamo. El Estado garantiza el reembolso en capital de esos títulos, hasta un importe de 2.000.000 oro de francos belgas y el acreedor cedente garantiza a la S. N. C. I. hasta el reembolso del préstamo, el pago regular adelantado, del interés del 4 $\frac{1}{4}$ %. La diferencia de interés de 1 $\frac{1}{4}$ % será afectada a un fondo

especial de garantía. Se considera que, colocada a interés compuesto durante los veinte años que deben durar las obligaciones esta dotación podrá constituir un capital que representará aproximadamente la mitad de los adelantos retomados por la S. N. C. I. Esas obligaciones no pueden ser cedidas ni entregadas en caución sin autorización del ministro de Finanzas. La movilización eventual de las obligaciones por el Banco Nacional de Bélgica, se efectuará en las condiciones que concuerden con la política monetaria general.

Ni el ministro de Finanzas, ni el gobernador del Banco Nacional de Bélgica, temen el peligro de la inflación. El primero, ha hecho notar claramente que se trata de créditos generalmente sanos, que los bancos cedentes quedan completamente responsables del doble punto de vista del capital y de los intereses. En cuanto al Banco de Emisión, acordará adelantos sobre fondos públicos en las condiciones tradicionales desde hace 80 años. Su criterio será siempre inspirado en el interés monetario.

El gobierno ha aprovechado esta ocasión para proteger el ahorro y reorganizar el sistema bancario. En adelante, es decir desde el 1º de Enero de 1936, existirán dos grupos de bancos:

1º — Los bancos comerciales o de depósito propiamente dicho, que serán los únicos autorizados a aceptar depósitos a corto plazo.

2º — Los bancos de negocios que administrarán las participaciones industriales y otras a largo plazo. Está previsto que en el porvenir cada uno de los bancos «mixtos» constituirá una nueva sociedad a la que dará su nombre, todo su departamento bancario propiamente dicho (depósitos, papeles de comercio, etcétera), las obligaciones al 3 % recibidas de la S. N. C. I. ... El antiguo Banco reducido así a sólo las participaciones industriales, tomará otro nombre.

Esta reforma, análoga a la que recientemente hicieron Estados Unidos, suprimirá la confusión entre banqueros e industriales la que no es totalmente ajena a las dificultades actuales de

la economía belga. Es, en efecto, innegable que, sobre todo después de la guerra, la interpenetración entre la banca y las grandes industrias había llegado a ser excesiva, como lo decía en la reciente asamblea general de accionistas del Banco Nacional de Bélgica, su gobernador M. Frank: «En tiempo de prosperidad la intromisión de las finanzas en la industria era demasiado grande; pero en tiempos de crisis ha demostrado ser una hipoteca demasiado pesada de la industria sobre los Bancos». La nueva ley remediará estos inconvenientes.

En fin, importantes disminuciones de gravámenes fiscales han sido concedidos.

Sería prematuro pronunciarse sobre la repercusión próxima o lejana de estas medidas de orden económico y financiero, pero desde ya, es permitido afirmar que ellas son capaces de volver a dar al mercado financiero belga una parte de la elasticidad perdida en los últimos años.

El Banco Nacional de Bélgica por su parte ha favorecido el movimiento, al reducir de 3 a 2½ % la tasa de descuento oficial. La situación tiende a mantenerse fuerte, el encaje de oro era el 30 de Agosto de 13.235.000 de francos belgas con relación a un total de compromisos a la vista de 19.192.000 de francos belgas. Respaldo — oro: 68.96 %.

El proyecto argentino, a pesar del precedente belga, que como dije es un país ortodoxo en materia monetaria, que se empeña en mantenerse sobre el patrón oro, ha preferido seguir un sistema distinto para resolver el problema de los créditos congelados. Como he dicho ya, nuestro Instituto Movilizador emitirá también bonos como el establecimiento belga, pero estos bonos no podrán ser redescontados en ningún caso. Entonces, se me preguntará: ¿y cómo se financia este Instituto? ¿Hay alguno de esos pases mágicos de que se habla por ahí con un tanto de precipitación? No, señor presidente; no hay en esto ninguna magia; se hace medianamente un procedimiento claro y sencillo, que no trae aparejado el peligro de la

inflación como demostraré más adelante. Todo el plan de liquidación se basa en el justiprecio o revaluación del oro, que ha llegado el momento de explicar. ¿A cuánto está avaluado actualmente el oro que existe en la Caja de Conversión? Está valuado, en virtud del artículo 7º de la ley 3.871, a un precio de 1.565 pesos moneda nacional por kilo de oro fino. Pero, ¿cuánto cuesta ese oro comprado en el mercado libre? Cuesta 4.330 pesos moneda nacional por kilo. Si el gobierno transforma en oro las divisas que adquiere en el mercado de cambios a razón de 15 pesos por libra, el costo de cada kilo de oro, ¿cuánto resultará ser? Resultará ser \$ 3.420 moneda nacional. Esto es, más o menos, lo que le ha costado al gobierno el oro que ha comprado y que tiene depositado en Londres como una reserva prudencial para los cambios. El costo por kilo, que significa cerca de \$ 43.000 moneda nacional por barra típica oro de 460 onzas, a que me referí cuando hablé del Banco Central, constituye el precio máximo asignado por el gobierno al oro de la Caja al pasar al Banco Central.

Justamente aquella fué una de las innovaciones principales establecidas por la Comisión de Presupuesto, a indicación de mi distinguido colega por Tucumán, ingeniero Simón Padrós.

Sr. Ministro de Hacienda. — El Ministerio de Hacienda enunció en el Senado que vería con agrado una limitación de ese oro.

Sr. Martínez. — Aprovecho la manifestación del señor ministro para declarar que las reformas hechas por la comisión han encontrado el mejor auspicio y la mayor buena voluntad de parte del señor ministro de Hacienda, quien ha demostrado realmente una gran permeabilidad a todas las sugerencias convenientes que se le han hecho y ha dado también razones substanciales para oponerse en otros casos a modificaciones que no prosperaron entonces porque los miembros de la comisión encontramos que eran atendibles las explicaciones del señor ministro.

La comisión, como he dicho al comenzar este estudio, no ha modificado substancialmente los proyectos del Poder Ejecutivo porque en estas materias no se puede modificar por puro prurito de hacer innovaciones. Estos proyectos obedecen a un plan, a un criterio, a una construcción determinada. Somos enemigos de los remiendos que a nada conducen, sino a satisfacer la vanidad personal de sus autores, pero hemos querido aclarar y precisar algunos conceptos aunque estaban explícitamente establecidos, pero que para desvirtuar críticas algunas veces apasionadas e injustas convenía profundizar o destacar. En el caso del límite del justiprecio del oro, encontramos del primer momento la buena voluntad del señor ministro y justamente al fijar el monto del límite fué él el que concretamente dió el monto de la equivalencia, dando así, vida a la proposición prudente y oportuna del señor diputado por Tucumán. Se tomó el precio que le ha costado al gobierno el oro adquirido en virtud de la autorización de la ley de presupuesto.

El señor ministro de Hacienda ha supuesto una diferencia en el justiprecio del oro de \$ 500.000.000. Podrá ser mayor; podrá llegar al límite que ha fijado la comisión de 670.000.000; puede ser menor también porque este justiprecio del oro es al solo efecto del traspaso del oro de la Caja de Conversión al Banco Central y no significa desde luego que ello sea la paridad legal que pueda tener mañana nuestro peso papel.

Lo ha explicado muy bien el señor ministro en un reportaje aparecido en «La Nación».

Cuando el gobierno ha comprado en el mercado libras oro a \$ 25, es absurdo pensar que las entregue en propiedad al Banco Central a un precio inferior porque en el caso se trata de una mercadería y sería absurdo que esta se enajenara por un valor inferior al que tiene. Me parece que es inadmisibles admitir que, porque el metálico de la Caja de Conversión haya sido adquirido al precio de \$ 11,45 la libra oro, se transfiera a ese precio anterior esas li-

bras, cuando ahora, las que tiene depositadas el gobierno en Londres, le han costado \$ 25. Son cosas de una claridad y una evidencia que solamente hay que estar obcecado para no comprenderlo. El más modesto comerciante de los alrededores de la ciudad no vendería a mitad de su precio actual, mercadería que hubiera comprado con anterioridad a bajo precio, cuando puede venderlas a su nuevo valor, haciendo una apreciable ganancia.

La «Revista Económica» del Banco de la Nación, cuyo número último ha aparecido hoy, trae una serie de antecedentes sobre estos proyectos que son una contribución muy estimable a su dilucidación y entre ellos un estudio sobre el balance hipotético de la Caja de Conversión y su pase al Banco Central, de gran claridad, y cuyo análisis no resisto al deseo de hacer ante la Honorable Cámara.

¿Cuál sería el último balance hipotético de la Caja de Conversión? De un lado tenemos un activo oro avaluado a la antigua paridad, 561.000.000 de pesos; redescuentos, es decir, los papeles comerciales que han servido para emitir billetes respaldado por los mismos 212.000.000; títulos del Empréstito Patriótico, 145.000.000; descubierto de billetes sin garantía, es decir, el saldo de las viejas emisiones anteriores a la ley 3.871, 293.000.000. Total, 1.211.000.000.

¿Cuál es el pasivo? El pasivo está constituido por los billetes en circulación, también 1.211.000.000.

¿Cómo sería, entonces, el balance inicial del Banco Central una vez que se le transfiera esta Caja de Conversión?

En primer lugar, el oro; pero el oro no se lo puede valorar, como hemos dicho, a 11,45 la libra, cuando el público lo paga a 32 pesos en el mercado libre y el gobierno paga 25. Supongamos que el gobierno la avalúa a 25. Entonces ese oro vale 1.061.000.000.

¿Qué otros rubros vienen? Un bono sin interés por 143.000.000 de pesos, que corresponde de los 293.000.000 de billetes sin garantía, de los que se deducen los 150.000.000 de que se hará cargo el Estado como emisión subsidiaria,

que no está a cargo del Banco Central, quedando así un remanente de 143.000.000. Bonos consolidados del Tesoro, 310.000.000; que no son en realidad, sino los títulos del Empréstito Patriótico que estaban redescontados en la Caja de Conversión, que se transforman en bonos consolidados, y además 165.000.000, que se le agregan, correspondiendo a parte de las letras de Tesorería que estaban en el Banco de la Nación y, que son transformadas también en bonos, letras que, en virtud de la ley de organización, le compra el Banco Central al Banco de la Nación. Total del activo, 1.514.000.000.

Rubros del pasivo: capital, 10.000.000; billetes emitidos, es decir; billetes en circulación, 1.025.000.000; total de depósitos, 479.000.000, distribuidos así: Tesorería y Cámara Compensadora, 275.000.000, transferidos del Banco de la Nación, encaje Banco Nación, 100.000.000, encaje de otros bancos, 68.000.000; Instituto Movilizador, 10.000.000 y diferencia de moneda subsidiaria, 36.000.000.

Como se ve, los billetes en circulación a cargo del Banco Central son sólo 1.025.000.000, y si a esta suma le agregamos la parte de moneda subsidiaria a cargo, como se sabe, del Estado resulta que no ha aumentado en un peso la circulación. Es exactamente la misma cantidad que antes circulaba, porque los depósitos, el capital, el encaje del Banco de la Nación, el encaje de los otros bancos, el Instituto Movilizador, la diferencia por moneda subsidiaria, etcétera, son partidas que corresponden a depósitos que están esterilizados en el Banco.

Se ha expresado y con razón que este balance es esquemático. Faltan otros renglones que no se han querido considerar a fin de no introducir en esta explicación mayores complicaciones. Esos rubros son fondo de divisas, depósitos de otros bancos para constituir su efectivo legal, etcétera. Pero ellos no podrían modificar, evidentemente, los movimientos y compensaciones fundamentales.

Lo más interesante de todo esto, es

que al aumentar el valor del oro, éste resulta cubriendo los billetes en algo más del cien por ciento.

El Banco se iniciará en esta forma con una reserva considerable que le permitirá afrontar con todo éxito el problema de la estabilización monetaria cuando llegue el momento oportuno.

¿Que hay en eso un poder expansivo para mañana? El ministro ha explicado bien esta cuestión en «La Nación» de hoy. Es lo mismo que tener miedo porque en un edificio moderno haya mangueras destinadas a ser usadas por los bomberos en caso de incendio, y a algún individuo se le ocurriera abrir todas esas mangueras invadiendo así con el agua todos los lugares cuando ello no es necesario. Es el mismo temor de herirse porque se tiene un arma cargada para emplearla en la defensa.

Es un potencial que se tiene para emplearlo en el momento oportuno. Pero, obsérvese que aun este argumento no tiene ningún valor porque actualmente, si por cualquier motivo hubiera necesidad de aumentar el medio circulante, podría el gobierno hacerlo, ya sea aumentando el redescuento, ya sea con mayor descuento de títulos del Empréstito Patriótico. De manera que yo no veo por qué pueden hacerse observaciones a una institución que es universalmente reconocida como buena y que tiene la ventaja sobre el funcionamiento automático de la Caja de Conversión, de poder ser regulada y dirigida según sean las necesidades del mercado, evitando las bruscas fluctuaciones.

Antes de pasar adelante, y aun a trueque de ser cargoso a la Cámara, abusando de la buena voluntad de mis colegas, quiero hacer presente que este justiprecio del oro no es un invento argentino; no ha entrado en la imaginación fértil del señor ministro de Hacienda el hacer una innovación. El justiprecio del oro se ha hecho en todos los países del mundo civilizado y no podía ser de otro modo, porque si el oro es una mercadería y ese oro ha adquirido mayor valor cuando es traspasado o vendido, no hay ninguna razón de lógica ni de sentido común, que admita que se pueda traspasar o vender a un valor inferior al que en realidad tiene.

Francia ha revaluado su oro. La convención celebrada entre el presidente del Consejo, el ministro de Finanzas y el gobernador del Banco de Francia, con motivo de esa revaluación, lo establece claramente. Helo aquí:

Artículo 1º — El Banco de Francia procederá a la revaluación:

1º De los elementos de su encaje que figuren en su estado semanal bajo los rubros:

«Oro en Francia»;

«Oro libre y disponibilidades en oro, en el extranjero, y plata»;

2º De las divisas que ella hubiera comprado al tesoro público en cumplimiento de la ley del 22 de Julio de 1926 y de la Convención del 24 de Julio de 1926, como también de las cartas del 25 y 26 de Agosto, y 6 y 8 de Septiembre de 1926;

3º De las disponibilidades en oro-plata o divisas sometidas al régimen instituido por la Convención del 16 de Septiembre de 1926, y provenientes de las adquisiciones de monedas, lingotes o divisas, efectuadas por el Banco de conformidad con la ley del 7 de Agosto de 1926 relativa a las operaciones hechas con el objeto de estabilizar la moneda.

Esta revaluación será hecha:

1º En lo que se refiere al oro, a la nueva paridad monetaria, tomando el peso real de las monedas y lingotes, deducción hecha de los gastos de acuñación a la nueva tarifa de la moneda;

2º En lo referente a la plata, según el peso real de las mone-

das, de acuerdo al curso del valor de la plata en el mercado internacional de metales el día de la promulgación de la ley realizando la reforma monetaria, aprobando la presente Convención;

- 3º En lo concerniente a las divisas extranjeras, a su nueva paridad intrínseca, sobre la base del oro.

Art. 2º — El Banco de Francia valuará, sobre la base prevista en el último párrafo del artículo 1º, las divisas prestadas por el Banco para operaciones de pase.

La diferencia entre esta avaluación y el precio fijado en los contratos respectivos para el rescate de las divisas en cuestión, será agregada al mayor valor.

Art. 3º — La cuenta de reserva y amortización instituida por el artículo 5º de la Convención del 21 de Septiembre de 1914, sancionada por la ley del 26 de Diciembre de 1914, será aumentada con la parte de la cuenta anexa de intereses de la cuenta de amortización que deberá volver al Estado en virtud de la modificación hecha el 11 de Marzo de 1918 a la Convención del 26 de Octubre de 1917, sancionada por la ley del 20 de Diciembre de 1918.

Art. 4º — El mayor valor neto resultante de las revaluaciones y avaluaciones previstas en los artículos 1º y 2º antedichos, como también el saldo disponible de la cuenta de reserva y amortización después de efectuada la escritura prevista en el artículo 3º, serán afectados a la amortización integral, en los libros del Banco:

- 1º Del saldo de los adelantos temporarios consentidos por el Banco al Estado, en cumplimiento de las leyes del 5 de Agosto y 23 de Diciembre de 1914, 10 de Julio de 1915, 16 de Febrero y 4 de Octubre de 1917, 5 de Abril y 7 de Junio de 1918, 5 de Marzo y 17 de Julio de 1919, 15 de Abril, 27 de Junio, 23 de No-

viembre y 4 de Diciembre de 1925;

- 2º De la suma de 1.349.601.215 fr. 22 cts. a imputarse sobre la suma de 1.401.549.429 francos, 63 centavos por la cual figura en la cifra del encaje el rubro «oro no disponible en el extranjero»;
- 3º Del saldo deudor de la cuenta provisional instituida por el artículo 3º de la Convención del 16 de Septiembre de 1926, concluida en ejecución de la ley del 7 de Agosto de 1926.

Art. 5º — El exceso disponible será llevado a los libros del Banco como crédito a la cuenta corriente del tesoro público.

¿Quién aprovecha la revaluación del oro? Es evidente que tiene que aprovecharla la colectividad. Así se ha entendido en Francia y en todos los países que revaluaron su oro: la plusvalía neta resultante de la revaluación y valuaciones previstas en los artículos 1º y 2º, en los cuales se establece que el saldo disponible se afectará a la amortización de: primero, del saldo de los anticipos temporarios concedidos por el Banco al Estado; del saldo de ejecución de varias leyes, etcétera. Se establece también que el exceso que hubiera, será llevado a la cuenta corriente del tesoro público. Vale decir, que en Francia ha servido para liquidar deuda pública el aumento del justiprecio del oro.

En Estados Unidos lo mismo. Allí se planteó el asunto de la revaluación del dólar. El presidente Roosevelt sostenía que era evidente que el gobierno debe apropiarse de cualquier suplemento que se produzca en el contenido metálico del dólar. En aquel gran país, que nos ha servido de ejemplo en tantas cosas, al dólar se le ha reducido deliberadamente su valor. En un mensaje del 15 de Enero de 1934, el presidente Roosevelt sostiene que un estudio cuidadoso del problema le había llevado a creer que una revaluación superior al 60 % del valor legal primitivo no respondería a los intereses

públicos y que, en consecuencia, era conveniente que el Congreso fijara en 60 % el límite superior de la revaluación, cuya base mínima ya había sido autorizada por la ley del año 1933. Estos deseos del presidente Roosevelt fueron aceptados por el Parlamento y se encuentran claramente establecidos en la sección 12 de la ley de reserva áurea del 30 de Enero de 1934. Fija los límites dentro de los cuales podía revaluar el dólar, es decir, entre 30 y 60 % de su valor.

La opinión de Roosevelt fué comparada por el entonces gobernador de la Reserva Federal, Mr. Black, quien sostiene el 17 de Enero de 1934 que las utilidades de la revaluación derivadas de la política puramente monetaria del gobierno debían pertenecer al Estado, puesto que el mayor valor del oro que tenían en sus arcas los bancos de la Reserva Federal no había resultado de ningún esfuerzo, trabajo o invención que hubieran realizado esos bancos, sino que provenía de la política gubernamental, de tal suerte que esas utilidades debían ser aprovechadas por el gobierno federal.

El Congreso fijó con claridad el destino de una parte importantísima de estas ganancias al establecer en la sección 10 de la ley de reservas áureas, la creación de un fondo de estabilización de 2.000.000.000 de dólares con el objeto de negociar en oro cambio extranjero y títulos públicos a efectos de estabilizar el valor del dólar.

Esta autorización de negociar con títulos incluyó las posibilidades de comprar y vender obligaciones del gobierno de Estados Unidos en el mercado abierto.

El producido de la revaluación que ascendió a 2.808.000.000 de dólares se distribuyó así: 2.000.000.000 de dólares fueron a constituir un fondo de estabilización, de acuerdo a la autorización ya mencionada de la ley de reservas áureas, y el resto de 808.000.000 de dólares, ingresó directamente a la Tesorería General. Tanto una como otra suma, se encuentran depositadas

en el Fondo General de la Tesorería Nacional.

En síntesis, la ley de reservas áureas de 1934 autoriza al secretario del Tesoro a negociar en oro, cambio extranjero y títulos cuando lo considere necesario para estabilizar el valor del dólar.

Se establece para este fin un fondo de estabilización de 2.000.000.000 de dólares provenientes de la revaluación de la divisa americana.

La autorización establecida en la ley del 12 de Mayo de 1933, por la que el presidente puede reducir el contenido metálico del dólar hasta el 50 % de su peso primitivo, se hace más específica en la ley de reservas áureas de 1934, al disponerse que la revaluación del dólar no podrá exceder del 60 % de su valor original.

En vista de esta autorización el presidente fijó en la proclama del 31 de Enero de 1934 el nuevo peso del dólar en 15 5/21 gramos de oro de 900/1000 de fino, en lugar del 25,8 gramos que contenía el dólar antiguo, lo que significa una revaluación del dólar del 59,06 % de su paridad primitiva.

El 31 de Enero de 1934, el Departamento del Tesoro dispuso la venta de oro para la exportación, toda vez que el cambio de Estados Unidos con las naciones regidas por el patrón oro alcanzara el punto de exportación del oro. Dichas exportaciones serían hechas a los bancos centrales extranjeros que compran y venden oro a precio fijo.

En cuanto a la plata, cabe mencionar la proclama del 21 de Diciembre de 1933, por la que el presidente Roosevelt ratificó el acuerdo londinense sobre el metal blanco. Estados Unidos se comprometió a comprar anualmente 24.421.410 onzas de plata producida en Estados Unidos de las que el 50 % debía convertirse en circulante y el 50 % restante sería retenido en forma de lingotes por la Tesorería como gastos de acuñación y no sería lanzado al mercado, salvo para la acuñación de moneda antes del 31 de Diciembre de

1937. El precio de compra se fijaba en 64 $\frac{1}{2}$ centavos americano por onza.

La ley de compras de plata promulgada por el presidente Roosevelt el 19 de Junio de 1934, dispone, ser la política de Estados Unidos el que la proporción de la plata al oro en sus existencias monetarias sea aumentada con el objeto final de tener y mantener la cuarta parte del valor monetario de dicho stock, en plata. Toda vez que dicha proporción sea menor, el secretario del Tesoro se encuentra autorizado a comprar plata en los momentos y condiciones que considere más razonables y ventajosos para el interés público, pero a un precio que no exceda de 50 centavos por onza fina para la plata localizada en Estados Unidos el día 1º de Mayo de 1934. El secretario del Tesoro está asimismo autorizado a emitir certificados de plata por un valor nominal no menor a la del costo de la plata, comprada según los términos de esta ley.

Lo mismo ocurre en Nueva Zelandia. Incorporaré al Diario de Sesiones un memorándum muy interesante hecho por el ministro de Hacienda de Nueva Zelandia sobre el incremento del valor del oro, que parece escrito especialmente para nosotros, y en el que se exponen una serie de razones por las que resulta evidente que esa ganancia debe corresponder al Estado.

Helo aquí:

Ganancias sobre las reservas áureas

«*Primero:* Con el fin de aclarar la situación respecto a las ganancias sobre las reservas áureas, me gustaría llamar la atención en el hecho indiscutible que la emisión de circulante, ya sea en la forma de billetes o moneda, es una prerrogativa del Estado. Se concedió el derecho de emisión a nuestros bancos comerciales, pero ese derecho está sujeto a un impuesto y a ciertas condiciones respecto a la redención en oro amonedado. Tal derecho de emisión es un asunto completamente ajeno a los bancos comerciales que en la mayoría de los países se desenvuelve sin

él. Además, es un principio reconocido que el valor de la unidad monetaria y la política monetaria, son asuntos a determinarse íntegramente por el Estado, que debe hacer frente a todas las pérdidas que se produzcan, así como a las ganancias que emerjan de la misma.

«Cualquiera ganancia que pueda obtenerse de la venta de nuestras reservas de oro, o surge, no ya de los bancos, sino de la Gran Bretaña a raíz de su abandono del patrón oro, y de la depreciación de la moneda neozelandesa en términos de la libra esterlina, que constituyen asuntos de política monetaria. El premio del oro comparado con el valor par, constituye la medida de la depreciación en el valor de los billetes. Esta depreciación ha sido a expensas de la población y no de los bancos. Sigue de esto, que cualquiera ganancia que provenga de las reservas áureas a raíz de la acción gubernamental, debe ingresar al Estado, que representa a la totalidad de la población.

«*Segundo:* El valor del oro en libras esterlinas en Londres es aproximadamente de 130 chelines por onza fina. Medida en moneda neozelandesa el valor es aún mayor. Las regulaciones de la Casa de Moneda disponen que un soberano debe ser una moneda de oro que pese 123,27447 granos, de 22 quilates, o sea 11/12 de fino, que es equivalente a 113,000157 granos de fino.

«Existen 480 granos de oro en la onza, de tal modo que una onza de oro standard servirá para acuñar 3.894 soberanos, cuyo valor en soberanos iguala £ 3,17 chelines, 10 $\frac{1}{2}$ peniques por onza. Esto es, sin embargo, para 22 quilates oro, mientras que el oro fino es de 24 quilates. Así, a la tasa de acuñación el oro fino sería aproximadamente de 85 chelines por onzas. Es con esta última cifra que debería compararse el tipo de cotización del mercado para el oro.

«*Tercero:* Bajo la legislación bancaria permanente de Nueva Zelandia (véase la ley bancaria de 1908) se exige a cada uno de los bancos de emisión el rescate de sus billetes a la vista en oro.

«*Cuarto:* Los estados publicados para

el tercer trimestre de 1933, muestran que los billetes emitidos llegan a libras 6.145.203, mientras que el oro amonedado y en lingotes, suma £ 5.076.254, de los que £ 600.000 corresponden a las monedas de plata.

«*Quinto:* Bajo la legislación especial de la guerra (la ley bancaria reformada de 1914), se establecieron disposiciones por las que el gobernador general en Consejo, puede de tiempo en tiempo declarar por proclama, que los billetes de cualquier Banco tendrán durante el periodo limitado por dicha proclama, curso legal en cualquier sitio de Nueva Zelandia, y que durante la validez de dicha proclama, los billetes del Banco referido, serán inconvertibles. Antes de realizar tal proclama, el gobernador general puede requerir de los bancos la otorgación de una garantía adecuada, por la que se comprometan a pagar sus billetes en oro a la vista, después de terminado el periodo establecido en la proclama. Esta legislación ~~bancaria~~ establecía, que en el caso de falta de pago por cualquier Banco de emisión, el ministro de Finanzas pagaría los billetes en oro cuando estos fueren presentados. Así, cuando se dispuso que los billetes tuvieran curso legal, los tenedores de los mismos, tenían aún la promesa de la convertibilidad final en oro amonedado a su valor nominal y como la ganancia sobre el oro surge únicamente de la abrogación de dicho derecho, es claro que tal ganancia fuera a la totalidad de la población en lugar de ir a los bancos.

«*Sexto:* De ahí que los bancos comerciales no tienen ningún derecho legal establecido respecto a la continuación de la inconvertibilidad de sus billetes. La presente proclama expira en 1935, pero contiene disposiciones especiales para su terminación con anterioridad a dicha fecha si se establece un Banco de reserva.

«*Séptimo:* Durante el periodo cubierto por la proclama se prohíbe la exportación de oro (que no fuere el oro amonedado), a no ser que estuviere especialmente autorizado por el minis-

tro de Finanzas (véase la ley de reforma bancaria de 1914, sección 6). La razón de ello es que como el gobierno ha garantizado la convertibilidad áurea, es esencial asegurar que el monto equivalente de oro sea retenido en el país.

«*Sigue de esto,* que las existencias de oro de los bancos deben considerarse como reservas especiales contra los billetes emitidos y no como parte del activo general de los bancos.

«*Octavo:* En vista del hecho que la totalidad del oro amonedado y en lingotes retenidos actualmente por los bancos comerciales, es actualmente menor que los billetes emitidos, es perfectamente claro que si el gobierno removiera la proclama, los bancos estarían muy pronto en la situación de tener que pagar la totalidad de sus actuales existencias de oro, dando un soberano por cada libra papel presentada al canje. Aun si la posición actual quedara mantenida y no se estableciera ningún Banco de reserva, los bancos podrían desenvolverse únicamente en la suposición que se permitiera hacer caducar en cualquier momento las regulaciones temporarias de la guerra, y por consiguiente, además de la necesidad de proteger la garantía gubernamental fuera menester mantener en el país sus existencias áureas actuales.

«En esta forma, ellos no podrían obtener ninguna ganancia de su disposición.

Es claro, pues, que cualquiera ganancia que surgiera de la disposición de las existencias actuales de oro, está sujeta a la acción gubernamental en cuanto al establecimiento de una legislación permanente que mantenga los billetes como curso legal.

«*Noveno:* El mantenimiento de las existencias áureas era parte de la obligación establecida para los bancos en retribución del derecho de emisión que le fué concedido por el gobierno. El derecho de emitir circulante fué una concesión importante que llevaba obligaciones correlativas. El oro fué considerado como un respaldo de la emisión

de billetes y no como un activo ordinario. Desde que el Estado había garantizado el pago de los billetes en oro, los bancos habían renunciado a la responsabilidad del rescate final de los billetes, y desde luego al derecho de mantener los activos que cubren dicha responsabilidad. Los bancos mantienen la moneda de oro por su valor nominal, y si reciben dicho valor no sufren ninguna pérdida. Cualquiera ganancia que se obtenga se deberá a la acción gubernamental, y pertenece, en consecuencia, al Estado. Ningún caso genuino puede ser presentado por los bancos para participar en esta ganancia.

«*Décimo*: Los expertos mundiales que fueron consultados recientemente en Londres tenían la opinión definitiva de que el oro fuera tomado por el Banco de Reserva a su valor par solamente, y cuando en principio el Estado recibiera cualquiera ganancia o pérdida proveniente de la operación.

«*Undécimo*: En Inglaterra y en Francia las ganancias que resultaron en las reservas áureas como frutos de la legislación monetaria, fueron apropiadas por el Estado, sin ninguna duda. Esta es una regla bien establecida y que se encuentra expuesta más ampliamente en el apéndice que se agrega a la presente.

«*Duodécimo*: La Delegación del Oro del Comité Financiero de la Liga de las Naciones recomendó la concentración de todo el oro monetario en las reservas de los bancos centrales, y que, en aquellos países en que el oro se encuentra guardado en las arcas de los bancos privados, se tomarán medidas tendientes a reformar dicha práctica. La misma delegación manifestó que una economía apreciable podía efectuarse si todo el oro amonedado, las existencias áureas mantenidas contra certificados correspondientes, y el oro inmovilizados en los bancos comerciales se hiciera disponible para desarrollar su propia función en el mecanismo monetario actual. El oro sería retirado a las reservas de los bancos centrales y reemplazado por billetes.

«*Décimotercero*: Finalmente, puedo decir que se ha manifestado en nombre de los bancos, que sus existencias de metal amarillo son superiores a lo que les corresponde mantener según la autorización legal. La legislación permanentemente establece *inter alia* que los billetes en circulación no deben exceder el total de la moneda, lingotes y títulos públicos, ni más de tres veces el monto del oro mantenido en Nueva Zelandia. Esto ha sido mal interpretado en el sentido de que las existencias áureas pueden ser un tercio de los billetes emitidos. Las disposiciones estatutarias mencionadas se refieren a los billetes emitidos y, como tales, deben tomar en consideración, no solamente la emisión actual realizada en cualquier momento, sino también la posible emisión que provenga de las fluctuaciones del crédito. Aquí puedo decir que no es posible desenvolver el negocio bancario sin mantener reservas en efectivo, que en Nueva Zelandia consiste en los propios billetes que el Banco aun no ha emitido, pero debe decirse que con el fin de poder estar en una posición de emitir billetes adicionales, los bancos deben mantener un respaldo supletorio de oro. El monto de esta cubierta áurea adicional fué decidida individualmente por cada Banco, y como el oro es un activo muerto, la presunción es que los montos respectivos no estaban por encima de lo que se consideraba en cada caso un margen seguro. En este punto, es asimismo de interés observar que desde 1914 la emisión de billetes se ha triplicado, mientras que el oro amonedado y en lingotes es, aproximadamente, igual a 1914.»

En Francia también se revaluaron las existencias áureas.

La plata fué revaluada en el precio que regía en Londres, menos 15 por ciento. Las ganancias computables en Francia alcanzaron a la suma de 16.710.000.000 de francos y se aplicaron así: en pago de adelantos temporarios hechos por el Banco al Estado, 14.000.000.000; en pago de la deuda del Estado al Banco por el oro

depositado en el exterior a cuenta de la deuda pública, 1.350.000.000, y como liquidación de las pérdidas contables en el cambio extranjero comprado para la estabilización, 360.000.000.

El saldo fué acreditado en la cuenta del gobierno mantenida con el Banco de Francia.

En Bélgica también ha habido justiprecio de oro. La estabilización se realizó en Octubre de 1926 y la totalidad de la ganancia fué de 1.824.000 francos, obtenida en las existencias áureas y en el cambio extranjero.

En Italia, el caso ocurrió en 1927. Se aplicaron 4.227.000.000 de liras sobre una ganancia total de 5.368.000.000 a la extinción completa de los adelantos bancarios otorgados al Estado, vale decir, que fué hecha exclusivamente en provecho del Estado.

Lo mismo ha ocurrido en Yugoslavia, en Rumania, en Bulgaria, etcétera, en todas partes del mundo civilizado. En Perú... No quiero fatigar la atención de la Cámara porque esto sería interminable.

Sin embargo, las catilinarias nos siguen lloviendo sobre esta cuestión del justiprecio del oro. No necesito insistir en levantar este cargo que continuamente se formula: se cree o se considera responsable al gobierno de la depreciación que ha sufrido nuestro papel. No se quieren ver los hechos y se vive en la fantasía al no aceptar que es absolutamente imposible que una moneda que ha perdido una cantidad apreciable de su valor, vuelva a readquirir su paridad anterior. Los inconvenientes de la depreciación ya se han sufrido; el reajuste económico ya se ha operado, y en cambio, la valorización de esa moneda traería inconvenientes incalculables, porque provocaría nuevos reajustes y nuevas e ingentes injusticias económicas.

Un ex ministro de Bélgica, Luis Franck, justamente hace presente eso. Hay que hacer una distinción muy simple: «si un billete de Banco no se ha depreciado más que un 15 ó 20 % — dice —, y aun excepcionalmente el

30 %, hay alguna probabilidad de que esa moneda se levante y vuelva a la par. Es lo que se ha visto en 1918 en Inglaterra.» Pero aquí yo hago una observación porque este libro ya tiene algunos años. Cuando Inglaterra con tantos esfuerzos levantó el valor de su moneda, fueron tales las consecuencias desastrosas de esa valorización artificial de la libra, y sobre todo su repercusión en orden al aumento de la desocupación por las condiciones desiguales en que tenía que luchar la industria británica en la competencia internacional, que, como es de pública notoriedad, en el año 1931 el gobierno inglés se vió obligado a aflojar los resortes y dejar que la libra se divorciara de su antigua paridad.

«Y es lo que ocurrió también — sigo leyendo a Franck — en Estados Unidos después de la guerra de Secesión. Sí, por el contrario — dice este ex ministro y ex gobernador del Banco Nacional de Bélgica — la baja ha podido continuar mucho tiempo, a tal punto que la moneda no valía más que 25 ó 30 por ciento de su valor, no hay ningún ejemplo de que un billete de Banco haya vuelto de nuevo a la par». Y eso es lo que ha ocurrido en todo el mundo civilizado, y los mismos ejemplos de los países que han querido levantar la moneda artificialmente prueban la ineficacia y el absurdo de querer desandar los caminos ya vividos.

He visto por ahí en algunos editoriales que se habla de que la moneda se podría valorizar bajo este régimen de inconvertibilidad, ya que no disminuyendo su cantidad, dejando actuar la acción de las fuerzas naturales; que el aumento de población, el aumento de transacciones, el progreso del país, harían necesaria mayor cantidad de circulante y, por lo tanto, si no se le añadía ninguna cantidad adicional al monto actual, ese peso papel aumentaría su valor intrínseco, como ocurrió con las viejas emisiones anteriores a la ley de conversión, antes del funcionamiento de la ley 3.871. En algún momento, el oro llegó a valer 500 y por el aumento de la población y de la riqueza.

la cantidad de circulante se fué acercando a las necesidades reales y fué entonces aumentando su valor hasta llegar a 227, a 220, con relación al oro, hasta que la ley de conversión le fijó definitivamente el *plafond* del que no podía pasar de 227.

Se mantiene ahora ese espejismo creyendo en la semejanza de las condiciones actuales. Pero se olvida que entonces el crecimiento del país, era rapidísimo, que venían al país día a día grandes corrientes inmigratorias, que comenzaban a desarrollarse las industrias y aflúan capitales. Pero, ¿cuál es la modalidad de la economía actual? Es una economía de compartimientos; estamos prácticamente bloqueados, y realizamos una verdadera y titánica lucha para colocar nuestros productos en el exterior y mantener los mercados tradicionales que cada día o se nos achican o se nos cierran. ¿Cómo puede pensarse, entonces, en un salto rápido en el progreso del país que permita que la moneda se valoreice por sí sola? Es absolutamente imposible, aparte de los inconvenientes de todo orden que, como queda dicho, produciría el nuevo reajuste económico en las adaptaciones ya hechas.

El otro procedimiento, de disminuir el medio circulante rescatándolo por medio de impuestos, es imposible en este y en todos los países. Justamente iba a dar un ejemplo que el señor ministro conoce perfectamente. Antes de la lucha del franco de Poincaré, no sé si fué el ministro Marzal quien pretendió valorizar el franco francés estableciendo en el presupuesto una partida de 2.000.000.000 por año para ir rescatando el circulante. El procedimiento era algo parecido a lo que ideó nuestro gran Pellegrini cuando proyectó la parte substancial de la ley de conversión, que nunca se llegó a cumplir, estableciendo una serie de recursos fiscales para ir rescatando con su producido, año a año, el papel inconvertible. Pero los hechos son más poderosos que la voluntad de los hombres: Francia tenía, en vez de superávit, déficit y déficit de gran magnitud, y era imposible luchar contra el déficit, era imposible luchar

contra la legión de funcionarios, era imposible luchar con las regiones devastadas que era necesario reconstruir, y esa ley fué completamente ineficaz e inoperante porque en vez de poder rescatar el papel abundante, los déficit impelían al Estado a fabricar más. En cambio, cuando el gobierno francés, bajo la dirección de Poincaré, autorizó a la Banca de Francia a comprar todo el oro y las divisas extranjeras, lo que aparentemente pareció una inflación porque la máquina de imprimir billetes siguió funcionando, no lo era, en realidad; y ocurrió este fenómeno paradójal a primera vista: el franco se valorizó. Porque sucedió una cosa muy sencilla: cuando la Banca de Francia compraba divisas extranjeras, éstas correspondían a capitales que se repatriaban, a disponibilidades de los franceses en el exterior o a capitales que querían ingresar al país; una vez que la Banca de Francia había comprado esas divisas acreditaba a la Banca vendedora ese crédito en sus libros; pero como en la Banca de Francia, al igual que nuestro futuro Banco Central, los depósitos no gozan interés, no era una operación conveniente para el banquero y entonces éste, daba orden a aquélla de comprar los títulos del gobierno que le daban un interés del 2 ½ o del 2 %. Como el cajero del Estado francés es el propio Banco de Francia, compraba esos títulos en el mercado y le acreditaba su importe al gobierno, disminuía el anticipo que había hecho la Banca de Francia al gobierno, a medida que aumentaban estas acreditaciones.

Ya se ve cómo los hechos son superiores a las previsiones de los hombres y cómo el curso de los acontecimientos lleva a los pueblos a finalidades mejores que las que se habían propuesto.

Los creadores de nuestra Caja de Conversión no tuvieron posiblemente la visión exacta de la gran institución que establecían, y los expertos del gobierno francés posiblemente no midieron tampoco las consecuencias favorables de las operaciones que habían proyectado para evitar la caída cada vez más pronunciada del franco. Yo tengo mucha fe en que esta ley de ordenamiento monetario

y bancario produzca en nuestro país efectos mucho más grandes y más saludables que los que sus propios y bien inspirados autores han tenido en vista.

Y sigo con el Instituto Movilizador. Yo tendría muchas cosas que decir, pero veo que el tiempo ha pasado con una rapidez, que, para mí, desde luego, será mayor que para la buena voluntad de los que me escuchan, y esto me obliga a abreviar.

Ha llegado el momento de explicar con precisión el funcionamiento del Instituto Movilizador, siguiendo paso a paso las disposiciones de esta ley. ¿Para qué se crea el Instituto? Para comprar los activos inmovilizados de los bancos, ya sean éstos créditos congelados, tierras y demás inversiones, y liquidarlas en forma gradual y progresiva. Ya he dicho que en realidad la congelación de los créditos bancarios argentinos es muy inferior, proporcionalmente, a la de otros países.

¿Qué fines se persiguen con esta adquisición? Primero, aliviar y hacer líquida la situación de los bancos, asegurando al mismo tiempo a los depositantes y haciendo posible el funcionamiento de la ley de bancos. La ley de bancos es un complemento indispensable del Banco Central. Todo esto forma un plan orgánico y es una sola e indivisible estructura. Sin liquidez bancaria no es posible aplicar la ley; y sin ésta, no es posible el funcionamiento del Banco Central. El organismo se resiente si cualquiera de las piezas constitutivas de esta construcción dejara de establecerse.

¿Cuál es el segundo propósito? Aliviar a los deudores, que a raíz de la depreciación económica se encuentran imposibilitados de cumplir sus compromisos.

Sobre esto de acreedores y deudores se ha escrito mucho. Ya dije al comentar los decretos del 28 de Noviembre de 1933, que la política universal ahora, es la de aliviar a los deudores. No digo que no habrá casos en que la gente haga inversiones indebidas o malgaste su dinero, pero son las excepciones. Pongo el caso de la gente

que trabaja en este país y que, dedicada a cualquiera industria, ha tenido que contemplar la caída catastrófica de los precios. Por ejemplo, un estanciero ha contraído una deuda de cien mil pesos cuando sus novillos valían cien, y tiene que pagarla cuando éstos valen setenta; evidentemente, tendrá que emplear una mayor cantidad de novillos para pagar esa misma deuda. En algún caso lo podrá, en otro se produce la caída.

La gente se olvida de un hecho capital, porque no solamente ha ocurrido la guerra mundial que todo lo trastornó, no sólo ha venido esta floración de las economías nacionales que han convertido a los países en estancos, creando barreras invencibles, sino que se ha trastocado así todo el intercambio. Además, hay que tener en cuenta que se ha producido un progreso técnico extraordinario. Desde el año 1926 hasta el presente, se ha multiplicado la utilización de las fuerzas de la naturaleza movidas por la inteligencia humana. Así como cuando se inventaron las máquinas de tejer e hilar, como cuando se inventó las de vapor o la electricidad, se fué pasando de un sistema a otro para no provocar un trastorno fundamental, análogamente el progreso galopante de la técnica ha traído consecuencias enormes e inesperadas en esta época, que significan una verdadera revolución y que plantean con urgencia la modificación y adaptación del sistema económico que vivimos. El mundo sabe producir admirablemente, pero no ha resuelto el problema de la circulación ni de la distribución de la riqueza. Existen grandes masas sin capacidad adquisitiva, hay subconsumo y la consecuencia de esto es la actual crisis.

Sr. Pena. — El señor diputado está haciendo una crítica a fondo de la economía capitalista.

Sr. Martínez. — Soy un neocapitalista, vivo a la hora y critico lo que sinceramente creo criticable.

Sr. Pena. — Su crítica al sistema capitalista es exacta.

Sr. Martínez. — Yo podría leer algunos conceptos del libro de un economista alemán, Stuerdmann, titulado *La crisis industrial*, que hace una descripción magnífica de la situación, pero no lo haré por razón de la hora avanzada.

Tendremos que contemplar en el Parlamento argentino todos estos problemas, porque no podremos hacer como el avestruz que entierra su cabeza en la arena para huir del peligro. Las cuestiones una vez planteadas hay que resolverlas.

Mi crítica iba a esto: no es el caso de decir simplemente que en la Argentina los bancos fueron mal administrados, que hubo despilfarros, que hubo incapacidad, los deudores se fueron a Europa y tiraron la plata por la ventana, etcétera. Habrá seguramente algunos casos sensibles y muy dignos de crítica, pero son la excepción. Lo importante es que hay causas universales que contemplar como la caída vertical de los precios y no es posible que cuando en todas partes hubo que aplicar medidas drásticas, cerremos nosotros los ojos a esa evidencia y digamos que aquí no ha pasado nada, que todas las cosas están bien, que hay que resucitar la Caja de Conversión y seguir adelante; o, cuanto más, hacer como se ha dado en decir: «si ustedes al Banco de la Nación le ponen un directorio autónomo, hacen un Banco mixto de accionistas, y le entregan la Caja de Conversión», tienen ya el Banco Central y no necesitan preocuparse de este proyecto, porque con ello no se salvan las dificultades próximas e inevitables y comenzaríamos la construcción por los techos en vez de los cimientos.

Me he referido a la necesidad de aliviar a los deudores que a raíz de la depresión económica se encuentran imposibilitados de cumplir con sus compromisos. Por el artículo 4º del despacho, el Instituto podrá pagar los bonos, parte en efectivo y parte en bonos nominales amortizables. Ya he dicho que desde el punto de vista jurídico la venta es perfecta. El precio

se paga, parte en efectivo y parte en bonos nominales amortizables, que no son redescontables, como ya he repetido. ¿De dónde toma los recursos el Instituto Movilizador? De su fondo inicial de reservas que, según el artículo 3º, se formará lo mismo que los 10.000.000 de capital, con los fondos resultantes de la transferencia al Banco Central del oro de la Caja de Conversión, o, en otros términos, con la diferencia proveniente del precio del oro, a que me he referido.

Una vez que el Instituto haya examinado prolijamente los activos congelados que los bancos le ofrezcan en venta — porque es facultativo de los bancos el ofrecer y es facultativo también del Instituto el aceptar o rechazar lo que le ofrezcan los bancos, — la Comisión Organizadora, de acuerdo con el artículo 12 de la ley de bancos determinará el monto definitivo de la reserva del Instituto. Pongamos un ejemplo, siguiendo las cifras que nos ha dado el señor ministro de Hacienda. La reserva inicial estará formada por los 500.000.000 del justiprecio del oro. Si después del examen resulta que el Instituto requiere disponer en efectivo de 280.000.000, esta cantidad constituirá la reserva definitiva del Instituto. Quedará, así, un saldo de 220.000.000, del que se tomará 10.000.000 para capital del Banco Central y 10.000.000 para el capital del Instituto Movilizador. Los 200.000.000 restantes, de acuerdo con el artículo 13 de la ley de organización, serán transferidos al gobierno nacional que los destinará a amortizar su deuda flotante bancaria. Volvamos ahora al Instituto. ¿Qué hace con esa reserva de 280.000.000? En primer lugar, adquiere del Banco Central los 212.000.000 de documentos redescontados, con los cuales pagará a los bancos una parte de los activos congelados que adquiriese. Desde luego, que es igual que el Instituto haga esto o que pague esos 212.000.000 en efectivo a los bancos, obligándoles a rescatar el redescuento. He dicho 212.000.000 de documentos porque es la cifra última. El señor diputado por

la Capital sabe que varía de 180, 190, a 200.000.000, y aun más.

Tomemos un caso práctico. Un Banco tiene 100.000.000 de activo congelado, 15.000.000 de fondo de reserva y 35.000.000 de redescuento; además, este Banco deberá tener un encaje de acuerdo con el proyecto de ley, de 40.000.000; pero apenas tiene actualmente 20.000.000 de pesos de encaje, y debe colocarse en las condiciones de la ley. El Instituto Movilizador le compra entonces los 100.000.000 de activos congelados por un valor de 85.000.000, obligándolo al Banco a amortizar íntegramente con sus reservas esos 15.000.000. ¿Cómo paga el Instituto Movilizador esos 85.000.000 de activo comprado? En la siguiente forma: 35.000.000 con los documentos redescuotados que el Instituto le devuelve al Banco; 20.000.000 transfiriéndole haberes en el Banco Central para que el Banco en cuestión pueda reforzar sus encajes y cumplir con la ley de bancos, porque sólo tiene 20.000.000 en efectivo y debe tener 40.000.000 de acuerdo con la ley; los 30.000.000 restantes en bonos amortizables. Por eso este proyecto de ley no dice la proporción de cuánto debe ser la parte en efectivo y la parte en bonos amortizables con que el Instituto Movilizador pague los activos congelados. Es cosa variable que depende de las condiciones; en cada caso, de las necesidades de cada Banco.

Obsérvese, señor presidente, que ha cambiado fundamentalmente la situación del Banco. Antes estaba sofocado por una masa de 100.000.000 de activos congelados; ahora se encuentra con una situación bastante líquida, representada por 20.000.000 más de encaje y 35.000.000 de documentos rescatados.

Sr. Pena. — El calor oficial licúa la congelación, rápido. Es infalible el procedimiento.

Sr. Martínez. — ¿Cómo se ve que le haría falta el calor oficial para licuarlo!

Sólo los bonos son ilíquidos, y ello carece de importancia, pues basta que

una cierta proporción del activo se descongele para que el Banco recupere su liquidez. El Instituto, por consiguiente, no tendrá por qué precipitarse en la liquidación de esos bienes. Lo hará gradualmente.

¿Cómo distribuirá el Instituto el producido de la liquidación? Ante todo deberán reintegrarse los fondos en efectivo pagados a los bancos en forma de haberes transferidos en el Banco Central o de documentos devueltos, según ya se ha visto. Luego deberá destinar el producto a pagar los intereses y la amortización de los bonos. Será el directorio quien determine la forma en que se hará esta distribución, teniendo en cuenta la situación de cada Banco y la índole de los activos adquiridos por el Instituto. Antes de hacer la distribución se tendrá que separar del producto los fondos necesarios para pagar los gastos del Instituto Movilizador, es decir, su presupuesto.

Hay un punto importante a este respecto. El producto de la liquidación de los activos de los distintos bancos no se confunde en una masa común, sino que se divide, por así decirlo, en distintos compartimientos. Hay un compartimiento para cada Banco, como se desprende claramente del artículo 7º, que la comisión ha modificado para aclarar bien su contenido.

El fin que se persigue con esto es que cada Banco quede estrechamente vinculado a la liquidación de sus propios activos, de manera que si el producto de ésta no alcanza a cubrir el valor de los bonos, sea el Banco en cuestión quien cargue con la pérdida o diferencia.

El reembolso total de los bonos a los bancos a que se refiere el artículo 4º, queda sujeto a la liquidación definitiva de los activos comprados. Esta disposición se complementa con la siguiente del mismo artículo modificado también por la comisión para mayor claridad, y que expresa que los bancos deberán asegurar al Instituto Movilizador el reintegro total de las sumas que hubieran recibido de éste en pago de los activos transferidos.

Véase la diferencia bien marcada entre el Instituto proyectado por el gobierno nacional y el belga, y las otras formas de liquidar los activos congelados en los países europeos a que he hecho referencia. Obsérvese bien, y es bueno destacarlo, cómo los bancos quedan siempre obligados para con el Instituto Movilizador, como no se les traza ninguna raya, sólo se les da mayor liquidez, se les compra el activo congelado pero se le entregan bonos que no son redescontables, que les sirven para su contabilidad; que son, en realidad, certificados de deuda, pero que no los desobligan. No se les pasa tampoco una esponja a los deudores; no se borran las deudas; se les podrá dar un alivio en cuanto a los plazos y forma de hacer sus servicios; pero siguen las mismas obligaciones contractuales que tenían anteriormente con los bancos; aunque estas pueden ser morigeradas ahora.

Es evidente, entonces, que el alivio que se otorga a los bancos no consiste en cargar con sus pérdidas, como alguna vez se ha dicho con alguna precipitación, sino en hacer más líquida su situación y disponer de un tiempo prudente para la liquidación de los activos congelados. Cualquiera pérdida tendrá que ser cargada forzosamente por los bancos y sólo se concibe que el Instituto tenga alguna pérdida en el caso muy problemático de quiebra de algún Banco. También cargaría el Estado argentino, en cualquier caso, con una pérdida similar, aun sin existir el Instituto, en el caso de quiebra de un Banco que hubiese redescontado en el Banco de la Nación.

Pero esta posibilidad de quiebra desaparece prácticamente debido a la misma acción del Instituto que saneará los bancos. Por esta razón y para evitar malas interpretaciones, la comisión ha creído conveniente suprimir al fin del artículo 12, del proyecto de ley de organización, la expresión «destinados a posibles quebrantos».

También debe tenerse presente, en este punto, de las posibles pérdidas de la liquidación, que si las reservas del

Banco que las soporta no fuesen suficientes para enjugarlas, se puede hacer concurrir al mismo fin las ganancias futuras del mismo Banco durante el término que dure la liquidación.

Explicado así el funcionamiento del Instituto Movilizador en lo que concierne a la adquisición de los activos congelados y al alivio de los bancos, analizaremos lo que podrá hacer el Instituto con esos activos.

Si se trata de créditos habrá que considerar dos grandes categorías de casos; deudores que pueden cumplir sus obligaciones si se les extiende el plazo y se les reduce el interés; y deudores que a pesar de estas facilidades no pueden sobrevivir o no tienen capacidad para desenvolver eficientemente sus actividades. En este último caso se impone, necesariamente, la ejecución de los deudores aunque origine pérdidas y el traspaso de sus bienes a personas que puedan trabajarlos con mejores aptitudes. En el primer caso, en cambio, el Instituto deberá otorgar esas facilidades, pues la ejecución de los deudores produciría resultados contraproducentes del punto de vista económico y social.

No es, por cierto, la ejecución la única vía en el caso de los deudores que conviniese liquidar. El artículo 5º, inciso b), faculta, en efecto, al Instituto, a realizar arreglos extrajudiciales con los deudores, recibiendo sus tierras y bienes en pago de los mismos. Este procedimiento permitirá seguramente al Instituto disponer de cantidades apreciables de tierras que junto con las tierras que adquiera directamente de los bancos le permitirá ejecutar un plan de subdivisión y transferencia de esas tierras a familias de agricultores, como expresa el proyecto.

Para ello tendrá que ajustarse el valor de esas tierras a su rendimiento real. De lo contrario se repetirían los fracasos que desgraciadamente ya conocemos con demasiada frecuencia en esta materia. Al realizarse este ajuste las pérdidas emergentes correrán por cuenta de los bancos como ya se ha expresado.

Ahora bien: ¿cómo facilitar la adquisición de esas tierras por agricultores genuinos? Será necesario otorgarles grandes facilidades para su compra, sobre todo después de esta prolongada crisis que los ha dejado exhaustos. Con este propósito el proyecto, en sus artículos 12 a 15, establece las relaciones del Instituto y del Banco Hipotecario Nacional. Ambos podrán convenir préstamos hipotecarios comunes, sobre colonización de las tierras que el Instituto propusiese subdividir y enajenar. Lo interesante a este respecto es que estos préstamos hipotecarios podrán ser realizados en una cantidad apreciable, sin que pueda ser un obstáculo a la limitada capacidad de absorción de las cédulas por la plaza. En efecto, el Instituto está en condiciones de conservar las cédulas recibidas en su poder, a fin de ir las vendiendo gradualmente, sin precipitación alguna. El Instituto puede proceder así porque no tiene mayor apuro en reintegrarse, con la venta de cédulas, los fondos en efectivo que ha facilitado a los bancos, o en pagar la amortización de los bonos. Es claro que todo esto deberá hacerse en combinación con el Ministerio de Hacienda y el Banco Hipotecario, para no perturbar el mercado de cédulas.

En el caso de adquirir la propiedad de otras inversiones distintas de los créditos congelados y las tierras, el Instituto deberá tratar de desprenderse de los mismos concediendo las facilidades de pago necesarias. Lo que no es recomendable, desde todo punto de vista, es que el Instituto entre a administrar esos bienes. La administración sólo se concibe transitoriamente, hasta que se consiga compradores en condiciones satisfactorias, pero no como procedimiento corriente del Instituto. Y aun en estos casos, el proyecto en su artículo 6º dispone que el Instituto no podrá hacerlo por sí mismo, sino utilizando a los bancos o firmas competentes en casos especiales.

Esta disposición tiende a evitar que el Instituto se transforme en una pesada armazón burocrática. El Institu-

to, más que otra cosa, es una comisión liquidadora, que deberá tener el mínimo de personal. De lo contrario se corre el riesgo de que su liquidación se postergue por tiempo indefinido.

Por esta razón se ha juzgado conveniente por el Senado, establecer un plazo de siete años, dentro del cual el Banco Central podrá dar por terminadas las funciones del Instituto, confiando la liquidación y el cumplimiento de los convenios a una comisión liquidadora o a la Inspección de Bancos, del Banco Central.

Esta disposición nos parece muy previsora. La comisión ha creído conveniente introducirle algunas modificaciones. El plazo se extiende de 7 a 8 años, a fin de que se abarque dos períodos completos del directorio, al cual la comisión le fijó duración de 4 años. Y en lugar de la facultad concedida al Banco Central, se dispone terminantemente que el Ejecutivo deberá dar por terminadas las funciones del Instituto, a requerimiento del Banco Central (artículo 19).

Otra de las modificaciones importantes introducidas por la comisión, por iniciativa de la minoría, aceptada por el Ministerio de Hacienda, es que los tres vocales del Instituto serán designados por el Banco Central y confirmados por el Poder Ejecutivo. En el despacho del Senado, un vocal se designaba por el Banco Central, y los otros dos directamente por el Ejecutivo. La modificación consolida convenientemente la autonomía del Instituto.

Las otras modificaciones son de detalle y no requieren mayores explicaciones.

Sólo quiero hacer una reflexión final. Se ha hablado mucho del enorme poder que tendrá el gobierno con el Instituto Movilizador, del cual dependerá la suerte de innumerables deudores y de bancos importantes. Pero no se recuerda que estos bancos y a través de ellos, los deudores dependen del Banco de la Nación. Esta institución ha procedido con gran ecuanimidad; pero es evidente que el poder potencial del gobierno es incomparablemente mayor ahora, dado que ahora nombra inte-

gro el directorio del Banco de la Nación y que cuando los bancos y deudores dependan del Instituto Movilizador solamente el presidente será designado por el Poder Ejecutivo, y todos los directores, en cambio, serán independientes del gobierno.

Señor presidente: Tendría todavía muchas cosas que decir, pero la hora es tan avanzada y tengo una fatiga física tan grande, que me ha de permitir la Honorable Cámara que solamente diga pocas palabras más sobre la Comisión Organizadora encargada de poner en movimiento estas leyes, la que tampoco es una invención del Poder Ejecutivo, ya que estaba en el proyecto Niemeyer.

La comisión deberá proceder a la constitución del Banco Central, a la supresión en el momento oportuno de la Junta Autónoma, de la Comisión de Redescuento y de la Caja de Conversión y al traspaso del activo de la Caja de Conversión, previas deducciones, al Banco Central, menos la emisión menor, al traspaso de las cuentas oficiales, excepto aquellas que el Poder Ejecutivo resuelva separar, como también los fondos de licitación y el fondo de diferencias de cambio y el de divisas.

Respecto de la reforma de la carta orgánica de los bancos oficiales, la reforma trata de darles una independencia cada vez mayor del Poder Ejecutivo, estableciendo que cierto número de directores deberán ser elegidos a propuesta de las instituciones que en la misma se detallan. Se trata con esto de evitar la influencia política aunque es bien cierto que a este gobierno no puede inculparsele que haya permitido la influencia política en las esferas bancarias.

Los otros días recordaba acertadamente el señor ministro de Hacienda en el seno de la comisión, que el actual vicepresidente del Banco de la Nación, en ejercicio de la presidencia, que es un distinguido caballero, el doctor Carlos Alberto Acevedo, es un hombre que no milita en las filas de nuestro partido, sino que es demócrata progresista. Por ello podía apreciarse que no ha

primado nunca un criterio partidario; más aún: las designaciones de directores de los bancos oficiales, solamente por excepción, han recaído en hombres de los grupos políticos que forman la concordancia que sostiene a este gobierno.

Nosotros apoyamos la acción financiera del gobierno que preside el general Justo y que inteligentemente desenvuelve nuestro ex compañero y actual ministro de Hacienda doctor Pinedo. Como miembro de un partido político hemos cooperado a su triunfo electoral; pero el triunfo electoral en sí no significa nada; lo que vale es su gestión administrativa y su obra de gobierno. Este gobierno pasará a la historia por haber tenido que afrontar y resolver problemas bien graves y difíciles y haberlos realizado hasta ahora con gran acierto.

Todavía recuerdo los días angustiosos de los primeros momentos del gobierno, cuando los impuestos estaban impugnados de inconstitucionalidad, cuando los encajes de los bancos se reducían rápidamente, cuando el comercio se hallaba paralizado, cuando la amenaza de guerra en las fronteras era un hecho y cuando la misma estabilidad política no se hallaba consolidada. Todas estas dificultades las ha podido sortear la acción perseverante e inteligente del Poder Ejecutivo, patrióticamente inspirado e inteligentemente orientado, contando con la colaboración desinteresada de los hombres que nos sentamos en este Parlamento, y que abandonamos nuestras comodidades para perseverar en una acción pública constante y sin desmayo. Nuestra conducta clara y leal no puede prestarse a críticas. Hemos contribuido a formar el gobierno, debemos sostenerlo y apoyarlo, sobre todo cuando las soluciones coinciden con nuestra propia manera de pensar o encarar los problemas. Esta colaboración la hacemos patrióticamente; y así como no tenemos inconveniente en discutir públicamente en lo que podemos creer equivocado, tampoco debemos negar ni regatear nuestro apoyo y nuestra colaboración en lo que estimamos útil o conveniente.

Este gobierno ha tenido y tiene la constante preocupación de las finanzas públicas. Los déficit presupuestales son insignificantes. El mejoramiento del régimen tributario es una realidad. La unificación de los impuestos una gran conquista últimamente alcanzada.

Este gobierno se ha preocupado también intensamente de la economía nacional. La suerte de los agricultores no la ha sido indiferente. Los decretos de 28 de Noviembre de 1933 fueron en su hora el «levántate y anda» a nuestras industrias rurales exhaustas, y un estímulo a los trabajadores del campo, desalentados.

Hoy complementa su obra abordando el régimen monetario y bancario, cuyo ordenamiento permitirá al país encanzarse definitivamente en el sendero de la recuperación sin mayores inquietudes.

He colaborado en muchas de aquellas obras y apoyo decididamente estas últimas, porque los proyectos monetarios y bancarios del ministro Pinedo los creo no sólo convenientes para el país sino imprescindibles, y, completando una frase feliz que él dijera en esta Cámara

al recordar los jalones del sistema financiero argentino, diré también que cuando se escriba la historia de estos días vividos intensamente en la preocupación de los graves problemas financieros y económicos que afectan a la Nación; cuando se palpen las bondades de las soluciones preconizadas y se aprecie toda la intensidad de la obra constructiva realizada, se hará merecida justicia a su nombre y su paso por la función pública no será el paso sin huella de los que nada construyen o el estéril y contraproducente de los que todo lo derriban, sino el fecundo y promisor de los que siembran las ideas y crean instituciones llamadas a perdurar en el tiempo! (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos. El señor ministro de Hacienda y varios señores diputados rodean y felicitan al orador.*)

Sr. Presidente (Ferreira). — No haciéndose uso de la palabra tendría que procederse a votar, pero como no hay número, queda levantada la sesión.

—Era la hora 22 y 43.